

Democracia:

Poder popular o corporaciones

ISBN

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

INDICE

PROLOGO - Ricardo Forster	5
PROLOGO - Carlos Polimeni	9
Introducción	11
Capítulo I	
Democracia Argentina: Entre el poder Popular y el poder de las Corporaciones	17
Lo económico, una razón más para la continuidad	19
El orgullo por las pecheras	22
No son hechos aislados del 18A a la represión en el Hospital Borda	25
¿Qué es un cambio de paradigma? (I)	28
¿Qué es un cambio de paradigma? (II)	31
¿Qué es un cambio de paradigma? (III)	34
La palabra como institución	37
¿Qué significa vamos por todo?	40
Lo que está en juego	44
Listas negras: el genocidio cultural	47
Fútbol y capitalismo financiero	52
Inseguridad, entre la realidad y la demagogia	55
La batalla central por las creencias (I)	58
La batalla central por las creencias (II)	60
La batalla central por las creencias (III)	63
Los saqueos y sus distintos planos de análisis	66
“Precios cuidados”, el empoderamiento de la ciudadanía	69
Economía Social, Autonomía y Felicidad Cultura y modelo de Democracia	72
La economía social, bastión de la batalla cultural	
La declinación del capitalismo vista en clave lógica, no sólo ideológica	75
Economía social, popular y solidaria	
La declinación del capitalismo vista en clave lógica, no sólo ideológica	78

Desarmar el discurso del poder (I)	82
Desarmar el discurso del poder (II)	86
Desarmar el discurso del poder (III)	88
Farándula y default de la política	92
Hacia una ley de Agricultura Familiar	94
Hacia un sistema integrado de salud	97
Afianzar acuerdos entre el trabajo y el capital nacional	100
El republicanismo hipócrita es el golpismo de siempre	102

Capítulo II

El desafío regional y la amenaza de la restauración	107
La muerte de un hermano	109
La dimensión humana	110
Lo que está en juego para la región	111
El dilema europeo	113
Venezuela en la contienda mundial	116
Manual del colonialismo post-moderno	118
Profundizar la integración: si no es ahora, ¿cuándo?	119
La presidenta forma agenda desde la dignidad de un país	122
Dominación y emancipación	126
Palestina: crónica del apartheid	131
El desafío es nuestro	134
Contradicciones del Norte	136
Hacer de una dificultad una epopeya	138
Fondos Buitre (I) La disputa entre dos modelos de gobernanza global	139
Fondos Buitre (II) La disputa de mediados de los '70	143
Fondos Buitre (III) Primera fase del ajuste estructural	146
Fondos Buitre (IV) La dimensión planetaria del conflicto	148
Fondos Buitre (V) Las posibilidades que abre el futuro	150
Los hechos de Cuba y su contexto (I)	153
Los hechos de Cuba y su contexto (II)	155

PROLOGO

El pasado, el presente y el futuro no son simples formas verbales que nos sirven para describir la temporalidad de una acción; son, a su vez, los núcleos de un antiguo litigio que atraviesa la vida social allí donde los relatos que le dan sentido a nuestra travesía por el tiempo surgen de las distintas maneras, muchas veces antagónicas, de entender lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando y lo que nos puede llegar a pasar. Así como no hay una mirada histórica neutra tampoco hay una intervención sobre los sucesos del presente que pueda ser despojada de su intencionalidad. Todo relato supone, lo diga o no, lo sepa o no, una elección y un recorte que redefine nuestra comprensión del pasado y nuestra imaginaria aproximación hacia el futuro. Una antigua batalla por el sentido atraviesa la vida histórica y se corresponde con la puja por la hegemonía cultural (derechas e izquierdas, sus políticos y sus intelectuales, siempre lo han sabido). No hay proyecto de Nación sin un relato que le imprima a su itinerario un desde dónde y un hacia dónde.

El problema no pasa por aceptar o no este mecanismo cuasi literario sino en creer que el relato todo lo puede ante una realidad que nada tiene que ver con lo que ese mismo relato señala como supuestamente verdadero. No hay proyecto que se sostenga sólo y exclusivamente amplificando, a los cuatro vientos, una ficción histórica o una virtualidad que nada tiene que ver con la materialidad de la vida real. Es absurdo pretender sostener un modelo de país a través de una fábula, por más brillante que esta pueda ser, expuesta a los ojos de la opinión pública sin ningún correlato con la realidad y sin haber provocado cambios sustanciales en la sociedad. El relato puede darle espesura y sentido a una etapa histórica y habilitar los complejos y muchas veces enigmáticos mecanismos capaces de promover la empatía entre un proyecto político y amplios sectores populares. Pero lo que no puede hacer es inventar aquello que no existe, ni darle entidad verídica a lo que sale de la galera del mago. En todo caso, cada época busca encontrar el pasado que le resulta más verosímil y, políticamente hablando, más pertinente para sus necesidades y sus disputas.

Inicio este breve prólogo al libro de Carlos Raimundi haciendo una referencia a las complejas y siempre laberínticas relaciones entre el presente y el pasado, porque considero que las páginas que el lector tiene delante de sí constituyen un vivo ejemplo de permanente interpretación, en clave política, de esas relaciones sin las cuales resultaría imposible descifrar las complejidades de nuestra actualidad. Pero también, y no en menor medida, porque las herencias político-ideológicas del propio Raimundi (su militancia en un radicalismo de matriz progresista proveniente de ese momento decisivo de nuestra historia que fue la experiencia alfonsinista, su ruptura con una tradición que giraba inexorablemente hacia el conservadurismo y la continuidad de sus opciones progresistas que lo llevaron en los últimos años hacia una lúcida comprensión del kirchnerismo y a un involucramiento cada vez mayor en la disputa política de este momento histórico), lejos de haberse disuelto por las intensidades de los cambios que se han producido en nuestro país a lo largo de las últimas décadas se han convertido, gracias a la apertura de espíritu e ideológica del autor, en una potente capacidad para interpretar, comprender e intentar incidir en las luchas políticas de la época.

La escritura de Carlos Raimundi no tiene un sesgo académico ni busca expresar una neutralidad imposible a la hora de analizar la compleja trama que hace a nuestras experiencias locales e internacionales. Sus intervenciones, atravesadas por un lenguaje que mezcla equilibradamente herencias periodísticas, canteras políticas y lecturas teóricas, tiene como principal objetivo participar en el fragor de las luchas que sacuden a la Argentina. Y esto es así, porque Raimundi ha sido y es fundamentalmente un militante político, un cuadro que ha sabido detenerse en los momentos de mayor intensidad y conflicto para dejar que su pluma recuperase la pausa indispensable para el análisis justo sin el cual cualquier estrategia o intervención política carecería de envergadura, de fundamentos y, en última instancia, de solidez para constituirse, como lo son estos textos que conforman el libro, un material indispensable tanto para la militancia como para el lector interesado en comprender mejor los claroscuros de nuestra sociedad.

En este sentido, Raimundi toca temas diversos que, para el lector desprevenido, parecerían un conjunto desordenado de cuestiones que poco tendrían en común; y, sin embargo, un hilo dorado hilvana las distintas reflexiones que van desde la cuestión comunicacional, las nuevas experiencias sudamericanas, los conflictos con las grandes corporaciones económicas, pasando por las transfiguraciones de las oposiciones políticas a meros vasos comunicantes del poder mediático, hasta detenerse, también, en otras cuestiones que involucran los derechos humanos, los debates de teoría política y los desafíos que una perspectiva emancipatoria tiene en épocas de hegemonía neoliberal. Un libro, en definitiva, que constituye una excelente brújula orientadora para pensar mejor y más agudamente los conflictos centrales de nuestra sociedad en una época signada, como bien lo señala el autor, por la imprescindible necesidad de tomar partida en la lucha por la igualdad y la emancipación.

Ricardo Forster

marzo de 2015



PROLOGO

El encanto de una época

América Latina vive un siglo XXI repleto de primaveras, luego de muchas décadas en que los sueños de los próceres de las revoluciones del siglo XIX parecían irrealizables, utopías vencidas por el paso del tiempo. Hombres y mujeres de los países que estaban destinados, por las malas políticas, a habitar el patio trasero de los intereses malsanos de un imperio en decadencia, disfrutaban hoy de una era más que diferente. Una era en que las ideas libertarias han vuelto a tener sentido y destino. Habitamos una realidad en que numerosos líderes se parecen más a los mejores deseos de sus pueblos que a aquellos que entregaron sus sociedades atadas de pie y manos a la lógica perversa de los mercados (tanto tienes, tanto eres).

Carlos Raimundi ha escrito los textos que incluye este libro al calor de una época épica, de la que se siente parte y testigo. Como sabe desde siempre que la gran pulseada es entre los intereses de las mayorías y las grandes corporaciones, lo ha hecho con el entusiasmo que acompaña su vida pública desde que era un joven militante dispuesto a perder elecciones pero no convicciones. La política está llena de traidores, sobre todo de traidores de los propios sueños. Pero también, por suerte, repleta de seres humanos dispuestos a ser coherentes en su lealtad a los principios esenciales. Carlos es uno de esos seres humanos, a los que una conocida frase de Bertolt Brecht define como los imprescindibles.

Una variopinta galería de presidentes antes impensables se enseorea hoy en la sufrida América Latina, salvo tristes excepciones. Los pueblos tienen liderazgos antes impensables, desde el caliente corazón de la Centroamérica caribeña hasta las vastas planicies frías del Sur de los sures. Hombres y mujeres que serán legendarios y míticos, como ya lo son algunos de sus pares, actuando, decidiendo, opinando, discrepando, combatiendo, acordando, en escenas que se repiten día a día, como parte de esta película que se desarrolla

en continuado ante nuestros ojos y oídos. Somos testigos de una sucesión de grandes momentos y alianzas sorprendentes que reconfiguran el universo conocido. Esta es la época que genera el libro que usted, generoso lector, tiene entre manos.

Disfrutemos juntos: después de tantas oscuridades es hermoso asistir al momento en que la historia pare amanecer.

Carlos Polimeni

INTRODUCCIÓN

Estás accediendo a un libro que recopila los artículos publicados en diversos medios gráficos (Tiempo Argentino, Página12, Revista “Ni un paso atrás” y Revista “La tecla eñe”) durante los años 2013, 2014 y 2015. Si bien se refieren a temas, en algunos casos de coyuntura, hay entre ellos un hilo conductor vinculado a la llamada “batalla cultural”, esa disputa por el significado de las palabras, por el sentido de las creencias que está librando el campo popular en la Argentina y en América Latina. Lo que sigue es una mera presentación de los nudos de ese hilo conductor que se irán expresando de diversas formas a lo largo de dichos artículos. Desde ya agradezco mucho a Ricardo Foster y Carlos Polimeni por haber accedido tan gentilmente a escribir unas líneas a modo de prólogo.

Los derechos

El kirchnerismo como etapa histórica ha contribuido ya a una profunda conmoción de los paradigmas de sometimiento ejercido históricamente por las clases dominantes.

Y lo ha hecho desde dos vectores principales. El primero, el de los derechos. El incremento de derechos individuales y sociales operado en lo que va de este siglo implica por sí mismo un avance de la conciencia pública, una sofisticación saludable del debate y un salto de calidad en las demandas hacia la política, lo que de por sí constituye un salto de la calidad democrática de la sociedad argentina. El pueblo no se desprende de los derechos conquistados una vez transcurrido un plazo para la consolidación –no sólo económica sino en la conciencia- de esa apropiación. A partir de 1955, el pueblo argentino soportó bombardeos, fusilamientos y proscripciones, pero el régimen no pudo arrancarle una conquista suficientemente arraigada como el aguinaldo.

En paralelo va el avance en la conciencia social que trae aparejada la ampliación de derechos. Tal vez resulte imperceptible desde la dimensión cotidiana, pero es impresionante el cambio cualitativo que significa para una sociedad debatir sobre una restricción cambiaria, el funcionamiento de una operación

especulativa como el ‘contado con liqui’ o los ‘precios de referencia’ manipulados por un pope trasnacional como Procter & Gamble, si se compara estas discusiones con la época en que se cobraba el salario en cuasi-monedas y proliferaban la desocupación y los comedores populares.

La cuestión del poder

En el libro “La democracia liberal y su época”, el canadiense Frank Cunningham señala que una democracia es fuerte cuanto más personas toman parte del debate; es más fuerte en tanto esas más personas discuten de más temas: y, finalmente, esa democracia es más fuerte aún en la medida que esos temas de debate son más importantes. De aquí que el otro vector por el cual se comprueba claramente el avance de calidad democrática del debate público en la Argentina es la centralidad que ha tomado la discusión sobre el Poder.

Esto es lo que ha tornado a la Democracia argentina, de ser una democracia pasiva, despolitizada, una democracia de lejanía, donde el único contacto del pueblo con las principales decisiones políticas era depositar su voto y, a partir de allí, entregarse al mero ‘posibilismo’ de un poder político absolutamente carente de autonomía respecto de los poderes fácticos. Un ‘no-poder’, resignado a hacer sólo ‘lo posible’ dentro del margen cada vez más estrecho que le fueron dejando las directivas del poder real.

El corte histórico que realiza Néstor Kirchner y luego Cristina, es el haber hecho visible a los ojos de todo el mundo una cuestión que por su naturaleza debía permanecer oculta: la cuestión del Poder. Esa capacidad ordenadora de los poderes fácticos se ubicaba históricamente por detrás y por encima de la política. Ponía a la política de ‘máscara’ frente a la sociedad, y, entonces, ante cada fracaso, en la percepción de la sociedad la responsabilidad era de la política, y no del poder. A lo que había que desacreditar era a la política, no a sus verdaderos responsables. A esa relación oculta y de subordinación, la etapa kirchnerista la desenmascara, le pone luz, la torna visible y la sitúa en un lugar de yuxtaposición, es decir, eleva a la política hasta ponerla al mismo nivel que los poderes fácticos, y desde allí los interpela. Y, retomando una función

inhabitual pero fundamental de la política, su función pedagógica, se encarga de explicar cómo estaba acostumbrado a operar el poder en cada instancia, se trate del poder rural, mediático o financiero. En consecuencia, desde la perspectiva de Cunningham, la Democracia argentina –y sudamericana en general- ha experimentado un enorme avance en cuanto a su fortaleza.

La nueva ubicación del Estado

El Estado moderno es la formación política que sucedió a las monarquías en Occidente. En términos de cultura política, el mayor temor que pesaba como herencia sobre aquella nueva estructura era que repitiera los abusos de autoridad de sus antecesores, los monarcas absolutos. Las burguesías nacientes se erigían en la nueva clase dominante, y abjuraban de toda posibilidad de que un Estado fuerte pusiera límites a sus arrogantes potencialidades de acumulación de capital. La defensa de la propiedad privada se convertía en su máxima obsesión, y las funciones del Estado moderno sólo debían limitarse a garantizarla. La burguesía como clase central, de la mano del liberalismo como ideología de Occidente, se encargarán en plenos siglos XVIII y XIX, de crear y consolidar –a expensas de Montesquieu y de los ‘padres fundadores’ que redactaron la Constitución estadounidense- lo que llamaron ‘un sistema de frenos y contrapesos’ cuya principal finalidad era no reiterar los abusos del poder estatal ejercidos por el monarca; evitar lo que llamaban ‘la tiranía de las mayorías’. Somos herederos, pues, de esa tradición política eurocéntrica, y de todo el andamiaje intelectual e institucional que nació con ella para justificarla y preservar los intereses de la burguesía y el liberalismo, como clase e ideología dominantes, respectivamente.

No obstante, el capitalismo evolucionó de tal manera que en la actualidad, los riesgos no residen en aquella supuesta potencia avasalladora del Estado ni de las mayorías populares. El riesgo principal para el pleno ejercicio de los derechos proviene de la creciente capacidad de disciplinamiento social adquirida por el capital trasnacional. Lejos de ser el abusador, el Estado es justamente el factor de equilibrio respecto de los abusos del capital y de los mercados, con que

cuentan los pueblos para progresar, sin ser doblegados. Por todo esto, resulta de crucial importancia continuar y profundizar la batalla cultural que, a través de la enorme ofensiva de los medios dominantes, pretende presentar al Estado y a la política como los causantes principales de los fracasos de la sociedad.

El mito de la falta de calidad institucional

Otro de los embates de la cultura dominante se dirige con obstinación a criticar al proceso político argentino iniciado en 2003 por su ‘desapego’ a la ‘calidad institucional’. Para desestimar esta crítica baste un ejemplo fulminante, además de lo que de por sí significan los nuevos códigos civil y comercial, y procesal penal recientemente sancionados.

Probablemente no exista nada más atroz y violatorio de todo pacto institucional -y civilizatorio- que la tortura, el asesinato a mansalva, el arrojar cadáveres al mar o robar bebés. Todos ellos, hechos verificados luego de miles de testimonios, desclasificación de archivos, pruebas documentales, pericias científicas y comprobaciones oculares. Las víctimas de esas barbaridades esperaron casi tres décadas para que se abrieran las compuertas de la justicia; para que, luego de inconclusos y contradictorios intentos de Raúl Alfonsín; Néstor Kirchner las abriera por completo. Y comenzaron los juicios, y prosiguieron, y se sustanciaron las pruebas, y se escucharon alegatos... Se condenó y se absolvió cuando correspondía. Y fueron respetadas todas y cada una de las garantías procesales contenidas en la ley, la Constitución y los Pactos internacionales, respecto de las personas que más las habían violado. Y todo ello sin que las víctimas ni las organizaciones en que se agrupan hayan apelado jamás a instrumentar una sola gota de venganza personal. ¿Puede pedirse a un proceso político un rasgo más contundente de apego por lo institucional?

Ahora bien, en lo que sí debemos ser claros al tratar este punto, es que, en plena batalla por la construcción de una contra-hegemonía política, lo que defendemos son ‘otras’ instituciones, distintas de las que ha utilizado el poder dominante para sostenerse en esa condición. Asignación Universal por Hijo, sistema de Paritarias para la discusión salarial y de condiciones de trabajo,

libre elección de la condición sexual, e inclusive el maltratado ‘populismo’, son instituciones de alta calidad, sólo que orientadas a la defensa de otros intereses que no son los de las clases históricamente dominantes en la Argentina.

La encrucijada de los plazos electorales

De todo lo expuesto se deduce que construir una contra-cultura frente a un proyecto de sometimiento del pueblo argentino que lleva muchas décadas, no es una tarea sencilla. Ni de corta duración. Por eso, otra de las ideas naturalizadas por el poder y que debemos abocarnos a ‘desnaturalizar’, es el hecho de creer que los ciclos de ruptura de paradigmas culturales y económicos fuertemente arraigados, deban medirse –y por consecuencia, eventualmente, interrumpirse- a raíz de los límites impuestos por la perspectiva de los plazos y las instituciones electorales tradicionales. Límites que son, además, profundamente no-democráticos.

¿Hay algo menos democrático que no permitirle a un Pueblo que elija a quien prefiera elegir? No. Entonces, ¿por qué tiene que ser una regla teórica y no el pronunciamiento concreto del Pueblo quien determine si una persona debe o no representarlo; y hasta cuándo debe representarlo? La razón sólo puede rastrearse en la necesidad de crear un sistema político funcional a los intereses de los poderes fácticos permanentes e inculcarlo profusamente en el imaginario colectivo, en la cultura. Y es así como vastos sectores sociales no se inmutan ante la presencia de conducciones corporativas que se mantienen durante décadas al frente de sus respectivas organizaciones, pero sí se escandalizan de que la política se permita plazos más largos que los tradicionales. Siendo que la legitimidad de los mismos proviene de la raíz más democrática posible que es la voluntad popular. Plazos tan largos como los que demande, en definitiva, la batalla cultural emprendida en pos de consolidar los nuevos paradigmas.

Reitero finalmente, estos vectores estarán presentes, de un modo u otro, a lo largo de los artículos. Muchas gracias por leer.



Capítulo I

**DEMOCRACIA ARGENTINA:
ENTRE EL PODER POPULAR Y EL
PODER DE LAS CORPORACIONES**



Acto Patria o Buitres . Estadio Luna Park. 12 de Agosto de 2014



Lo económico, una razón más para la continuidad

Tiempo Argentino, 29.03.13

La inescrupulosa actitud de los grupos de poder frente al proceso económico tiene que ver con dos planos de cuestionamiento. En lo concreto, la pérdida de algunos negocios y privilegios. Y en lo general, con un histórico litigio entre modelos. Una disputa entre dos concepciones de la política, de la economía, del Estado y de la sociedad.

Mi pretensión no es opinar desde la perspectiva de un economista que no soy, sino reflexionar en términos políticos sobre algunos comportamientos económicos.

Entre sus objetivos, el proceso iniciado en 2003 procura recuperar el Estado. No sólo en términos patrimoniales, es decir, con las AFJP, Aerolíneas, YPF, sino en términos de autonomía: romper con la práctica de que en cada escritorio, cada armario, cada oficina del Estado, uno se encontraba con resoluciones tomadas a la medida de los grupos económicos que históricamente lo cooperaron, ya se trate de una exportadora, un laboratorio o una corporación mediática. Y esto da mucho trabajo, en la medida que arrastrábamos décadas de un Estado vaciado, falto de decisión política, de entrenamiento y de eficiencia.

Para esto, hacen falta recursos. El desendeudamiento, la autonomía financiera, el superávit comercial, son medidas esenciales a sostener y consolidar en el tiempo.

Para poner en números el peso de los servicios de la deuda, en 2001, el Gobierno pagó 10 mil millones de dólares sólo por intereses, mientras que en 2013, pagará menos de la mitad entre intereses y capital, y con una economía 100% más grande.

Otro punto saliente es el control de cambios. Es justo reconocer las razones que han tenido los ahorristas para refugiarse en el dólar como reserva de valor, en un país que en poco más de 20 años había devaluado su moneda en más de un millón de veces.

Pero reconocer las razones que lo justifican, no obsta sostener que el atesoramiento en dólares es perjudicial para el país. En este tema, como en otros,

no hay que estar a la defensiva tratando de explicar por qué no es tan malo el control de cambios: hay que pasar a la ofensiva –no como ofensa, sino como iniciativa– y afirmar, enfáticamente, que es una decisión excelente y que llegó para quedarse.

¿Y cómo nos defenderemos de la pérdida de valor de nuestro peso?, preguntarán. Y aquí caben dos respuestas. Una primera, de carácter general, es que por primera vez en décadas, el Estado acumula un volumen de reservas tal, que le permite absorber sin riesgo cualquier corrida generada por un grupo económico. Esto, sumado a la actividad sostenida del mercado interno, preservan a nuestra economía de aquella histórica pérdida de valor.

La segunda es la búsqueda de posibilidades reales de ahorro cuyo rendimiento supere la depreciación del peso. Los bonos-YPF, la nueva regulación que deriva en una gran apertura del Mercado de Valores, la exigencia del BCRA a los bancos privados para que destinen a la inversión productiva el 5% de sus carteras prestables, la obligación de invertir en el sistema productivo para las Aseguradoras, y otras opciones que surgirán, seguramente, de la ampliación y diversificación de la estructura productiva, como la construcción de viviendas y ensanche de las vías ferroviarias, constituyen verdaderas opciones en detrimento del dólar, que tendrán que ir afianzándose, cambiando nuestra memoria, y desplazando a la moneda estadounidense como reserva de valor en nuestra cultura económico-financiera.

La regulación de divisas se extendió, también, a la compraventa de inmuebles usados y suntuarios a estrenar, mercado habituado a operar en dólares. Pese a las presiones de las cámaras inmobiliarias, la firmeza del gobierno hará que en no mucho tiempo la actividad se recupere, operando plenamente en moneda argentina. Aun así, la prioridad para la política oficial es la multiplicación de viviendas por vía de la construcción, de modo de atender simultáneamente a la demanda social de vivienda y de trabajo, así como a una producción industrial diversificada.

Otra vez en números redondos, nuestro país pasó de soportar una fuga de divisas cercana a los 22 mil millones de dólares en 2011, a menos de 4000

millones en el año siguiente. Esto, sumado al mayor control de las importaciones y el cambio de ciclo en la importación de combustibles debido a la recuperación de YPF, han contribuido a sostener la situación fiscal sin recurrir al endeudamiento externo, ni a desactivar el mercado interno ni disminuir la inversión pública, que son los objetivos de la oposición neoliberal.

El año 2012 ha sido fundamental en la toma de medidas de profundización del proyecto económico y social. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central le da a éste –entre otras– atribuciones para orientar el destino del crédito y la actividad bancaria en general, hacia los sectores productivos. Y los cambios recientes en el Mercado de Valores, lo sitúan como una posibilidad de ahorro para los sectores medios –ahorristas tradicionalmente no bursátiles– alternativa al plazo fijo bancario y el atesoramiento de dólares. Lo mismo cabe para la emisión de bonos de la empresa YPF.

Este conjunto de medidas tendientes a mantener e incrementar el nivel de actividad en un contexto de desaceleración internacional, ha ido acompañado de un incremento de precios superior al deseable. Pero, a diferencia de los recurrentes ciclos inflacionarios del pasado, este aumento de precios no corre el riesgo de desmadre de las variables macroeconómicas, precisamente, porque el Estado no depende de condicionalidades impuestas desde el exterior, es el principal tenedor de divisas, y mantiene un considerable superávit comercial.

En definitiva, las medidas adoptadas tienen una clara orientación en favor del empleo, el desarrollo industrial y la fortaleza del mercado interno. Si a eso se suma la decisión de no aceptar la extorsión de los llamados fondos-buitre, y el desarrollo de las instituciones regionales propuestas desde Unasur, acudimos a la consolidación de un proyecto nacional y popular, aún con todas las dificultades y pasos pendientes que podemos reconocerle.

Si el presente proceso no tuviera continuidad, eso implicaría la vuelta al FMI y a los ajustes estructurales. El poder necesita que el Estado fracase, pero no sólo desde el punto económico, sino cultural. Que la ciudadanía vuelva a descreer de él, para volver a dar paso a la apertura de los mercados, las privatizaciones, el endeudamiento externo.

Como en toda batalla cultural, adquiere relevancia la dimensión pedagógica de la política. No sólo la toma de medidas correctas, sino que los ciudadanos y ciudadanas las comprendan como medidas correctas y beneficiosas para sus propios intereses, al contrario de la prédica catastrofista. La presión que hace el poder financiero no tiene que ver con un supuesto respaldo a los pequeños ahorristas. Ellos utilizan a esos sectores medios, para hacer cundir un clima de malestar. Pero su verdadero objetivo es reabrir el mercado de divisas, y transferir libremente sus pingües ganancias a los paraísos fiscales. La disputa no es por la cotización del dólar, sino por quién fija los precios de la economía argentina, si ellos, o el gobierno popular.

Hay veces que la historia ofrece más de una alternativa donde ubicarnos. En otros momentos, como el presente, no hay más que una opción. Ser el puente de plata para el regreso del nefasto proyecto neoliberal, o –aún con sus imperfecciones y cuentas pendientes– profundizar un modelo autónomo, nacional y popular, en beneficio de aquellas mayorías sociales reiteradamente postergadas, y con el propósito de edificar, definitiva e irreversiblemente, una sociedad igualitaria.

El orgullo por las pecheras

Tiempo Argentino, 08.04.13

Estaba por ingresar a mi habitual columna en Radio Nacional de Mendoza, cuando, durante la espera telefónica, el periodista Santiago Giménez le responde a un oyente que no tiene nada de malo que un colaborador solidario con los inundados de La Plata se identifique con una pechera política. Yo no podía creer lo que escuchaba. No podía creer, que, ante la angustia de haberlo **pedido** todo y el valor de la ayuda desinteresada y militante, alguien pudiera darle alguna importancia al color de una pechera.

De todos modos, puede haber dos móviles para esa actitud. Uno es no entender muy bien de qué se trata comprometerse luego de una catástrofe. Y el otro es que, precisamente por entenderlo bien, se lance una nueva ofensiva



contra la política. Me pasa con mis amigos, algunos de los cuales compraron el “Son todos chorros”.

Ahora bien, tomemos una de las dimensiones posibles del concepto “política”, como el ocuparse de la cosa pública. Aquí cabe una explicación tan simple como esta: todas las personas, aun las que aborrecen la política y sólo se concentran en ser exitosas en el ámbito privado, transitan por las calles, compran automóviles, llevan a sus hijos a la escuela... ¿Quién se ocuparía de cosas tan simples que llevamos incorporadas, como instalar un semáforo, registrar el patentamiento de los vehículos, abonar los salarios docentes o equipar las escuelas, sino aquellas y aquellos que sienten una vocación por las cuestiones públicas? Llevado a este plano, rechazar la política implicaría algo tan elemental como desatender los servicios públicos que todas y todos utilizamos.

A esa atención hacia lo público le caben tres grandes móviles posibles: el hacerlo por mero compromiso laboral, el hacer de ella un negocio o el cumplirla a partir de la vocación por lo social.

Dicho esto, me traslado ahora a las últimas inundaciones de La Plata, mi ciudad. De cara a los hechos consumados, se movilizaron cuatro instancias con miras a sofocar los enormes daños producidos. Las instituciones estatales, las organizaciones sociales, la militancia política y el voluntariado anónimo. Las organizaciones sociales y el voluntariado, más allá de la filiación o no de cada persona, no tienen necesariamente una adscripción partidaria permanente. Me refiero, por ejemplo, a la Cruz Roja, a organizaciones de boy scouts, a grupos de médicos, a centros de fomento, sindicatos, etcétera. Pero el Estado, que en cada período está ocupado por un gobierno con un color político determinado, y los militantes políticos, sí tienen una filiación precisa.

En este sentido, siempre tiene el Estado una responsabilidad. Pero no da lo mismo cuál es la concepción política y social más profunda de quienes lo conducen en cada momento concreto, para determinar la impronta que tendrá esa acción social del Estado, frente a una catástrofe.

En una reciente reunión con Nuevo Encuentro, el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini expresó un concepto de profundo conteni-

do: “Cuando se gobierna, no hay problemas chicos.” Y esto es así, sencillamente, porque todos los problemas son humanos. Y si un problema es humano, es decir, si corresponde a un dolor, a una necesidad o a un derecho de una persona, entonces, es importante. Y la dimensión humana tiene que volver a la política. Y la política tiene que volver a humanizarse. Y cuando está presente la dimensión humana, también pueden estar presentes, eventualmente, el error, el reconocimiento del error y su reparación.

Por lo tanto, cuando un Estado está conducido por un gobierno que sostiene esa convicción, el tratamiento de los problemas, y entre esos problemas, esta última catástrofe, se abordan desde una perspectiva de intenso compromiso humano y social. Y esa misma valoración es la que se traslada a la militancia política, predominantemente joven, que adhiere a este gobierno y al liderazgo de nuestra presidente, y que está desempeñando un papel tan importante en la reparación de los daños sufridos por miles de compatriotas.

No podría decir que todo fue perfecto. Nunca lo será. Tampoco lo es mi vida, ni creo que nada lo sea. Pero sí valorar que no hubiera sido lo mismo sin Estado y sin militancia. Y no hubiera sido lo mismo con otro gobierno en el Estado y con otra militancia. Valoremos que este drama se topó con una mujer que preside un gobierno con un claro sentido del compromiso y la gestión. Y que le imprime esa misma dinámica a los miles y miles y miles de jóvenes enamorados de este momento de la Argentina y de este proyecto político. Imaginemos sino cuál hubiera sido la alternativa. Seguramente, la farandulización de la catástrofe. Una catástrofe cuya reparación, en vez de ser conducida desde un gobierno con convicción y vocación social, hubiera sido conducida por un programa de TV en continuado durante 24 horas, cuyos animadores estrella hubieran estado –o los hubieran obligado a estar– pendientes de la imagen, el rating y la cotización del minuto de publicidad, y para quienes el drama de las ciudadanas y ciudadanos hubiera sido sólo una excusa, probablemente más noble que otras, para estar en pantalla. Y allí terminaba todo el compromiso...

Por delante quedan, como asignaturas pendientes, anticipar, prevenir, planificar y coordinar. Entre las diferentes instancias del Estado, y de estas con la

sociedad civil. Pero valoremos que, en medio de tanta desolación, quien se puso al frente de la reparación fue este, y no otro Estado. Este, conducido por una presidenta como Cristina, y con un despliegue militante comprometido con lo social, y no con las empresas o las cámaras de TV, como hubiera ocurrido con los yuppies u otros modelos impuestos a la juventud, no hace tanto tiempo.

Vayamos por más y mejor política. Por una política que, precisamente por ser humana, admite el error y brega por su reparación. Y que también por ser humana, hace sentir orgullosos a los jóvenes de vestir sus pecheras.

No son hechos aislados, del 18A a la represión en el Hospital Borda

Tiempo Argentino, 30.04.13

En las últimas semanas se han producido distintos hechos políticos que, a primera vista, podrían interpretarse como inconexos, pero que a mi juicio forman parte de un mismo universo conceptual. No quiero decir que hayan sido planificados en una suerte de “mesa directiva”, pero sí responden a un conjunto de valores que delinearán una concepción del Estado, de la política y del modo de vida de una sociedad. Un modelo que ya nos gobernó bajo distintos ropajes durante muchas décadas, y al cual es un imperativo no regresar.

El domingo 14 de abril regresé a mi casa a eso de las ocho y media de la noche, todavía conmovido por la potencia de esas largas jornadas en solidaridad con los damnificados por las inundaciones de La Plata. Y, especialmente, por la concentración final, que encontró al Estado junto a la sociedad, vinculados por esa polea de transmisión tan necesaria –y a la vez tan vilipendiada por la oligarquía– que es la militancia. Esta vez con un valor agregado: el encuentro entre jóvenes dedicados a la política con jóvenes soldados del Ejército Argentino, una asignatura pendiente largamente demorada como consecuencia de todo lo que nos pasó.

Una hora y media más tarde, el modelo antagónico en la pantalla. Una payasesca operación de prensa pagada por los archienemigos del gobierno, que,

a partir de personas muy ligadas al espectáculo, nos regresan al viejo esquema de la farandularización de la política. Y a que sea la televisión, no la que relata los hechos, sino la que construye la agenda de la semana. Una clara confrontación de modelos de construcción política.

Luego, la concentración de personas del 18 de abril, a la que me resisto a analizar desde el punto de vista cuantitativo. Aun cuando creo que no superó en número a las anteriores, lo esencial es lo cualitativo. Y, en este aspecto, careció de tres elementos indispensables para convertirse en algún momento, en una alternativa política: unidad de concepción, unidad de conducción, y unidad de destino. Tres elementos que el proyecto nacional y popular, no obstante los ataques que arrecian, tiene profundamente arraigados.

A continuación, el debate sobre la democratización judicial, en el cual afloraron las peores lacras de sus oponentes. Una de ellas, el insulto y la descalificación sistemáticos, en lugar de verter una sola propuesta alternativa sobre qué hacer con un poder judicial degradado. Otra de ellas fue aducir la falta de debate. Cuando el último 1° de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso sus grandes objetivos, transparencia, democratización, capacitación, concursos, agilización de causas, acceso de los más humildes, ruptura del cerco aristocrático que envuelve desde siempre a nuestro Poder Judicial, y sin conocerse aún el contenido de los proyectos, los opositores desfilaron por el salón de Pasos Perdidos, anticipando que se opondrían a como diere lugar. De aquí el contrasentido de pedirle tiempo a un debate sobre el cual ellos mismos habían anunciado los resultados.

Otra lacra de la oposición: la mentira. Ocultar el verdadero sentido de la reforma bajo la harto conocida denuncia de que todo se hace para apropiarse de las instituciones, y arrasarse con la democracia y la república. Otra mentira fue decir “para qué concurrir a las comisiones legislativas, si total no habría correcciones”, hasta que, una vez más, la realidad lo desmintió, y se hizo lugar a aquellas correcciones provenientes de sectores que las hacían de buena fe, y no para embarrar la cancha.

La estrategia opositora para el debate judicial estaba clara. Abrigaban dos expectativas. La primera, que el proyecto oficial no contara con los votos re-

queridos por la Constitución. Y, frustrada esta, fabricar un escandaleta que les permitiera retirarse del recinto, y suplir el debate de ideas por un desfile ante las cámaras de TV. El marco conceptual, el inconsciente profundo del proyecto opositor lo había expresado el senador radical por Mendoza cuando dijo “ojalá las cosas no mejoren hasta octubre”.

Y, finalmente, la brutal represión de Macri. De un lado, entonces, contexto de unidad sudamericana, inclusión, militancia, debate de ideas, reforma profunda de instituciones históricamente colonizadas. Del otro, deseos de que todo vaya peor, agresión por impotencia para afrontar los debates, represión violenta, vaciamiento de los partidos, farandulización. Porque, en definitiva, es la despolitización de la sociedad la que podría brindar el marco más propicio para una eventual restauración de un modelo de ajuste, que no podemos permitir.

Pero no está todo dicho. Creo necesario poner un ejemplo cercano para graficar la tarea pendiente. Si tuviera que resumir en un solo eje la divisoria de aguas entre los dos proyectos que estuvieron en pugna en la última elección venezolana, diría que esa línea divisoria está en quién se apropia de la renta del país con mayores reservas petroleras del mundo: 297 mil millones de barriles, de los cuales los EE.UU. (4 % de la población mundial, 30% del consumo de energía) utilizan 6 millones de barriles diarios. Si se la apropia el Estado para su distribución social, o si regresa a las multinacionales. Sin embargo, el resultado electoral fue, grosso modo, 51 a 49 por ciento.

¿Quiere decir esto que el 49 % del pueblo de Venezuela desprecia la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, y consiente entregar la renta petrolera al capital extranjero? No. Lo que quiere decir es que hay una amplísima tarea de descolonización cultural a realizar sobre un vasto sector de nuestras sociedades sudamericanas, que, objetivamente, se verían perjudicadas por las políticas neoliberales, pero subjetivamente asumen como propio su discurso. Es imperativo un mensaje que no sólo consolide el núcleo de adeptos al proyecto nacional y popular, sino que amplíe el bloque social que lo sustenta. No únicamente en términos electorales, sino en términos de una gobernabilidad cada vez menos expuesta a las presiones destituyentes.

¿Qué es un cambio de paradigma? (I)

Tiempo Argentino, 21.05.13

Qué significa para un país como el nuestro, tal vez el país latinoamericano que más había olvidado mirar hacia sus raíces indoamericanas, que hoy sienta como propio el destino de pueblos hermanos como el de Bolivia, Venezuela o Ecuador? Significa un cambio de paradigma.

¿Qué significa que Cuba presida la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), pese a estar bloqueada hace más de medio siglo por los EE.UU. y aislada de la pro estadounidense Organización de los Estados Americanos? Significa un cambio de paradigma.

¿Qué significa, que, después de haber privatizado, en los noventa, las principales palancas estratégicas de nuestra economía con amplio consentimiento social, hoy se valoren las políticas públicas, la intervención del Estado en el proceso productivo y su papel reparador de desigualdades sociales estructurales? Significa un cambio de paradigma.

¿Qué significa el remplazo de la fracasada idea de que el solo crecimiento traería la igualdad, por el principio rector de que es desde la igualdad y la cohesión social que vendrán el crecimiento y el desarrollo? Significa un cambio de paradigma.

¿Qué significa para miles y miles de jóvenes haber pasado de la apatía y el desprecio por la política que llevan a conductas individualistas, a la esperanza, la militancia y el sentido de pertenencia a un colectivo político y social? Significa un cambio de paradigma.

¿Qué significa haber aceptado durante décadas la resignación de que era en vano luchar contra poderes que parecían inexpugnables, y que desde esa omnipotencia sometieron a las mayorías populares, y saber ahora que la voluntad, la decisión y el compromiso de un pueblo tienen la fuerza para sobreponerse a esa dominación? Significa un cambio de paradigma.

¿Qué significa haber puesto en debate la democratización de instituciones que parecían intocables como la gran prensa y el poder judicial? Significa un cambio de paradigma.

¿Qué significa que hoy la visión clásica de la división de los poderes tradicionales, se ubique en un mismo plano de discusión junto con otra división de poderes muy concreta, como la que existe entre las grandes corporaciones y los llamados poderes fácticos permanentes y las instituciones que visibilizan nuevos sujetos históricamente postergados, y crean empoderamiento popular? Significa un profundo cambio de paradigma.

Un paradigma es, entre sus tantas definiciones, una especie de eje ordenador de creencias y valores, alrededor de las cuales una porción determinante de una sociedad construye su “cosmovisión” sobre un tema o cuestión. Así, una parte importante de la sociedad argentina fue construyendo sus paradigmas políticos tradicionales, como que “somos más parecidos a Europa que a esos negritos latinoamericanos”, “todo lo que viene del Estado es corrupto e ineficiente”, “la política es una porquería y los políticos son todos chorros”, “pobres habrá siempre, y, de última, si son pobres será porque no laburan”, “no te metas con los poderosos porque nunca les vas a ganar”, “es verdad porque lo vi por televisión”. Y esto para no mencionar otros de consecuencias más atroces aun, como “si desaparecieron es porque algo habrán hecho”.

Ahora bien, todo paradigma político no viene del azar, sino que responde a causas y condicionamientos históricos y culturales, entre otros. Y, además, proviene de intereses muy concretos impuestos por los poderes hegemónicos de una sociedad, para justificar y sostener precisamente esos intereses y esa posición dominante. No son neutros, no son ingenuos, no son inocuos. Favorecen los intereses de algunos y perjudican los de otros.

A juzgar por las etapas atravesadas por la Argentina y la suerte de sus ciudadanos y ciudadanas más humildes, está claro desde qué tipo de intereses provenían esos viejos paradigmas, y a qué proyecto de país favorecieron. La Argentina atravesó, en las últimas cinco décadas del siglo pasado por la proscripción de las mayorías, por una Constitución Nacional reformada en 1957 desde la ilegitimidad de las minorías, por golpes de Estado en 1955, 1962, 1966 y 1976, por ajustes y devaluaciones feroces, por una guerra contra una potencia planteada desde la irracionalidad, y por una casi guerra con un pueblo hermano. Incluso a partir

de 1983, cuando recuperamos nuestra vida institucional, se profundizaron indicadores de desocupación, pobreza y endeudamiento, que cambiaron el perfil de una sociedad cohesionada, de la que supimos sentirnos orgullosos.

Y, durante todo ese tiempo, lo que podríamos llamar –con el riesgo que implica toda simplificación– el “promedio cultural” de una parte muy influyente de nuestra sociedad, se apoyó en aquellos paradigmas mencionados, aun cuando teníamos ante las narices su ineficacia y su cinismo.

El dólar como herramienta política

Si el movimiento de una variable económica se torna demasiado abrupto, nunca responde a causas estrictamente técnicas, sino políticas. No hay razón económica para la variación de 20 o 30 puntos de una cotización en pocos días. La causa es la intención de dar un golpe de mercado. Sucedió con la hiperinflación que detonó la caída de Raúl Alfonsín en julio de 1989, que trepó a 200% ¡mensual! para caer a un dígito una vez acordada su renuncia. Sucedió con el reloj de taxi con que Bernardo Neustadt graficaba en su programa de TV las pérdidas del Estado por el manejo de los ferrocarriles. Y hoy intentan obtener los mismos resultados con la cotización del dólar ilegal. Lo que es increíble, y aunque suene presuntuoso, es que no hayamos aprendido. O que todavía tantas ciudadanas y tantos ciudadanos no se hayan dado cuenta. Que no recuerden cuáles son los recursos catastrofistas que utiliza el poder económico, y que no recuerden cómo muchas y muchos ciudadanos de clase media son utilizados como escudo del proyecto de país de la oligarquía, que sabe el efecto propagador que suscita el malestar de ciertos sectores medios, pero que luego de utilizarlos para crear esos climas, si volvieran al gobierno, volverían a aplicar políticas de las cuales esos mismos sectores medios estarían entre los principales perjudicados.

Lo que debemos repetir hasta el cansancio, es que la administración del país asumida el 25 de mayo de 2003, cambió también este otro paradigma de política económica. Es decir, hoy “las decisiones se toman en la Casa de Gobierno”. Y hoy, aquellas “variables macroeconómicas” que históricamente nos ponían en una situación de alta vulnerabilidad (endeudamiento externo,

condicionalidades a nuestra economía impuestas desde el exterior, escasez de divisas, déficit fiscal y comercial), están por primera vez en muchas décadas en manos del Estado, lo cual cambia el nivel de gravedad de los problemas de la economía. No estamos diciendo que la economía no presente problemas –que siempre los presenta– sino que hoy los problemas se resuelven a partir de decisiones soberanas y no generan riesgo de desmadre del cuadro económico general, como en las anteriores etapas de nuestra historia económica reciente.

Entre el 1° de enero de 1970 y el 2 de abril de 1991, a la unidad monetaria argentina se le agregaron trece “ceros”. Es decir, un peso de los creados en 1991 junto a la convertibilidad, equivalía nominalmente a 10.000.000.000.000 pesos moneda nacional. La cifra resulta ininteligible, pero útil para demostrar que hubo causas más que suficientes para que muchísimos compatriotas de buena fe se refugiaron en una moneda como el dólar como reserva de valor. Y a esto hay que sumar, entre otras cosas, la creación de más de una decena de cuasimonedas (como los lecop, los lepac, los patacones y tantas otras monedas provinciales), que fueron rescatadas bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Quiere decir, entonces, que no todas las personas que atesoraron dólares a lo largo de todo ese calvario económico y social, pueden considerarse evasores o evasoras en términos clásicos, y mucho menos lavadores o lavadoras de dinero.

¿Qué es un cambio de paradigma? (II)

Tiempo Argentino, 22.05.13

La falsedad de las críticas

El hecho de que muchos argumentos de la oposición se hayan tornado –por su agobiante repetición– en caballitos de batalla, no los provee de certeza. Uno de ellos es: “el mundo nos brinda una excelente oportunidad porque se mantienen altos los precios de la soja”. Falso, al menos parcialmente. Porque si bien los precios de la soja se mantienen elevados, en las exportaciones argentinas ha crecido el componente industrial que colocamos en otros mercados

aparte de China, y si esos compradores están en crisis disminuyen su capacidad de comprarnos. Por el contrario, necesitan vendernos aquellos productos que, debido a su crisis, no pueden colocar en sus países. Además, ese mayor componente industrial en nuestras ventas, que es inmensamente favorable para mantener nuestros niveles de empleo, requiere que importemos más bienes de capital, de modo que nos exige una concentración mayor en cómo obtener y qué destino darles a nuestras divisas. En paralelo, las firmas extranjeras radicadas en nuestro país no reinvierten aquí en los mismos niveles que lo harían en una situación normal en sus países de origen, sino que se ven compelidas por sus matrices en el exterior para girar una porción mayor de sus utilidades, de modo de acudir en socorro de las mismas, como consecuencia de la crisis que atraviesan. En definitiva, por estos y otros motivos, el mundo no nos sonríe, como pretende la oposición política y sus patrones intelectuales, los golpistas económicos.

De la mano de esto viene otra sentencia mentirosa: “mientras en otros países de la región abundan los dólares baratos, en nuestro país escasean, y por eso se encarecen”. Falso. Nuestro país es el primero, exceptuando a los EE.UU. , en cantidad de dólares por habitante. La pregunta, a partir de ello, es: ¿quién los tiene? ¿a dónde están? Y es aquí donde hay que distinguir entre las cantidades relativamente pequeñas que pueda haber reunido un ahorrista de clase media, y los colosales torrentes de ganancia en dólares que nuestras sucesivas debacles económicas les ha permitido a los grandes conglomerados empresarios; sumado a ello la falta de control y la libertad para girar esos dólares a los circuitos internacionales. Es a esa “libertad de cambio” a la que estos sectores históricamente dominantes quieren retornar, y de ninguna manera a proteger a los pequeños ahorristas a los que usan como pantalla de sus intereses oligárquicos.

Otra de las flagrantes mentiras de quienes propician un golpe de mercado es: “miremos lo bien que está Brasil”. Falso. Lamentablemente, Brasil no está bien. Su economía arrastra signos de estancamiento prolongado, caída de la actividad industrial, altas tasas de interés y fuga de divisas. Y esto, que en la comparación nos pone en mejor situación, no es favorable para nosotros. Al

ser nuestro principal socio comercial, hubiéramos preferido el repunte de Brasil para incrementar nuestras ventas y bajar la presión de sus industriales para colocar sus productos en nuestro mercado. Las muestras de recuperación que se esperaban de Brasil están tardando en manifestarse más de lo que hubiésemos deseado. El malestar de Brasil se refleja, incluso, en la merma de turistas de ese país hermano, lo cual también perjudica nuestra balanza.

Blanqueo o Inversión

Como queda expresado en tramos anteriores de este trabajo, a lo largo de décadas de políticas liberales en materia cambiaria, los argentinos han acumulado dólares en cantidades siderales, y, debido a aquella justificada falta de confianza en nuestra economía, los mantuvieron fuera del circuito formal. Una parte dentro del país, otra parte mucho mayor fuera de él, pero todos fuera de la economía registrada. Esa enorme masa de dólares se integra, pues, en parte, de ahorristas precavidos de mayor o menor envergadura. Y también de grandes evasores, que presionaron durante décadas en favor de dichas políticas de libertad de cambio absolutamente laxas, y se aprovecharon de ellas para girar sus colosales excedentes en dólares a diversas plazas financieras, muchas de ellas non sanctas. Mientras la Convertibilidad mataba a nuestro Estado, a nuestra producción y a nuestros trabajadores, la libertad de cambiar cada peso por un dólar aceleró vertiginosamente ese proceso de acumulación y fuga de grandes capitales, que son quienes ahora presionan para recuperar parte de aquellos privilegios.

La Argentina arrastra, complementariamente con esto, altos niveles de evasión, contra la cual las actuales políticas públicas están luchando trabajosamente. Esto es, una permisividad histórica respecto de los nichos (y cuevas) de ilegalidad. Entonces, si combinamos el factor “colosales tasas de excedentes obtenidos en dólares o convertidos a dólares (gracias al relajamiento de las sucesivas políticas cambiarias)” con el factor “facilidad para operar en el circuito ilegal, o, más simplemente, evasión”, esto arroja un resultado económico de enorme circulación rutinaria de moneda extranjera. A tal punto arraigado, que Carlos Menem, aún después del colapso producto de la década de los años no-

venta, obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de los comicios presidenciales de 2003 bajo la consigna de dolarizar lisa y llanamente nuestra economía.

Al haber tantos dólares en plaza, las habituales operaciones informales no encontraban mayores resistencias en el sistema, y de allí que la brecha que siempre existió entre la cotización ilegal del dólar respecto del oficial, resultaba insignificante. Pero, a medida que se fueron imponiendo y generalizando las restricciones para operar y atesorar excedentes en divisas por fuera de lo estrictamente necesario (esto es, las transacciones del comercio internacional), la brecha se fue acentuando, lógicamente, dada la mayor dificultad para obtener dólares con la laxitud a la que los grandes operadores estaban acostumbrados. Y esto fue disparando, progresivamente, la brecha entre la cotización oficial y la ilegal. En definitiva, un mayor control de la evasión más las restricciones cambiarias, angostaron la puerta de ingreso y salida de divisas, convirtiendo las operaciones paralelas en un circuito muy pequeño e irrelevante en términos macroeconómicos, pero, dada la capacidad mediática de sus operadores, políticamente determinante de un clima de malestar en una porción importante de nuestra sociedad.

¿Qué es un cambio de paradigma? (III)

Tiempo Argentino, 23.05.13

Dos de las críticas más fuertemente escuchadas en los últimos tiempos eran la falta de inversión y la minimización del problema del dólar ilegal, insisto, problema de índole puramente política y no económica. Entonces, cuando el gobierno nacional toma una medida que, por un lado, reconoce e interviene sobre la circulación ilegal de dólares, y, por otro, estimula la inversión privada, también se la critica. Del mismo modo que se criticaba la fuga de capitales y luego se criticó el control de cambios. O se decía que se ignoraba la inflación, y luego se condenó el control de precios. Esta actitud de la oposición confirma, una vez más, su vocación puramente destructiva, su intención

destituyente; y expresa, en última instancia, lo que el senador radical Ernesto Sanz dijera con todas las letras: “Ojalá que todo vaya mal hasta octubre.” Y, con una oposición política y económica que sólo busca destruir para destituir, no hay diálogo posible.

Otra de las críticas señala que la Argentina, al perdonar a quienes no declararon sus tenencias de divisas, se acerca a ser un nuevo paraíso fiscal. Falso. En términos institucionales, con su legislación y firma de tratados, y con la creación y fortalecimiento de organismos públicos actuantes tanto en el ámbito nacional como en el internacional, nuestro país es uno de los más conspicuos cumplidores de la normativa internacional. En términos políticos, somos principales denunciadores de los paraísos fiscales ante los organismos internacionales, demandantes de información que tales paraísos se niegan a dar, y proponentes de reformas al sistema financiero internacional. Y en términos económicos, de lo que se trata con las últimas medidas no es de aplaudir o alentar la evasión, sino de, precisamente, hacer salir aquellos recursos ociosos obrantes en el sistema de paraísos fiscales, para su ingreso en el sistema formal de nuestra economía. Si bien es cierto que no se los condena por la evasión hacia atrás –y eso fastidia–, también es cierto que se los obliga a declarar esos recursos, y de allí en adelante, tomar nota del incremento patrimonial que suponen y hacerlos tributar en tal carácter.

Mientras que, para la oposición destituyente, la medida adoptada utiliza los incentivos de inversión –CEDIN y BAADEN– como excusa para el blanqueo, desde la lógica de la heterodoxia económica del gobierno, el blanqueo es una herramienta para estimular la inversión.

Párrafo aparte merece la ofensiva desenfadada de denuncias de corrupción, de modo de reforzar un clima de pesimismo y desconfianza tendiente al fracaso de las medidas. La oposición destituyente no piensa realmente que las cosas van mal. Sino que “necesita” que vayan mal. Y, para ello, al igual que ocurre con el dólar ilegal cuya disparada es política y no técnico-contable, el arrecio de denuncias de corrupción responde a otra “decisión política” del establishment, congruente con aquella, y no a una investigación exhaustiva.

Ocurre lo mismo que en el campo económico ocurriera en otras épocas con las placas rojas y el desenfreno del riesgo país, en el sentido de que se trataba de sendas operaciones políticas, como prolegómenos de un golpe. Las actuales –y viejas a la vez– denuncias contra Lázaro Báez, tienen antecedentes en la operación mediática desatada contra el vicepresidente, y antes con las denuncias de una embajada paralela en Venezuela, y antes con Skanska, y así sucesivamente. Ríos de tinta corrieron también, entre los años 1988 y 1989, para presentar como corrupción de gobierno una operación comercial que se recuerda como “los pollos de Mazzorín”, cuando su verdadero objetivo –finalmente logrado– era destituir al presidente. La diferencia es la enorme fortaleza política de este gobierno, comparada con aquel. En aquel momento bastó con una sola denuncia. En el presente, si a la primera denuncia el gobierno hubiera caído, con una sola hubiera bastado. Tanto el poder mediático como los grupos económicos extorsivos, saben que se trata de una controversia de largo aliento en el tiempo, debido a la fortaleza de Cristina Fernández de Kirchner y de su gobierno.

Más allá de sus diferencias de contexto, ambos procesos –aquel de finales de los ochenta y el actual– tienen en común esta caracterización política de la destitución como objetivo. Lo que es increíble es que, quienes dicen honrar al gobierno de aquel presidente radical, sean hoy mentores de semejante –y tan evidente– operación desestabilizadora.

Finalmente, que un gobierno haya desacoplado a nuestra economía de la debacle financiera internacional, negándose al ALCA, es un cambio de paradigma.

Que, aun sin haber formalizado la denuncia política de ilegitimidad de la deuda externa, el gobierno haya obtenido una quita fundamental de capital e intereses y un significativo estiramiento de los vencimientos, equiparables a lo que se hubiera obtenido con la denuncia de ilegitimidad, es un cambio de paradigma.

Que, en oposición a la mentada “independencia” de los Bancos Centrales del neoliberalismo, nuestro Banco Central se haya convertido en un orientador fundamental del crédito hacia los sectores productivos, es un cambio de paradigma.

Que, ante la caída de la economía internacional, las políticas oficiales hayan mantenido los niveles de empleo, es un cambio de paradigma.

Que, ante las restricciones externas, el gobierno recurra a iniciativas heterodoxas, en lugar de endeudarse, vender activos, abrirse al capital financiero o devaluar, es un profundo cambio de paradigma.

Que, ante la impresionante presión interna por la devaluación, y la no menos impresionante presión externa en favor de los fondos-buitre, el gobierno, a diferencia de sus antecesores, no defeccione y persista en la toma de decisiones creativas, anticíclicas y soberanas, constituye un cambio de paradigma tan importante, que sigue mereciendo toda nuestra iniciativa para esclarecer, y toda nuestra militancia en su defensa.

La palabra como institución

Tiempo Argentino, 02.07.13

Columnas de Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni, Tomás Linn, Federico Sturzenegger y Marcos Aguinis en el diario La Nación:

“Guerra a sangre y fuego contra la Corte”, “bestia negra”, “golpe a la Justicia”, “criaturas de su propia hechura”, “ojo por ojo, el combate es a matar o morir hasta que todos terminen muertos”, “ausencia de la República”, “Una dirigencia en pánico”, “terror”, “la teocracia y la guillotina cristinistas”, “el gobierno quiere dejarlos extenuados, con la lengua afuera”, “se abolió la competencia”, “La libertad de expresión está amenazada...”, “viola la Constitución”, “dictadura de la mayoría”, “Macri sufre un acoso constante”, “incitación a la violencia y apología al odio nacional”, “Celebraciones con milicias populares”, “discurso invertebrado”, “convoca al temor”, “persecución”, “atemorizar con violencias”, “delación”, “perversión”, “milicias de La Cábora”, “miedo”, “proyectos vengativos”, “desesperación de un cristinismo exhausto”, “juguete de su furia”, “persistencia del delito y la chapucería”, “manotazos de desesperación”, “brutal ataque”, “sus cabezas podrían ser cortadas”, “pataletas presidenciales”, “Las

decisiones de Cristina están dominadas por sus humores”, “Hay grave crisis política e institucional”, “Un país partido al medio”, “refuerzo a la impunidad”, “falsedad de argumentos”, “a su antojo”, “la viuda”, “ansiedad por controlar los poderes”, “Una guerra en la que el Gobierno se juega todo”, “amordazar a una compañía, eliminar a un medio de comunicación, reducir la democratización de la Justicia a una simple martingala”, “el consenso electoral, el principio de la mayoría, es importante, pero no fundamental”, “El nuevo cepo”, “reto escalofriante para la Corte”, “república fraudulenta”, “el corrupto gobierno de Cristina está regresando a la ruina”, “confiscación de YPF”, “pacto mafioso”, “fechorías del vicepresidente”, inmoralidad del kirchnerismo que “pesa la plata”, “roba pero no hace”, la Cámpora ha “capturado al Estado argentino, colapsado la economía e institucionalizado el autoritarismo”, “una Presidenta paralizada”, “valijas de Olivos”, “avión recaudador”, “falta de compromiso democrático de la Presidenta”, “gobierno al margen de la Constitución”, “figuras despóticas”, “mandamás”, “acabar con los ingredientes democráticos”, “la libertad de prensa tambalea”, “se acorralan las instituciones”, “El problema está en la gente...”, “cada vez menos gente valora la democracia...”, “veneno, ponzoña”, “yunta presidencial”, “fuerzas paramilitares”, “odia, atemoriza, humilla, despoja, somete”, “a guadañazos”, “subsidios de la mendicidad”, “juventudes hitlerianas”.

Pasemos ahora al discurso de los políticos que han resignado su rol de formadores de conceptos, para hacer mero seguidismo del clima que crean estos grandes medios hegemónicos. Veamos lo dicho durante las sesiones en que se trató el memorando con Irán, la reforma del poder judicial y la exteriorización de capitales. Su veracidad, así como sus autores y autoras, puede ser comprobada en las respectivas versiones taquigráficas.

“Violar”, “trampear”, “tratado escandaloso que nos alía con un asesino”, “asco”, “claudicación moral”, “amoralidad”, “banda de ladrones dentro de la Casa Rosada”, “Estado proxeneta”, “cómplices”, varias veces “acusamos”, diez veces “tiene que haber algo detrás”, que el gobierno no dice. “Violaciones”, “intromisiones”, “ilegalidad”, “falsedad”, “estar horrorizado”, “¡mienten!”; “¡no nos engañen!”; “¡Corrupción!”; “¡Chantada!”; “¡Falaces e ignorantes!” “Memorán-

dum de sometimiento”, “arreglo nefasto”, “vil”, “atropello”, “crueldad malévo-
la”, “tramposos”, “mentirosos”, “falsos”, “temerarios”, “descarados”, “arbitrarios”,
“encubridores”, “mafiosos”, “atropellos”, “da vergüenza...”, “descabezar al poder
judicial”, “no vamos a permitir que nos avasallen”, “nos van a dar alguna otra
sorpresita...”, “segundas intenciones”, “cómo se puede tener tanta mala fe”, “no
nos vengan a hacer creer...”, “parece una cargada...”, “lo que están haciendo es
crear un monstruo...”, “cuando los veamos tras las rejas...”. “Coimeros”, “vo-
racidad por hacer caja para comprar voluntades” o “para el kirchnerismo el
evasor es el ciudadano modelo”. Se habló de drogas, trata de personas, falsi-
ficación, corrupción, comercio de armas y lavado de dinero. “Habrá cham-
pagne en las cuevas financieras, placer en los delincuentes y desempleo en
los hogares”, “irracional”, “claudicante”, “sueño hitleriano de imprimir billetes
verdes de segunda calidad, patacones verdes”, “ruinoso”, “puerta de entrada a
los narcotraficantes”, “ejercicio de hipocresía y cinismo”, “encubrimiento de la
corrupción”, “inmoralidad”. “La mayor desconfianza mundial de la historia”,
“¡Todas mentiras!”, “guardan el dinero en bóvedas”, “estamos premiando a los
delincuentes”, “gobierno encubridor de malandras”, “se le podría encargar al
vicepresidente ir a hablar con la mafia rusa, con la mafia siciliana o la camorra
en Nápoles, o a Colombia a hablar con los narcos”, “vergüenza”, “corrupción”,
“lavado de dinero”, “privilegia a los delincuentes”, “enorme falsedad”, “mafio-
cracia”, “macrocorrupción”, “farsa”, “estafa” o “hay que ser cara rota para jugar
este rol de impostor”, “esta es la ley de la coima cash”, “pingüi-burguesía” en
defensa de la “Cosa Nostra”, “Inmoralidad política”, “increíble burla”, “se trata
de un paraíso fiscal sui generis”, “de la peor calaña”, “se legitima el saqueo del
Estado”, “la palabra psicotizante de la Señora Presidenta”, “destrucción”, “aho-
go” y “asfixia”, “impunidad de los corruptos”, “esquilman a los trabajadores”, “el
colmo de destruir a los opositores, sus vidas y sus bienes, sometiendo a la po-
blación con bandas de maleantes”, “saqueo al pueblo, blanqueo a los chorros”,
“la versión criolla de la nueva Gestapo, ese grupo parapolicial de jóvenes para
perseguir a los comerciantes”. O hablar de “ajuste”, apenas unas horas después
de que la presidenta inyectara al mercado interno 41 mil millones de pesos al
aumentar, entre otras medidas, las asignaciones familiares.

En definitiva, la presidenta puede gustarle a alguien mucho, más o menos, poco o nada. Pero todos, los unos y los otros, pueden comprobar que cuando dice que su gobierno va a construir casas, construye casas. Cuando propone fortalecer al Estado lo hace, y cumple su palabra cuando actúa en favor de la unidad latinoamericana. Es decir, su palabra juega un rol instituyente. Mal que les pese a los defensores retóricos de la calidad institucional, la palabra de la presidenta actúa aquí como una verdadera institución.

Contrariamente a esto, cuando cierta prensa denuncia que se amordaza la palabra, al mismo tiempo que agravia de todos los modos posibles, o cuando cierta oposición exhorta al diálogo y al consenso a través de palabras que no hacen otra cosa que inspirar violencia y enfrentamiento, lo que hacen es darles a sus palabras un rol destituyente. Destruyen la institución de la palabra –y con ella, la de los valores que enuncian– en lugar de prestigiarla.

Cuando en *Cómo hacer cosas con palabras*, John Austin habla de “palabras performativas”, se refiere a los juramentos, las apuestas, la redacción de un testamento. Pero también vale su comentario para las sentencias políticas. El filósofo británico desnuda la diferencia entre aquellas palabras que se usan para hacer meros enunciados, de aquellas a las que llama “performativas”, porque hacen, ejecutan, producen realidades nuevas. Parafraseándolo, podría decirse que mientras la oposición más se aferra a las primeras –a las que manipula y utiliza en su registro falso–, nuestra presidenta más se obstina en hacer cosas con las segundas.

¿Qué significa vamos por todo?

Tiempo Argentino, 05.07.13

En una entrevista reciente me preguntaron qué significa “Vamos por todo”. A lo primero que atiné fue a desmentir el sentido que se le da a la expresión desde el espacio de sus detractores. Demostrar el absurdo de afirmaciones temerarias como: “quieren quedarse con el dinero de los jubilados, con los medios de

comunicación, con la caja de YPF, controlar los jueces”. Ridículo, ni siquiera lo creen quienes lo dicen.

Más bien, deberíamos inclinarnos a justificar la expresión, de la que no reniego, desde un contexto histórico-político.

Ese contexto nos habla de un bloque de poder dominante que se fue consolidando durante las últimas décadas del siglo pasado. Como tal, no sólo pasó a controlar las estructuras económicas del país, sino también, a determinar la formación del sentido con que una porción preponderante de nuestra sociedad debía interpretar y justificar ese proceso, aceptarlo como natural, como inexorable.

Se trata de un largo tramo de nuestra historia durante el cual el poder dominante hegemonizó, también, el terreno de lo cultural.

Una muestra de esa preponderancia cultural, más allá de las crisis, ajustes y exclusiones económicas y sociales, estuvo dado por la instalación y reafirmación de un sistema institucional determinado, proveniente de realidades económicas, sociales y culturales muy diferentes de la nuestra.

Ni Europa –que toma la idea de Montesquieu de la división de poderes–, ni los EE.UU. –de quienes importamos su constitución– presentan una alianza histórica de clases entre la oligarquía económica y sectores militares, como la de nuestro país, lo que constituyó la base de largas dictaduras cívico-militares, con el consecuente retroceso del llamado “campo popular” en todos los sentidos.

Estructuras de poder dominante que se prolongaron, incluso, después de su retirada formal, para ejercer presión sobre los gobiernos civiles sobrevivientes.

En Europa y en los EE.UU. , las fuerzas militares y de seguridad no se visten con el atuendo de las hadas de los cuentos infantiles: defienden un orden. Pero se trata de un orden, en todo caso, sostenido por una alianza de clases diferente, donde el protagonismo lo han ejercido –hasta declararse las últimas crisis– las burguesías productivas, con una incidencia considerable de los trabajadores formales.

Bloques dominantes a favor de sociedades más cohesionadas, reitero, al menos hasta las últimas crisis. Por lo tanto, la institucionalidad política formal, tradicional, la rotación de los mandatos políticos, desempeñó un papel

muy diferente que en nuestros países, al servicio de proyectos productivos y de desarrollo más pujantes, y socialmente menos polarizados.

Nuestro gran dilema ha sido heredar, y aceptar culturalmente como válido, un sistema de rotación política basado en mandatos relativamente cortos, si se los compara con la perpetuidad de los mandos ejercidos en la conducción de los factores de poder real.

En suma, un sistema de rotación política de períodos muy limitados, válido para otras sociologías, pero ostensiblemente negativos para las nuestras. Y, en la misma línea, no sólo aceptamos dicho sistema institucional, sino que además han impuesto un sistema cultural por el cual una parte importante de nuestras sociedades, sin distinción de jerarquías, sólo se escandaliza de la posibilidad de mandatos largos de la política, pero admite con naturalidad los mandatos a perpetuidad en las cúpulas de aquellos poderes fácticos.

Para salir de este dilema, un primer desafío es distinguir entre gobierno y poder. Y este ha sido, tal vez, uno de los méritos más importantes de esta década, en términos de salto cualitativo del nivel de debate público de nuestra sociedad.

En uno de sus últimos discursos, la presidenta se preguntó: ¿por qué será que las dictaduras, cuando llegan, derrocan a los presidentes, cierran los parlamentos, inhabilitan a los sindicatos y a los partidos, pero nunca tocan al Poder Judicial? La respuesta es obvia. La condición de estructura cerrada, vitalicia, aristocrática de nuestro Poder Judicial, lo fue convirtiendo en el reaseguro de impunidad del poder, en detrimento, prácticamente siempre, de los intereses populares.

En el mismo sentido, el llamado “control contramayoritario de constitucionalidad” también lo heredamos de sociologías distintas, de experiencias históricas y estructuras productivas diferentes.

El dispositivo contramayoritario del Poder Judicial se inspiró en lo que los padres fundadores del sistema estadounidense pensaron como reaseguro contra lo que temían como “el riesgo de la tiranía de las mayorías”. En nuestros países, en cambio, las tiranías nunca fueron ejercidas por las mayorías sobre las minorías, sino a la inversa. Y así fue como nuestras Cortes Supremas, his-

tóricamente, terminaron por justificar los regímenes de facto que sometieron a nuestras mayorías.

En otro de sus últimos discursos –más precisamente el 25 de mayo– Cristina nos instaba a revisar si, en las semanas previas a diciembre de 2001, encontrábamos el vaticinio de los economistas del poder sobre la crisis que vendría.

Aquellos economistas que recorren el espín de los medios desde cierta pretensión académica, cuando son realmente lobbistas del poder, silenciaron aquella crisis, porque eran, precisamente, sus responsables.

Los pequeños ahorristas se vieron privados de acceder a sus depósitos bancarios, porque los grandes los habían fugado del país. En el mismo sentido, Cristina dice que prefiere “postularse para juez, porque, en este esquema, hay jueces que tienen más poder que el propio gobierno”.

Se trata, en definitiva, de aseveraciones que nos llevan a distinguir con claridad la diferencia entre gobierno y poder, un eje que el poder no tolera que sea explicitado. De aquí la falsedad de aquel slogan que reiteran algunos periodistas: una de las misiones principales del periodismo es “incomodar al poder”.

Pero, en lugar de criticar al verdadero poder, lo llevan adelante atacando a nuestros gobiernos populares. Este es otro eje central que debemos seguir esclareciendo. En países como los nuestros, donde sus gobiernos están desnudando al poder, atacar a mansalva a nuestros líderes y los gobiernos que conducen, es ponerse del lado del poder que dicen tener que incomodar.

Quienes, en ejercicio de su hegemonía económica, política y cultural, “fueron por todo y se quedaron con todo”, fueron los factores de poder real, no los gobiernos surgidos de la voluntad popular. Y lo hicieron apoyándose en los grandes centros de formación del sentido, desde el monopolio de la interpretación de la realidad. Es decir, los que colocaron sobre la lente pública –como si se tratara de una cámara fotográfica– el color del filtro con que debíamos interpretar la realidad.

Así, hoy critican a la ANSES cuando no lo hicieron con las jubilaciones privadas; critican controles de nuestro comercio exterior en lugar de verlos como un estímulo al desarrollo de nuestra industria; o defienden la libertad de

cambios como si no hubiera que administrar un recurso escaso, como también lo es, por ejemplo, el petróleo.

En suma, nos pusieron un filtro que nos llevó a naturalizar durante años que muy pocos tuvieran muchos dólares mientras los argentinos tenían pocos pesos, y ahora saltan cuando ven que a esos pocos se les controlan los dólares, mientras hay muchos más pesos en el mercado de consumo popular.

Estamos cambiando el filtro que va delante de la lente de interpretar la realidad. Del filtro que nos llevó durante décadas a naturalizar desde el color del filtro del poder, muchas mentiras funcionales a sus intereses, estamos pasando a un filtro que lea la realidad desde los valores y los intereses de las mayorías populares. En ese sentido, en el plano de la batalla cultural, “vamos por todo” significa: terminemos de cambiar el filtro, cambiemos todo el filtro.

Y, en ese marco, si analizáramos la expresión desde las políticas concretas, vamos por todo es algo loable, y no codicioso como lo describe la oposición. Tan loable como ir por todo el combate contra la pobreza, incluir a todas y todos los argentinos y las argentinas, terminar con todos los monopolios, disolver el poder de todas las corporaciones, erradicar del Estado todos los resabios del saqueo y la cooptación histórica del poder, unir a toda América del Sur.

Lo que está en juego

Tiempo Argentino, 15.11.13



todo esto, se agrega la crisis económica de los países centrales. Es decir, deben sostener un nivel de hiper-consumo y elevada concentración, en medio de un alto déficit y crisis productiva. ¿Quién ha pagado esa concentración de riqueza, propia de la relación centro-periferia? La periferia. Pero ya no alcanza. El empobrecimiento progresivo de la periferia y la concentración de la concentración (sic) en el centro, hace que hoy les resulten insuficientes los recursos provenientes del sur. Por eso, la crisis ha comenzado a carcomer a la periferia del centro, esto es, al Estado de bienestar europeo, y a 45 millones de

estadounidenses que hoy viven en la pobreza. Sí, el equivalente en población a más de una Argentina.

Pero no es sólo eso. Es que una región del sur, como América del Sur, les está diciendo que no. Que se resiste a seguir jugando ese penoso papel histórico que le fuera asignado debido a la complacencia de gobernantes serviles, e intenta ponerse de pie. Esa es la razón de la virulencia de los ataques a nuestros líderes y a nuestros procesos populares, de las mentiras, de los golpes blandos...

En ese marco, la Argentina está recibiendo presiones de los poderes fácticos más fuertes. Los medios hegemónicos y la presión devaluadora, a nivel interno, y los fondos buitres a nivel internacional. Y, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, responde con la reafirmación de políticas contrarias a la especulación financiera, y proclives al empleo, la demanda popular, la sustitución de importaciones.

¿Que en otros países de la región llueven los dólares y aquí faltan? Es falso. La Argentina es el país –fuera de EE.UU. – con mayor cantidad de dólares por habitante, sólo que atesorados en grandes fortunas no declaradas, depositadas en las guaridas fiscales. Pero además, lo que la mirada económica ortodoxa ve como un disvalor para nosotros es un valor. Porque la felicidad de un pueblo no se basa en que haya muchos dólares en poder de pocos, sino muchos pesos en poder de muchos.

¿Que en algunos países vecinos la inflación es menor? ¿Es esa una pregunta válida? No. El desempeño de una economía puede analizarse –de hecho, lo hace la escuela ortodoxa– desde una sola de sus variables, como la inflación. En tal caso, si la meta exclusiva fuera la baja inflación, podríamos elegir volver a los noventa, cuando la inflación era baja. Pero, desde una perspectiva heterodoxa, nos negamos a analizar así la economía, sino que le agregamos variables como el empleo, la producción, la movilidad social, que delinear un concepto más humano y social de la economía. Además, combinando ambas variables, dólar e inflación, quienes se vuelven fundamentalistas de bajar la inflación son los mismos que reclaman libertad para atesorar dólares. Mientras que, valga paradoja, cuanto más contribuimos a la circulación de dólares fuera de los

EE.UU. , más ayudamos a bajar la inflación de ellos, y aumentar la nuestra. En definitiva, no es que a la Argentina no le sale bien la política que desarrollan algunos vecinos: es que no la queremos hacer, es que tenemos otro modelo.

¿Que el fallo del juez Griesa es por errores de nuestro país, por estar ‘aislados del mundo’? Falso. Es porque el paradigma de acumulación enunciado al principio no perdona que un país demuestre éxito por fuera del sistema. Como no perdona al mismísimo Barak Obama querer otorgar salud a los más pobres. ¿O es que la crisis de los EE.UU. es porque están aislados del mundo?

En fin, cuando EE.UU. , Europa y el propio Brasil –que son compradores nuestros– retroceden o permanecen estancados, la Argentina tiene la opción de confirmar el ciclo, enfriando su economía, volviendo al FMI –como propone la oposición– y empobreciendo mayorías una vez más. O, como lo ha decidido nuestra presidenta, se interrumpe el ciclo privilegiando la demanda interna, la integración regional y la cooperación sur-sur.

Esto es lo que está en juego en términos de proyectos de país. No sólo la mayoría parlamentaria del proyecto nacional para garantizar la aprobación de los futuros proyectos de ley, sino evitar un clima que debilite la capacidad de maniobra del gobierno popular.

Desde luego que es un problema la remarcación de precios que no responde a causas justificadas sino a la voracidad del capital de sostener su tasa histórica de ganancia, que en los últimos años se ha vuelto más razonable debido a la recuperación de los salarios.

Desde luego que el déficit energético generado a partir del crecimiento productivo es un problema, pero se retomó el camino al autoabastecimiento.

Desde luego que la matriz concentrada de nuestra economía es un problema, pero las actuales políticas conducen a la industrialización y a la diversificación, no a la primarización.

Gobernar no es carecer de problemas, sino responder a una escala de valores y prioridades a la hora de resolverlos. Los que le dan más importancia a si está pago o no un cupón de seguro automotor que a la soberanía nacional, no es que no sepan cuál es el orden de prelación de las cosas. Es que no reparan en

ningún escrúpulo con tal de volver a las políticas de ajuste social con las que históricamente han visto protegidos sus negocios.

Listas negras: el genocidio cultural

Tiempo Argentino, 26.11.13

El 23 de febrero de 1982, sin saber lo que ocurriría semanas después en Malvinas y su desenlace posterior, escribí un documento titulado “El genocidio cultural argentino”, que ocuparía por varias semanas la cartelera de la Facultad de Derecho de La Plata, donde yo militaba. Hoy, movilizado por el hallazgo de archivos de la dictadura y de sus tristes “listas negras”, transcribo algunos de sus párrafos: “...destruyeron todo, nuestra industria quedó desmantelada bajo el pretexto de que debía competir para mejorar su eficiencia... a medida que nuestro aparato productivo se iba paralizando, los trabajadores perdían sus fuentes de trabajo... pero no bastaba... había que acallar la voces de protesta... los argentinos fueron detenidos sin miramientos, se torturó y se asesinó a mansalva... y a pesar de todo, aún no hemos analizado la infamia más grave (por su prolongación en el tiempo...): el genocidio cultural.”

Aquel documento terminaba diciendo: “...porque cuando le proponíamos a la juventud la realidad de la Democracia como solución de nuestros males; cuando se le planteó la realidad de la Justicia Social; cuando le digamos que procuramos arribar a la realidad de una convivencia organizada sobre la base del respeto por los derechos y libertades del Hombre, la juventud puede llegar a sonreír irónicamente diciendo que esas no son realidades, sino utopías... Es decir, cuando la convicción de que existe una realidad mejor deja de ser una realidad, habremos arribado al punto culminante del genocidio cultural...”

Promediaban los años ‘70, plena Guerra Fría. Más allá del loable intento del Movimiento de Países No Alineados, el mundo está dividido en dos grandes zonas de influencia –con ejes en Washington y en Moscú– que se disputan la hegemonía.

Como antes el Chile de Salvador Allende, la Argentina se propone honrar el principio de la tercera posición a partir de políticas autónomas de los gobiernos de Cámpora y Perón, pero el golpe de 1976 vuelve a colocarla, como en la dictadura de Onganía, bajo la esfera de los EE.UU. .

Con eje en un esquema productivo netamente industrial e intensamente demandante de mano de obra, el mundo generó entre 1945 y 1975 tantos bienes y servicios como los que había producido desde el origen de la cultura hasta esos momentos. Ese incremento exponencial de la riqueza se obtuvo bajo la forma política del Estado de bienestar, con fuerte intervención en el proceso económico.

Pero, a la par de ese crecimiento que tenía al Estado de bienestar como palanca fundamental, surgen tres grandes vectores:

- a) Las organizaciones supranacionales políticas y económicas (ONU, FMI, Banco Mundial, GATT, Acuerdos de Bretton Woods), que se encargaron de poner límites a la autonomía estatal.
- b) El colosal aumento del capital privado y su internacionalización; se incrementa el volumen de recursos de los mercados respecto del volumen de los recursos estatales.
- c) Los grandes movimientos sociales, en respuesta a las tres grandes consecuencias acarreadas por la industrialización. El pacifismo a partir de la carrera armamentista, el ecologismo a partir de la contaminación ilimitada, y el feminismo a partir de la incorporación masiva de la mujer al mundo de la producción y el consumo.

Es decir, son las propias consecuencias institucionales, económicas y sociales de la expansión generada por el Estado de bienestar, las que abrigan el germen de lo que décadas después sería su propio debilitamiento.

Llegamos a los años '70 con una tremenda expansión e internalización del capital privado, por un lado y, por el otro, con un extendido clima de movilización de la sociedad civil, que se había ido fraguando durante las décadas anteriores. Comenzó con la independencia de la India en 1947 y la adopción

del comunismo en China en 1949, curiosamente los dos países más poblados de la Tierra. Y prosiguió con el vasto movimiento de descolonización en Asia y África, que hizo que el número de Estados reconocidos pasara de los 51 que habían formado la ONU a más de 160 en sólo dos décadas, y esto al calor de activos movimientos de liberación como los de Argelia o el Congo.

El Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII –el Papa bueno– produce una serie de innovaciones litúrgicas que acercan a la Iglesia con sus fieles, y buscan volver a Cristo desde un compromiso mayor con la pobreza. En Cuba triunfa la revolución de Fidel Castro y Ernesto Guevara, proyectando a la guerra de guerrillas como una metodología exitosa que pretenderá ser imitada en el resto del continente, detrás del objetivo de construir al Hombre Nuevo.

En los EE.UU. Malcolm X en forma vehemente desde el norte, y Martin Luther King en forma pacífica desde el sur, encabezan la reivindicación de los derechos de los afro-descendientes. Y este último congrega en Washington a la movilización más concurrida hasta ese momento, bajo la consigna “Tuve un sueño: que todos los seres humanos somos iguales”.

Una fuerte resistencia –modesta en infraestructura pero potente en cuanto a su moral de lucha por defender su propia tierra– desaloja de Vietnam al ejército más poderoso del mundo. Un joven campeón mundial de boxeo –Cassius Clay, que será luego Muhammad Ali– es despojado de su título por negarse a ir a la guerra. Y todo esto genera en los propios EE.UU. la respuesta de los jóvenes, que levantan la bandera de amor y paz, e inauguran el ciclo del rock como movimiento de protesta.

En 1968 y casi en simultáneo, los jóvenes que vivían en un régimen de supuesta igualdad, luchan por libertad en la “Primavera de Praga”. Y los que vivían en un régimen de supuesta libertad, luchan por igualdad en el “Mayo francés”. En definitiva, el mundo se encuentra ante dos grandes corrientes, la del capital internacional y la de los movimientos sociales, que disputan el exuberante excedente económico generado a partir de la posguerra. De acuerdo con quién prevaleciera en esa disputa iba a ser el perfil del mundo que se trazaría a partir de ese momento tan crucial.

La contienda la ganó el capital, y a partir de ese momento, se profundizó la restauración conservadora, que pocos años más tarde simbolizarían Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ensanchando el campo de la financierización de la economía mundial.

América Latina fue protagonista de ese proceso. El clima de movilización social, la militancia masiva en organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, ya sea de movimientos populares como de organizaciones de izquierda, había creado en toda la región un clima social que pugnaba por objetivos profundamente igualitarios, y que por lo tanto ponía en riesgo los intereses del capitalismo internacional.

El imperialismo estadounidense se había encargado en las últimas décadas de la formación ideológica de las fuerzas armadas de nuestra región desde la Escuela de las Américas, impartiendoles la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional”. La potencia dominante no podía tolerar que en un área bajo su influencia cundiesen ideas capaces de cuestionar al capitalismo, por lo cual había que desplegar fuertes políticas de contra-insurgencia para disciplinar a aquellos movimientos.

Las dictaduras que se instalan en la región al promediar los ‘70 se apoyan, pues, sobre un eje fundamental: la primera fase del ajuste estructural en pro del capital financiero triunfante sólo podía aplicarse en la medida en que se eliminaran los factores de resistencia y oposición social, política e ideológica. Se trataba de un proyecto de remplazo de las estructuras productivas nacionales por una estructura financiera transnacional que jamás se hubiese impuesto de haberse mantenido los altos niveles de militancia política, sindical y estudiantil que predominaban en toda América Latina.

La excusa –en plena Guerra Fría– era que una región bajo la hegemonía de los EE.UU. no podía seguir permitiendo la penetración de su enemigo ideológico. En el plano estrictamente militar, y en el marco de la carrera armamentista y el acopio de arsenales nucleares, las únicas fuerzas armadas en condiciones de dar batalla al marxismo con el que se asociaba a aquellas luchas populares eran las de los EE.UU. . Pero como el “enemigo” no se expresaba sólo

a nivel militar, sino que se capilarizaba en nuestras sociedades desde lo cultural e ideológico, el papel asignado a nuestros ejércitos regulares era combatirlo y reprimirlo en esos mismos planos. Como quedó demostrado en Malvinas, nuestras fuerzas armadas relegaron su papel de defensa ante un ataque exterior (doctrina de la defensa nacional), para ocuparse del enemigo interno (doctrina de la seguridad nacional). Y esa fue la base del terrorismo de Estado.

Por todo esto, a la desaparición física de miles de compañeros y compañeras, se sumó la persecución ideológica y la batalla cultural. El sistema de propaganda exaltaba, por un lado, la calidad de los productos extranjeros en detrimento de nuestra industria; en el plano simbólico, estigmatizaba a los militantes asociándolos con la idea de que lavaban el cerebro de los jóvenes comunes, que –por ejemplo– debían ir a la universidad a estudiar y no dejarse “contaminar” con ideas políticas. Y al grueso del pueblo argentino lo atacaron por vía de la censura de sus artistas, intelectuales y figuras públicas.

Ese fue el papel de las listas negras que fueron descubiertas días atrás en los archivos del Edificio Cóndor de nuestra Fuerza Aérea. Para aplicar el plan económico que tenía por finalidad en su primera fase destruir nuestro aparato productivo, desarticular a la burguesía nacional y debilitar al movimiento obrero organizado, había que tener una sociedad anestesiada, impedida de pensar, sin acceso a manifestaciones culturales abiertas que estimularan la idea de un proyecto nacional y popular. En ese contexto, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, por citar sólo dos casos, eran artistas e intelectuales que no sólo movilizaban al pueblo desde el afecto, sino muy especialmente desde el pensamiento. Por eso había que prohibirlos, destruirlos, difamarlos y, cuando no, obligarlos al exilio a cambio de que preservaran sus vidas.

La reafirmación de la verdad histórica develada, unos cuantos años después nada menos que por un jefe militar habla, por un lado, de un avance fundamental en la recuperación cultural de nuestro país y, por otro lado, nos da una nueva oportunidad de valorizar a nuestros artistas y figuras populares, como portavoces de un proyecto en el que el pueblo, y no el capital financiero internacional, sean los protagonistas.

Fútbol y capitalismo financiero

Tiempo Argentino, 03.01.14

Días atrás tuve el gusto de presentar el libro *Violencia en el fútbol, investigaciones sociales y fracasos políticos*, que compiló el investigador del CONICET José Garriga Zucal, y que reúne más que interesantes análisis y contenidos. He aquí lo que considero mi pensamiento central –desde luego que sin pretensión científica ni académica alguna– acerca de un tema de gran repercusión social.

Antes que nada, se debe caracterizar la violencia. No se trata de una violencia que surge de la pobreza. Reducirla a ello sería caer en la trampa ideológica de la estigmatización de la pobreza, que acostumbra a asociarla con la violencia, con el delito, con el clientelismo, en una visión clasista y racista, con el fin de dejar a salvo violencia, delito y clientelismo practicados por quienes poseen solvencia económica. En el caso del fútbol, me inclino a asociar la violencia con la circulación de mucho dinero, mucho antes que con la pobreza. En todo caso, si una persona pobre está integrada a un circuito de violencia en el fútbol, lo más factible es que trabaje para alguien que tiene mucho dinero. Tampoco creo que se trate de una violencia vinculada con la pasión deportiva, como tal vez sí sucediera varias décadas atrás. Hoy el origen no es la pasión, la pertenencia, la identificación con una divisa, en contra de otra. Los hechos más graves de violencia resultan, en los últimos tiempos, de rencillas surgidas del interior de una misma divisa.

Descartada pues, la idea de una violencia asociada con fenómenos puntuales, prefiero referirla a un entorno más estructural que es el modo de acumulación financiera. En las últimas décadas hizo su aparición un capitalismo financiero en paralelo con el productivo, que incluso fue acumulando un volumen de recursos mucho mayor que el del universo productivo. Es decir, la multiplicación del capital se ha independizado de la producción y el intercambio de bienes, para generar su propio circuito a través de la pura circulación de dinero, de los llamados productos derivados. Traslademos este razonamiento al fútbol. Su naturaleza lúdica, su raíz deportiva, está conformada por el jugador,

la pelota, la cancha, los colores de la camiseta y el hincha. Con excepción de los ingresos de contados astros deportivos, que son una minoría en comparación con el conjunto de los futbolistas, el punto de acumulación de dinero relacionado con el fútbol no tiene tanto que ver con su esencia deportiva, con el juego en sí, sino con los negocios financieros que surgen a su alrededor. Esto es, el negocio de transferencias, intermediaciones, publicidad, indumentaria deportiva, televisación de los partidos. Y, en el plano doméstico, el merchandising, los estacionamientos, la venta de alimentos y bebidas en los estadios, etcétera.

Es aquí donde creo que reside el nudo del problema en nuestros días. Es tal la cantidad de dinero que mueve el negocio del fútbol (no ya el fútbol-deporte), que los niveles de violencia se tornan proporcionales al monto de los intereses en disputa. Y reafirmo que se trata de un problema estructural, y no futbolístico, ya que merchandising, estacionamiento y venta de alimentos y bebidas se reproduce en todo espectáculo masivo, no sólo en los partidos de fútbol, porque tiene que ver con un aumento de los niveles de informalidad en la economía. Y con la ausencia del Estado. Ausencia de control e incumplimiento de sus funciones esenciales. Así, el sueldo de un policía no lo paga íntegramente el Estado, sino que una parte corre por cuenta del particular al que le permiten estacionar sin riesgo a cambio de que le pague una coima a ese agente policial. ¿Cuánto dinero se mueve a partir de que los clubes cambian cada año su modelo de camiseta? La titular, y la alternativa. ¿Qué tiene que ver eso con la esencia lúdica? ¿Los jugadores juegan mejor por eso? O lo que se fomenta es un consumismo y un negocio adicional que corren por fuera del juego en sí mismo.

A diferencia de antaño, son cada vez menos los casos en que un jugador permanece años en un mismo club. Por eso, uno de los términos históricos de la identificación con una divisa (camiseta-jugador-hincha) tiene menos relevancia. Hoy, la pasión por un club se asocia con la infancia, con el barrio, con un vínculo familiar, con el impacto causado por una campaña, pero no con la perdurabilidad de los jugadores, porque estos rotan de club en club por períodos cada vez más breves. Es decir, los jugadores no duran en sus clubes.

De aquí que no se llegan a identificar con la divisa, y esta pasa a ser un vínculo puramente simbólico entre los colores del club y el hincha, sin el jugador en el medio, como lo era en otras épocas. Pero no es casual que no duren. Sino que necesariamente deben ser transferidos, porque con cada transferencia hay un conjunto de nuevas profesiones que se enriquecen –fideicomisos, representantes, intermediarios, dirigentes, periodistas (sí, periodistas que exageran las cualidades de un jugador y luego cobran un porcentaje de su transferencia), entrenadores– aunque muchos de ellos sean muy pataduras jugando al fútbol.

Y este mecanismo va alcanzando niveles cada vez más altos, hasta hacer depender de él la fijación de las propias reglas deportivas. Por ejemplo, la FIFA no establecerá claramente si quienes hayan sido sancionados durante las eliminatorias del campeonato Mundial se verán o no imposibilitados de jugar el primer partido de la ronda final, hasta no saber si será alcanzada alguna súper-estrella, porque ello resentiría el interés por la televisación y la venta de entradas.

Y todo esto trastoca la escala de valores elementales. Desde lo ético, una vida vale más que un aviso de TV. Sin embargo, se ha persistido en jugar partidos aun cuando hubiera muertes en los alrededores del estadio, por el sólo hecho de cumplir los compromisos de televisación: una comprobación más de que lo financiero está por encima de todo. Esto constituye una renuncia más de la política a su rol de liderazgo ético y pedagógico en una sociedad.

Finalmente, estoy seguro de que una firme decisión política podría terminar con los hechos más graves de violencia relacionados con el fútbol. Me resisto a creer que el Estado, en sus distintos niveles –nacional, provincial y municipal– deba declarar su impotencia, y renuncie a ser más fuerte que los grupos de interés que están comprometidos con negocios de la escala de los mencionados, que son, a mi entender, la causa principal de la violencia en el fútbol.

Inseguridad, entre la realidad y la demagogia

Tiempo Argentino, 21.01.14

El tipo de abordaje de los grandes medios sobre el tema de la denominada inseguridad ciudadana no es un fenómeno solamente argentino, sino que se trata de un discurso de las derechas que puede analizarse de manera similar –inclusive en el lenguaje utilizado– en todo nuestro subcontinente. Y forma parte de su estrategia de agitar la cuestión de la inseguridad como uno de los ejes para desgastar a los procesos populares de la región.

Desde luego que hay tareas urgentes para nuestros gobiernos. Debemos reconocerlas y darles respuesta, porque se trata de una preocupación real, efectiva, para muchísimas personas. Y es allí donde toman valor las políticas concretas sobre las áreas policial, judicial y del servicio penitenciario.

La ineficacia del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires –por ejemplo– es muy ostensible, desde el momento en que alrededor del 80% de los delitos callejeros son cometidos por personas reincidentes. Esto significa que, lejos de cumplir con su misión de reintegración a la sociedad, empeora la situación. Y hay ineficacia a todo lo largo del proceso que va desde la investigación de un delito hasta la detención, el juzgamiento y la privación de libertad, es decir, que estamos ante un verdadero problema integral de la inseguridad, que comprende, aunque no se agota allí, al ámbito institucional.

Por ello es que debemos condenar aquellas respuestas que reducen el tema a una propuesta prácticamente milagrosa, porque se trata de un tema muy complejo, y multidimensional, que debe ser abordado seriamente, con políticas de largo plazo y de manera integral. Todos estos son ingredientes que, tal vez en este tema más que en otros, por su complejidad y por la demanda social, exigen la formulación de verdaderas políticas de Estado.

Desde lo puramente conceptual, si me preguntaran si es mejor un policía con un buen machete para golpear o una escuela con aulas aireadas, bien equipadas y docentes que den clase con mucha capacitación y dignidad laboral, yo

me inclino por esto último. No tengo dudas de cuál es una mejor política de seguridad. Pero también debemos ocuparnos del corto plazo.

Nunca me van a escuchar decir que la inseguridad es una sensación: es una realidad. Pero una realidad muchísimo más compleja, muchísimo más seria y más profunda que como es abordada por los medios hegemónicos con absoluta mala intención e irresponsabilidad, con el único objetivo de obtener rating y endurecer el discurso de la sociedad, sin permitirle analizar el fondo del problema.

Debemos atacar los hechos más inmediatos de la inseguridad con políticas puntuales, pero si no se erradican las causas más profundas que nos llevan a vivir en una sociedad insegura, estaremos tapando un agujero, pero seguirán abriéndose infinitos agujeros más. Vivir en una sociedad segura es una idea mucho más amplia que la de vivir en una sociedad blindada, que es lo que intenta inculcarnos la derecha.

Los medios hegemónicos, a la hora de emitir el mensaje sobre la inseguridad, lo malinterpretan, lo hacen de manera muy sesgada, irresponsable. Se limitan a entrevistar a un allegado directo de la víctima de un delito tan sólo unos minutos después de cometido el hecho, y luego lo reproducen incesantemente a lo largo del día y de la noche, con lo cual sólo consiguen generar un clima de zozobra, negando la posibilidad y los elementos para un análisis más profundo, más integral. Al abordar el tema únicamente desde la sensación de pánico, reducen el reclamo hacia políticas más duras, más represivas.

Si, en cambio, la sociedad dimensionara el fenómeno de la inseguridad en toda su complejidad, esto le permitiría posicionarse de otra manera en su actitud, y en su demanda.

Nosotros debemos insistir en que la inseguridad es un concepto integral, que también comprende –y de manera principal– mejorar las políticas de empleo, las políticas educativas, las políticas de contención familiar, sobre todo las dirigidas a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad. Sectores respecto de los cuales el gobierno nacional ha hecho muchísimo, pero donde aún persisten nichos problemáticos.

En la actualidad, asistimos –además– al avance del crimen organizado, que cuenta con una logística y un armamento sofisticados, que se vincula de manera frecuente con el narcotráfico, y que suele requerir el servicio de jóvenes que no estudian ni trabajan. No se trata de jóvenes totalmente desarticulados de la sociedad, sino de jóvenes que tienen novia, que van al cine, que son consumidores. Pero en lugar de utilizar ocho horas de su día en un trabajo formal, salen a delinquir al servicio de esas bandas. De aquí el imperativo y la urgencia de integrar a estos jóvenes a través de un trabajo digno, del estudio, de la devolución de la esperanza.

Otro de los problemas relativos a la inseguridad lo constituye la corrupción que ha carcomido parte de la institución policial, lo que hace que muchas veces cuando –por ejemplo– se denuncia un robo, el agente de policía sabe perfectamente quién lo cometió, porque es precisamente con quien se reparte lo robado. Y esto, al margen de otro problema muy grave que es el armado de causas, que generalmente perjudica a los más humildes. Algo similar sucede dentro del sistema penitenciario. No es la totalidad, claro, pero existen casos reiterados.

Nuestros conciudadanos y conciudadanas no deben creer en una simplificación tal como que un salvador será quien velará por su vida desde sus virtudes individuales y mesiánicas, como lo ha sugerido Francisco de Narváez, con su frase “un crimen, un castigo”, o Sergio Massa, diciendo que la resolverá a través de un proyecto de ley.

La inseguridad debe ser abordada de manera integral, responsable, y no reducirse a un mensaje demagógico.

La batalla central por las creencias (I)

Tiempo Argentino, 29.01.14

La hegemonía cultural del poder dominante

Cada proceso histórico es portador de una dinámica propia, a la que tanto George Hegel primero como más tarde Karl Marx en sus respectivos estudios del siglo XIX llamaron dialéctica. Sucedió precisamente a consecuencia de esa evolución dialéctica de la historia, la aparición y el ascenso de nuevos grupos sociales, que al principio cuestionaron el orden establecido, y con el tiempo se transformaron en actores y clases dominantes de un nuevo período histórico.

Ahora bien, el correlato práctico de esta visión conceptual de la historia ha sido, invariablemente, la desigualdad. Una brecha de desigualdad social acentuada hoy de tal manera, que la fortuna que acaparan las 85 familias más ricas del mundo es igual a los recursos de los 3500 millones de seres humanos más pobres. En los EE.UU. , por ejemplo, el 1% más rico acumuló el 95% del crecimiento posterior a la crisis de 2009, mientras el 90% de la población siguió empobreciéndose.

Como parte de este mismo proceso, nos encontramos frente a lo que Antonio Gramsci, ya en pleno siglo XX, denominara “hegemonía cultural”. Esto significa que un sistema de acumulación desenfrenada tal como lo es el capitalismo, no se puede mantener sólo a través de la dominación económica, política o militar, es decir, por medio del simple uso o la amenaza del uso de la coerción. Las clases o sectores dominantes deben lograr cierta aceptación general de ese sistema que los favorece, a través del sistema religioso, el sistema educativo y las grandes cadenas de comunicación. E imponer así, al conjunto social, su propio sistema de significados a través del cual debe interpretarse la realidad: construir el “sentido común” a partir de sus propios intereses; hacer que sus propios intereses sean aceptados, naturalizados e identificados por el conjunto –esto es, por los propios perjudicados– como sinónimo del “interés general”. Según Gramsci, la hegemonía involucra, pues, la base económica, la superestructura política y la superestructura espiritual.

Educa “para que los dominados conciban su sometimiento como natural”. Disputa y vence no sólo en el terreno de la riqueza, sino fundamentalmente en el terreno de las creencias. Pasa de la hegemonía a la supremacía. La supremacía no es sólo dominio, es además dirección intelectual y moral. Y necesita para ello de lo que Gramsci llama los “intelectuales orgánicos”, los “persuasores”, que en el caso de la Argentina de nuestros días son los Pagni, los Morales Solá, y también los consultores y economistas ortodoxos que desfilan por los medios del sistema de poder.

Dos creencias profundas. Sectores medios y populares

Más allá de los conflictos coyunturales de interés y de las batalla mediáticas que se han ido sucediendo, y se sucederán en el futuro, lo que procuro en este resumen es indicar dos cuestiones sobre las que la “hegemonía cultural” del poder ha trabajado más estructuralmente, de modo de arraigarlas entre las creencias más profundas de una parte muy importante de nuestra sociedad, con prescindencia de su situación socioeconómica. El poder ha convertido estas creencias en “sentido común” a partir de sus propios intereses, de modo de neutralizar la capacidad de transformación de los sectores populares. Y es por eso que, para mantener ese orden establecido, ese status quo de supremacía económica y cultural, el poder resiste, rechaza y combate inescrupulosamente todo intento que hagan nuestras democracias para mover ese ‘sentido común’ de su estancamiento, llevarlo a una visión más crítica, someterlo a una interpelación por parte del pueblo desde sus intereses, y no desde los intereses del poder dominante.

Una de las batallas centrales, más profundas, a sostener por el campo popular en el terreno de las creencias, es la necesidad de vencer la separación histórica entre sectores populares y sectores medios, para construir una gran alianza social. En un país con el entramado social y productivo de la Argentina, sólo esta coalición social integrada por los sectores populares y los sectores medios es la que sería capaz de constituir un bloque de poder de una envergadura suficiente como para prevalecer por sobre los proyectos oligárquicos, que han edificado la estructura dependiente de nuestro país. Y que

han interrumpido cíclica e invariablemente todo intento de reconstrucción de nuestro tejido social y productivo en pos de un desarrollo autónomo. Mucho más que en un impedimento de orden económico o en cualquier otra contradicción de intereses, la razón más profunda que ha impedido fortalecer esta coalición hay que indagarla en el campo de las creencias más arraigadas en nuestras capas medias. Aunque no sólo en ellas.

Históricamente, cada ciclo de políticas de ajuste ha perjudicado por igual a los sectores trabajadores más humildes y a los sectores medios. La última crisis, a principios del milenio, arrojó a la pobreza a vastas franjas sociales hasta entonces incluidas al sistema productivo y de trabajo.

El despojo de sus ahorros bancarios fue vivido por las capas medias con la misma disconformidad con que los sectores más humildes perdían su trabajo. Y esta convergencia se hizo sentir en aquella consigna de “piquete, cacerola, la lucha es una sola”, e incluso intentó aglutinarse en asambleas barriales que no mucho tiempo después se desvanecerían debido a distintos motivos.

La batalla central por las creencias (II)

Tiempo Argentino, 03.02.14

La concentración nos depoja por igual

El poder económico beneficiario de los sucesivos ciclos de ajuste en nuestro país, lejos de conformar alianzas sociales amplias, se fue angostando progresivamente hasta culminar en un vértice muy pequeño de grupos concentrados que se adueñaron de todo un aparato productivo otrora diversificado. Fue en un número reducido de grupos económicos –transnacionales y nacionales transnacionalizados– en los que terminó de cristalizarse la estructura productiva, financiera, de comercialización y distribución, y los negocios de importación y exportación de bienes y servicios, que pasaron de la propiedad social en manos del Estado a las empresas privadas cuyos abusos todavía padecemos.

Según el último informe del Centro de Investigación CIGES, una sola empresa concentra el 80 por ciento de la producción de panificados; tres empresas producen el 78 por ciento de las galletitas; dos empresas concentran el 82 por ciento de la producción de cervezas; dos empresas elaboran el 79 por ciento de los fertilizantes; una sola firma fabrica el 85 por ciento del acero; una sola firma monopoliza el 100 por ciento del aluminio; una sola firma concentra el 93 por ciento de la producción de etileno; tres empresas dominan el 97 por ciento del mercado del cemento.

Y según el propio Ministerio de Economía de la Nación, siete empresas concentran el 70 por ciento de la producción y exportación de aceites, y la producción de harinas está aún más concentrada. Desde el punto de vista de la formación de precios, de la industria de la construcción, así como de la oferta de empleos y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es la diferencia entre sectores medios y populares en cuanto al daño que les depara este modelo de concentración?

Los sectores medios profesionales, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, e incluso aquellos empresarios mayores que en otras etapas habían conformado la denominada “burguesía nacional”, fueron igualmente perjudicados. El modelo oligárquico no hizo distinción a la hora de desplazar franjas sociales. Y, al mismo tiempo, constituyó una trama de poder que, con el transcurso del tiempo y las circunstancias histórico-políticas, se fue trasladando desde unas fuerzas armadas cada vez más desprestigiadas socialmente (instrumento sólo de coerción), hacia la apropiación y concentración de grandes cadenas de medios de comunicación, que operaran como instrumentos de aquella “dirección intelectual y moral” a la que me referí anteriormente.

Cómo opera el dispositivo cultural del poder

Por un lado, sectores humildes, trabajadores y medios eran desalojados por igual de un modelo productivo que había incentivado, aunque trabajosamente, la movilidad social ascendente. Pero culturalmente, los grupos dominantes tuvieron la astucia de compactar en aquellas mismas franjas medias a las que

desplazaba en lo económico, una serie de ideas fuerza muy contradictorias desde el punto de vista de los intereses de éstas.

Lejos de solidarizarse con los sectores populares y confluír con ellos en la democratización del modelo político y económico, su convicción cultural más profunda tiende a estigmatizar a las franjas más humildes, y asume como referencia, por el contrario, las pautas de vida, los usos y costumbres de la oligarquía. Frases tan comunes como “esos negros de mierda”, o “son unos vagos que viven a costillas nuestras de la ayuda del Estado”, son una cabal expresión de esa fractura cultural existente al interior de un bloque socioeconómico, que, desde el punto de vista de sus grandes intereses generales debería estar cohesionado. El reclamo de mano dura inculcado por el tóxico discurso dominante sobre la inseguridad, tiene por objetivo profundizar esa brecha social y cultural.

En los últimos días, el programa Progresar, lanzado por la Presidencia de la Nación, se convirtió en ‘hashtag’ de las redes sociales. En ellas se reiteraban comentarios peyorativos provenientes de esas creencias profundas instaladas a partir de la hegemonía cultural que ejerce el poder dominante. Comentarios que no tomaban en cuenta al menos dos elementos que hacen que ese programa de inclusión social no sólo beneficie a sus destinatarios directos, sino también, indirectamente, a los sectores medios. El primero es que configura un factor de inclusión y reconocimiento social que opera como un incentivo a alejarlos de la marginalidad y la ilegalidad. Y el segundo es que se trata de una ayuda económica a volcarse, de lleno, al consumo dentro de un circuito en el cual, los sectores medios son protagonistas.

En el mismo sentido, escuchamos a sectores medios repetir como loritos ciertas estadísticas que describen el “mal desempeño” o la “deserción” de nuestros estudiantes. Sin tener en cuenta que, aun cuando pueda reconocérseles una cuota de certeza, el sistema educativo argentino ha dado un notable salto de inclusión en la última década, lo que lleva a referirnos a un universo superior al 90 por ciento de la población, contra no más del 50 ciento que concurría a las aulas al promediar la crisis. Es decir, aquí hay una fuerte política pública cuya primera etapa es la inclusión, a la que seguirá la excelencia, pero que no

podría, de ninguna manera, comenzar por la excelencia. Se trata de jóvenes en cuyo universo simbólico forjado durante su primera infancia no registran la pertenencia a una familia armoniosa, con guardapolvo y mantel en la mesa. Arrastran una memoria de exclusión, de desamparo, y, por lo tanto, probablemente no vamos a encontrar en ellos las condiciones para una alta calidad educativa, ni alto rendimiento, ni la mejor disciplina: lo primero que tenemos que hacer es incorporarlos al aula, integrarlos a una comunidad. Y es lo que se hizo. Y con ello, situarlos unos pasos más lejos de la marginalidad. Y de las tentaciones que suele ofrecerles el crimen organizado, en ausencia de otras alternativas de ser reconocidos. Sin embargo, la clase media, insisto, se aferra a ciertas noticias-catástrofe y repite como lorito que ha descendido la calidad educativa, cuando en verdad, estamos haciendo lo imposible por dar un enorme salto en la calidad social.

Sin ir más lejos, durante los últimos saqueos vimos escenas donde sectores medios se pertrechaban preventivamente ante la presencia de jóvenes humildes, por el solo hecho de su vestimenta o de su porte físico. Es así que toda política pública tendiente a morigerar los tremendos efectos de esta desarticulación social –producto, precisamente, de los planes de ajuste impulsados por quienes hoy apuran los golpes de mercado– tendría que ser bienvenida y ayudada por los sectores medios, en lugar de ser criticada.

La batalla central por las creencias (III)

Tiempo Argentino, 05.02.14

La cuestión del Estado y las políticas públicas

Complementariamente, está arraigada entre las creencias más profundas de nuestras capas medias la idea de que sus infortunios económicos siempre se deben a las malas políticas públicas, mientras que su recuperación y suceso en los negocios anida puramente en su mérito personal. Aquí reside claramente uno de los postulados fundamentales que el liberalismo ha sabido

enraizar en nuestra cultura, y es la tirria, el cuestionamiento a priori hacia las políticas públicas, ya se trate de un modelo de ajuste como de un gobierno popular. Aun cuando haya sido el proveedor de nuestra instrucción pública, haya financiado nuestra Universidad gratuita, sostenga el hospital público y el sistema de justicia, y sea el responsable de esa seguridad a la que los sectores medios le reclaman cada vez más eficiencia, el Estado les molesta. Les molesta cuando cobra impuestos, y les molesta cuando despliega políticas de inclusión gracias a la redistribución de esos impuestos. Ahora bien, si aumentan las ventas de su emprendimiento comercial, nada tienen que ver las políticas públicas que alientan la demanda. Si aumenta la oferta de bienes culturales, nada tienen que ver la garantía absoluta a la libertad creativa del pueblo, los estímulos a la producción de películas y de ficción televisiva, el establecimiento de centros de divulgación, y el poder adquisitivo como para que las mayorías concurren a los miles de cines y teatros que han revivido durante los últimos años. Y lo mismo podría decirse del aumento del turismo, y de tantas otras muestras de integración social y productiva acaecidas a partir de la decisión política de poner en vigencia un modelo de inclusión social, pleno empleo, diversificación productiva, crecimiento del mercado interno y estimulación de la demanda popular.

El establishment agobia al pueblo con su prédica contra la administración estatal de una empresa como Aerolíneas, que ha mejorado notablemente su desempeño, adjudicándole un déficit propio de toda actividad orientada a triunfar en términos de renta social antes que en su mero balance de contabilidad, aquí y en el mundo. Sin ir más lejos, la escuela pública a la que le debo mi formación primaria, arrojaba más gastos que ingresos en su cuaderno diario de contabilidad. La cuestión es ir contra el Estado.

En nuestros tiempos, los sectores dominantes –eternos triunfadores en todo ciclo de ajuste pese a la ilusión transitoria que crean en las capas medias– buscan congraciarse con estas ubicando en la primera plana de sus diarios la ‘confiscatoria injusticia’ que implica poner límites al atesoramiento de dólares. Cuando un gobierno popular como el que tenemos, intenta y logra fortalecerse en el manejo

de las variables macroeconómicas, se desendeuda y autonomiza financieramente, y crea instrumentos de ahorro en moneda nacional, los factores de poder arrecian su dispositivo de desestabilización con zócalos y mensajes atemorizadores de modo de volver a hacer volcar el ánimo de los sectores medios hacia el atesoramiento de divisas. Se erigen pasajeramente en representantes de sus ‘intereses’, cuando, en verdad, lo está en juego es el interés de esos grupos por obtener la liberalización del mercado cambiario para manejar la entrada y salida de sus ganancias en dólares medidas en cientos de millones, y no en los pocos billetes que podría comprar periódicamente un miembro de la clase media.

En definitiva, la dominación cultural ejercida históricamente por el poder dominante, ha sido exitosa en su objetivo de alejar ideológicamente a los sectores medios –por un lado– de los pobres y –por el otro lado– del Estado. Y romper, de este modo, las dos coaliciones que, si se fortalecieran, interrumpirían definitivamente los ciclos de ajuste oligárquico: la alianza social ‘sectores populares-sectores medios’, y la alianza política ‘Estado-sociedad civil-aparato productivo nacional’.

Conclusión y desafíos

Esta estructura de poder ha creado una subjetividad sostenida por vastas franjas de la población argentina, aun cuando se contraponen con sus propios intereses. Y la ha llevado a consentir la depredación del sistema productivo y de sus aspiraciones de desarrollo. Pero esto no tiene por qué ser eterno. No hay ley de las ciencias sociales ni de la historia de la política y la cultura que así lo determine.

Desde este punto de vista, el gobierno argentino es claramente contra-hegemónico. Conduce políticamente una etapa de plena resignificación de conceptos, prácticas y sentido. Ha ensanchado los márgenes de inclusión social y el abanico de derechos.

Por un lado, tanto el texto de la llamada Ley de Medios como el contexto de debate público que desató su proceso de formación y sanción, han contribuido a complejizar el debate público sobre el sádico servicio que prestan los medios concentrados al proyecto de los grupos dominantes. Y abre nuevos canales

críticos a la interpretación hegemónica de nuestra realidad histórica y política, otorgando nuevas herramientas para la formación de sentido.

A su vez, la multiplicación del empleo formal, las paritarias, los planes FINES y CONECTAR, la nueva población universitaria que ha accedido a las Universidades públicas como primera generación, entre tantos otros, son caminos hacia la formación de nuevas capas sociales, que, desde su nivel de ingresos y de conocimiento, podrían ser consideradas de clase media. Pero, desde su idiosincrasia, tal vez logren cuestionar la matriz individualista y sectaria propias de las clases medias tradicionales de nuestro país, y encarnar un pensamiento más compacto y cohesionado en cuanto a su relación con las franjas más humildes. Un pensamiento más agradecido al Estado y a las políticas públicas que estimularon su inclusión y movilidad social, y menos individualista, parte de un sujeto colectivo cuyo progreso está profundamente ligado al éxito comunitario, y no sólo a sus legítimos, pero insuficientes, méritos individuales.

Los saqueos y sus distintos planos de análisis

Revista "Ni un paso atrás", Asociación Madres de Plaza de Mayo, 05.02.14

Todo lo ocurrido en Argentina en materia de terrorismo de Estado resultó tan aberrante, está tan deslegitimado, y trascurrió tanto tiempo antes de que la Justicia recayera sobre sus responsables que hasta no terminar de cerrarse en términos históricos el tramo de la represión ilegal se nos hace muy difícil como sociedad generar un discurso compartido acerca del papel que debe desempeñar la represión legal del Estado.

Los recientes episodios policiales-delictuales iniciados en Córdoba y extendidos a distintos puntos del país pueden abordarse desde diversos puntos de vista.

Si asumimos que las fuerzas de seguridad desempeñan un papel en la seguridad interna, la tarea de conjurar el delito debería estar entre las más respetadas y no entre las más sospechadas. Creo, a partir de mi experiencia, que un 85% de los y las agentes de policía son personas de bien. Pero hay una minoría

tan contaminada con el delito y la corrupción, por la que justos pagan por pecadores el precio del desprestigio.

Un policía es un trabajador, una trabajadora y un jefe o jefa de familia. Y, como tal, tiene derecho a sentirse representado democráticamente a la hora de discutir salarios y condiciones de trabajo, infraestructura y equipamiento, así como el entrenamiento para cumplir eficazmente con su función. Y, del mismo modo que portar armas lo ubica en un lugar especial dentro del universo de los trabajadores, implica también otras obligaciones. No pueden ejercer el derecho de huelga en igualdad de condiciones. Me inclino por apoyar los derechos fundamentales que da la sindicalización, acompañados en este caso por el nivel de excepcionalidad de la función pública que se desempeña. Si los gobiernos provinciales han mantenido durante mucho tiempo el atraso salarial, se trata de una deuda democrática no sólo ante los trabajadores, sino ante la sociedad.

Esto nos lleva a discutir no sólo el monto salarial, sino los modos de financiarlo. Los gobiernos provinciales tienen que tener el coraje político de saber a quiénes cobrarles más impuestos. Muchos aceptan con toda laxitud postergar el inicio del ciclo escolar durante semanas, negando exiguos aumentos salariales a los docentes, pero no son capaces de soportar quince minutos de presión de las oligarquías terratenientes cuando insinúan elevar los impuestos rurales.

Una deuda pendiente es la formación democrática de las fuerzas de seguridad. En este sentido, no sólo en la Argentina sino en la región, se ha avanzado más en la democratización de las fuerzas militares encargadas de la defensa exterior, que de las fuerzas de seguridad interior.

Otro plano de análisis es la nítida complicidad de sectores policiales con el delito, conjuntamente con nichos del poder judicial, el sistema penitenciario y la política. No cabe duda de que si en un área se decreta el acuartelamiento policial y cinco minutos más tarde hay grupos que salen a delinquir, aunque esto guarde ninguna relación con el hambre u otras necesidades básicas insatisfechas, hay una relación estrecha entre una acción y otra. Menos discusión admite una vez demostrada la presencia de artículos robados en los domicilios de policías sumariados.

El tercer plano es el de la connotación política de los episodios. Como dirigente de la provincia de Buenos Aires fui testigo del pacto implícito entre el ex gobernador Duhalde y su ex jefe de policía Pedro Klodczyk, cuando Duhalde caracterizó a la bonaerense como “la mejor policía del mundo”. Desarmaderos, juego y prostitución fueron durante mucho tiempo actividades ‘toleradas’, a cambio de que se conjurasen con eficiencia los delitos contra la seguridad callejera y la propiedad urbana y rural, de modo de sostener la ‘paz social’. Por su propia naturaleza, esto no podía permanecer mucho tiempo sin hacer eclosión.

El crimen de José Luis Cabezas en enero de 1997 convulsionó a la sociedad bonaerense y transformó a la mejorpolicía del mundo en la ‘maldita policía’. Pero en lugar de ser encarada una reforma de fondo, no pasó de la anécdota.

En los últimos años se agrega un agravante fundamental: la penetración de las bandas organizadas a partir del dinero del narcotráfico. Esto exige un replanteo y una política integral sobre el fenómeno que no es sólo argentino, sino que se replica en México, Colombia, Brasil y el propio Uruguay, que acaba de avanzar en la regulación del consumo de ciertos estupefacientes.

¿Estuvieron coordinados los movimientos de todas las piezas en juego como para llevar adelante un proceso golpista? Lo que es real es la convergencia de intereses de esos distintos actores. Líderes de fuerzas de seguridad comprometidos con dirigentes políticos de derecha, habitualmente más proclives a políticas favorables a los grupos económicos que a aquellas distributivas y democratizadoras, y el apoyo fundamental de los medios de comunicación que utilizan hechos como estos para extender el clima de zozobra y malestar. Una vez producido el chispazo, todos los grupos de intereses convergentes confluyen en avivar el conflicto y potenciar su efecto desestabilizador.

El último plano es el de las fisuras que aún subsisten en nuestra sociedad que mientras celebra treinta años de continuidad institucional cada tanto reaviva grietas entre sus distintos componentes. Sectores medios que piden a gritos que se dispare contra personas de grupos sociales más humildes por su sola condición de tales, por su vestimenta, porte personal o color de piel.

O armándose de manera directa para repeler eventuales ataques, alentados por los grandes medios, ayudan -objetivamente- a debilitar lazos. Y este es un problema estructural de la Argentina, porque la alianza entre estos sectores es la única coalición social capaz de conformar y fortalecer un bloque de poder resistente al reflujo de las políticas neoliberales.

Ante un gobierno que ha favorecido con sus políticas públicas la movilidad social ascendente, los factores históricos de poder apoyados en la hegemonía mediática tienden a debilitar la formación de esa gran coalición social en términos históricos. El saldo favorable de lo que acaba de vivirse es que se termina de colocar definitivamente en la agenda pública un tema cuyo tratamiento no debía ser postergado, ni dejarse librado a estrategias provinciales autónomas, sino que debe ser objeto de grandes lineamientos de política nacional. ~

“Precios cuidados”, el empoderamiento de la ciudadanía

Tiempo Argentino, 04.03.14

En un reciente encuentro transversal de empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales y personalidades de la cultura y la política, el Doctor Aldo Ferrer planteó una pregunta disparadora respecto de la situación económica y política: ¿Por qué, si en otros momentos la estructura igualmente concentrada de nuestra economía ha respondido con una inflación del 4 o 5 por ciento, ahora lo hace con un aumento de precios tan desmesurado como el de las últimas semanas?

El mismo ensayó algunas respuestas, muchas de las cuales nos conducen a una cuestión recurrente de nuestra economía: los límites que impone la acumulación de divisas. El éxodo de divisas de los últimos tiempos no responde tanto a la típica fuga de capitales, ya que ello ha estado sometido a un control más estricto, sino a algunos elementos virtuosos como la tasa de crecimiento industrial. La matriz, todavía muy concentrada y vinculada a la necesidad de componentes extranjeros, hace que por cada punto de crecimiento industrial crezca, a la vez, la importación de insumos y de bienes de capital.

Este mismo crecimiento nos ha demandado la importación de energía, con el consiguiente drenaje de dólares. Para enfrentar lo primero, el gobierno intenta profundizar la política de sustitución de importaciones, que hasta ahora ha resultado correcta pero insuficiente. Y para lo segundo, se operó la recuperación de YPF, que modificó la tendencia netamente exportadora en pos de un mayor autoabastecimiento energético.

Un tercer elemento también se corresponde con una situación virtuosa. Es el déficit turístico. Es decir, los dólares generados con trabajo argentino pero gastados en el exterior a partir de un aumento del poder adquisitivo que da capacidad para viajar al exterior a una franja importante de nuestra sociedad. A lo que se suman la crisis europea y los problemas de la economía brasileña, que han hecho mermar el turismo receptivo, y que, además, alentado por la estratagema mediática del dólar ilegal, no cambian sus dólares en los organismos oficiales, sino en el mercado paralelo, y por lo tanto no ingresan al circuito formal.

A esto probablemente deban agregarse algunas dificultades económicas del último año, que no incorporaron certidumbre al proceso. Pero los factores de poder real no han reaccionado por eso, sino precisamente por lo contrario, esto es, porque son nuestras fortalezas las que impiden su proyecto hegemónico. Me refiero a la firmeza de nuestra política económica en no volver a caer en las garras del sistema financiero internacional, y, por el contrario, sostener su autonomía e inyectar recursos al mercado interno. Mientras las recetas ortodoxas ordenan enfriar la economía y reducir la inversión social y el consumo. Las corridas son una reacción frente a ello.

A esto me interesa agregar algunos condicionantes de orden político. En primer lugar, algunos de nivel regional, comenzando por el impacto que acusa América Latina al no tener a Luiz Inácio Lula da Silva y su profunda visión integracionista en la Presidencia de Brasil. Y al haber sufrido en muy poco tiempo la pérdida física de dos liderazgos tan significativos y potentes como los de Néstor Kirchner mientras conducía la UNASUR y de Hugo Chávez recientemente elegido presidente de Venezuela por tercera vez.

A esto se suma el golpe de Estado que derrocó a Fernando Lugo en Paraguay, la formación de la Alianza del Pacífico, y las rencillas entre países limítrofes, de las cuales la relación entre Argentina y Uruguay lamentablemente no están exentas. Asimismo, asistimos a cierto amesetamiento de algunas iniciativas de organización regional respecto de lo que había sido su impulso inicial unos años atrás.

Otro condicionante político lo encontramos en el plano interno. Es la disminución de la base electoral del kirchnerismo respecto del año 2011 y su traspie en un distrito muy simbólico como la provincia de Buenos Aires.

En mi opinión, esto no se explica sólo por el relajamiento de la conducta electoral en las elecciones de medio término, sino que denota una cierta pérdida en la capacidad de interpelar a esos sectores sociales que lo apoyaron en otros momentos y perfectamente podrían volver a respaldarlo, pero que en el último tiempo no se había sentido expresado por él.

Por lo tanto, es muy importante transformar esta suerte de cuello de botella monetario en una fortaleza, en una bandera apta para volver a representar no solamente a los sectores militantes o aquellos ideológicamente más comprometidos con el proyecto nacional y con la figura de nuestra presidenta, sino también a todos aquellos sectores que tienen contradicciones objetivas con el proyecto desestabilizador de los factores concentrados de poder.

La política de “Precios cuidados” es una medida muy inteligente, por cuanto permite interpelar a otros sectores más allá de los propios. Y, además, desplaza al gobierno del lugar donde los medios hegemónicos pugnan para ponerlo: como causante principal de los aumentos de precios.

En este sentido, es fundamental que el gobierno genere todas las iniciativas en todos los planos posibles para persuadir a la sociedad de que el consumidor y el Estado tienen puesta la camiseta del mismo equipo, que la batalla por los precios no es consumidores vs. Estado. Que el Estado es la herramienta con la que el consumidor necesita contar para denunciar y dar batalla a los verdaderos responsables de los aumentos.

Se trata de una batalla que también debe plantearse en el campo de lo simbólico, multiplicar la cantidad de actores sociales y de personas comunes, y también multiplicar los espacios en los que se disputan los precios desde sus distintos aspectos. Esto es, el plano más visible y más sensible que es el de la góndola del supermercado, pero también desde el análisis de la estructura de costos y de la concentración en el proceso de formación de precios que arroja márgenes de ganancia gigantescos e injustificados para los eslabones más poderosos de la cadena. Y perjudica a sus extremos: el inicial, el pequeño productor, y el final, el consumidor.

Y también en el plano de la movilización, no ligada únicamente a la ocupación masiva del espacio público –que es necesaria- sino a la capacidad argumental para discutir precios, de enfrentarse con los que no respetan los acuerdos, de combatir la especulación y denunciar las campañas de desaliento y desmoralización que intentan difundir un clima de crisis cuando no hay ningún elemento real de nuestra economía que se aproxime a esa posibilidad.

Esto es, nada más y nada menos, llevar a la práctica el concepto de empoderamiento, empoderamiento de lo propio, denuncia del que nos estafa, del que nos engaña, con la misma decisión con la que se afrontó la denuncia de los que desabastecieron durante el 2008 o de los que mienten descaradamente todos los días en nombre de un periodismo falsamente independiente.

Economía Social, Autonomía y Felicidad Cultura y modelo de Democracia

Tiempo Argentino, 26.04.14

Por qué cuando se habla de ‘Economía Social’ se la suele encuadrar en una especie de ‘subsistema’, en un rango inferior más vinculado a la pobreza, la marginalidad y la subsistencia que a un agente productivo que bien podría ser la columna vertebral de toda una estructura productiva más diversificada y democrática? ¿Es o no intencional que, desde lo cultural, no aparezca como una alternativa real frente al agotamiento del modelo de acumulación capitalista-financiero?

Claramente lo es. Como lo hemos señalado en tantos otros aspectos, el poder ha instalado un sistema de creencias con la intención de ubicar a la Economía Social, Popular y Solidaria en un tercer o cuarto plano, y no como una alternativa tangible y efectiva. Y a esto no son ajenas, como también lo hemos señalado, las grandes cadenas mediáticas de aquí y del exterior, que desde hace mucho tiempo han dejado de ser trasmisoras de la realidad para ejercer el rol de constructores del sentido, de la interpretación de las cosas y de los hechos en nombre de ese poder real.

Para usar la jerga corriente, instalar la cuestión de la economía social ‘no paga’. La economía social no tiene su propio marketing, ni en cuanto a sus instituciones, ni en cuanto a su propio sujeto social y productivo. Y esto es así, porque, si la economía social se convirtiera en una opción frente a las inequidades –por no decir los abismos– que anidan en la naturaleza misma del capitalismo financiero, estaríamos ante la construcción de un nuevo sistema social y productivo, ante la aparición de un nuevo sujeto político, y, por lo tanto, ante un desafío a las relaciones de poder propias del status quo.

La economía social no cuestiona sólo un sistema económico, sino un modelo de sociedad y un tipo de organización política. Conceptos como buen vivir, empoderamiento o poder popular y propiedad social, seguridad y soberanía alimentaria, e instituciones como presupuesto participativo, desarrollo local, fábricas y empresas recuperadas, comercio responsable, precio justo, microcrédito, agricultura familiar, cooperativismo y asociativismo, autogestión, no pueden convivir con una democracia que se limite a ejercer el derecho al voto. Se trata, en cambio, de una democracia de ciudadanía plena, en la que cada persona es poseedora de una cuota de poder de decisión sobre cuáles son las prioridades de la sociedad en que vive.

Así como el poder se encarga de invisibilizar las denuncias sobre la perversión y los desequilibrios inaceptables del actual modelo de acumulación, también se ocupa de ocultar, demonizar o mantener en la marginalidad a la necesidad de diversificar la actual matriz productiva, de acopio y comercialización. Un modelo que aliente la mayor intervención del trabajador y la trabajadora

en el diseño de la empresa, llevaría a la mayor participación del ciudadano y de la ciudadana en el modelo de sociedad. Y esto es algo que el poder real no está dispuesto a ceder.

La colonización cultural determinada por toda una estructura de construcción de sentido, que, como nunca antes, se apoya durante las últimas décadas en las grandes cadenas de medios hegemónicos, es, pues, un escollo fundamental a vencer. Vivimos en un mundo donde más de mil millones de seres humanos padecen hambre. No obstante, recién se expande la idea de crisis con la caída de un fondo de inversión como Lemman Brothers, en 2008, y se la asume como una crisis financiera, en lugar de admitirla como una profunda crisis de la ética universal del sistema, causada por la tragedia del hambre. Quiere decir, entonces, que la opinión pública mundial está prisionera de una extraordinaria colonización cultural.

Y no se trata de cualquier mundo, sino de uno que es tecnológicamente capaz de alimentar a tres veces su población, siempre y cuando se decida por una distribución más justa de sus recursos. La diferencia entre una y otra concepción del mundo, la distancia entre las principales fortunas y el hambre colectivo, la negación de la alimentación –y a partir de ella también de la salud y de la cultura– para todos en un mundo que es potencialmente capaz de brindarlas, son hechos eminentemente políticos. La pobreza no es un hecho natural como la concibe la derecha. La pobreza es un hecho político. Más bien, una consecuencia de la injusticia intrínseca de las políticas aplicadas históricamente por los factores de poder real, desde su insaciable lógica de acumulación de capital financiero.

Está en juego esta disputa conceptual de modelos. Un modelo socialmente inclusivo, igualitario, frente a uno que desplaza a miles de millones de personas, no sólo ya en las periferias pobres, sino que la carcoma se va acercando cada vez más a quienes hasta ayer nomás gozaban de privilegios propios de los centros de poder. Se trata, pues, de una crisis civilizatoria, no meramente financiera. Y, al propagar su mencionada escala de valores, los grandes conglomerados mediáticos operan como ordenadores de la sociedad moderna.

Ser conscientes de una crisis civilizatoria lleva, necesariamente, a cuestio-

nar los actuales patrones de desarrollo. Es decir: no se trata de que los pueblos más pobres de la India, África o América Latina no podemos alcanzar los niveles de confort de las grandes capitales del Norte. Porque para ello harían falta los recursos energéticos equivalentes a varios planetas como la Tierra. De lo que se trata es de superar el actual sistema de acumulación desenfrenada de capital en manos de unas pocas fortunas, para distribuirlo equitativa y solidariamente. Cambiar la escala de valores que una porción significativa de la humanidad ha tomado como propias, como fruto de aquella colonización cultural, y que ha sido capaz de formar opinión generalizada en algunos casos, climas sociales en otros, y, en un número importante, aceptación resignada hasta de parte de sus propias víctimas.

La economía social, bastión de la batalla cultural La declinación del capitalismo vista en clave lógica, no sólo ideológica

Tiempo Argentino, 10.05.14

Un atardecer estival, paseando con mis hijas adolescentes por el centro comercial de una playa atlántica, pasamos por delante de una “bijouterie”, que, desde luego, atrajo la atracción de ellas. Yo, por mi parte, nunca había visto tantas unidades juntas de un mismo producto. De cada objeto, miles. Un número tan enorme que jamás se iba a poder vender. Luego de esperar que miraran todo lo que quisieran mirar, pude entablar con ellas la siguiente conversación: “¿cuánto trabajo humano, cuántos materiales, cuánta maquinaria, cuánto capital, cuánta energía para el transporte, cuánto deseo despertado en personas que jamás accederán a esas mercancías? ¿qué cantidad impresionante de mercancías que nadie comprará ni disfrutará jamás, y que quedará reducida a un mero producto de la explotación, y luego a mero residuo?” La conversación continuaba, y afortunadamente teníamos la inmensidad del mar a un paso y al atardecer rosado posándose sobre él...

“¿Y si en lugar de tantas horas de trabajo alienado e insatisfecho –y por otra parte inútil– aquel trabajador o aquella trabajadora las hubiera dedicado a sus afectos, o a contemplar y disfrutar de la naturaleza, en lugar de maltratarla? ¿Y si todos aquellos recursos fuesen más equilibradamente repartidos.? ¿Y si todo aquel deseo subvertido en ansiedad por consumir tomara el camino de un gozo más introspectivo? ¿Y si el frenesí por adquirir el último modelo trocara por el placer de buscar tréboles de cuatro hojas?, ¿seríamos más, o menos felices?”

Nunca olvidamos esa conversación, que se dio sin planearla, como suele ocurrir con algunos momentos importantes de la vida. Insatisfacción en quien produce, insatisfacción en quienes desean consumir y no pueden... En fin, sin buscarlo, estábamos poniendo en lenguaje cotidiano, estábamos tomando conciencia de que vivimos bajo una insoportable cultura de la insatisfacción. Estábamos construyendo sentido sobre el agotamiento de un sistema de acumulación. Si un modelo de acumulación conlleva a la insatisfacción, genera infelicidad. Y si genera infelicidad, la política debe intervenir para conducirnos hacia otro camino, porque la finalidad última de la política es elevar las posibilidades de cada conciudadano y conciudadana de sentirse mejor, más autónomo y autónoma en sus posibilidades de elección, lo más dueño y dueña posible de su plan de vida. Con las limitaciones que impone toda convivencia. Con la permanente tensión entre las porciones de anhelo de libertad y el arreglo a normas generales. Con capacidad de adaptación transformadora a cada realidad social. Con compromiso ético con el colectivo.

La sensación de agotamiento del modelo de acumulación capitalista debido a su injusticia intrínseca, al menos en su versión eminentemente financiera, va mucho más allá de un nuevo “malestar de la cultura”, para inscribirse en el plano del análisis político profundo de la época. Y si bien –como sostiene Gustavo González Ramella en su tesis doctoral– “todos estamos en mayor o menor proporción cautivos de ciertas ignorancias y prejuicios”, el presente del capitalismo nos lleva a revalidar el concepto de alienación, desde el momento que tantos congéneres creen que sus decisiones son propias, y no de otros, y se

identifican –paradójicamente– con quienes los someten. Nada menos que en un capitalismo donde las 85 personas más ricas concentran más recursos que los 3500 millones de seres humanos más pobres. Donde no puede ser que un estadounidense consuma más de 1000 litros de agua por día y un latinoamericano tenga acceso a menos de la cuarta parte. En la citada tesis doctoral, el autor relata su experiencia con un grupo de reflexión, donde una vecina relata su angustia por no lograr que su marido se despegue de la pantalla de TV, que muestra con más de cien repeticiones en las últimas 72 horas, la trágica búsqueda del cuerpo de una adolescente: “él llora, yo le digo no mires más, te vas a enfermar. Él llora, pero sigue mirando...” “Yo miro y miro mientras hago las cosas de la casa”, dice otra mujer, “porque si no miro me siento culpable... todo el mundo habla de eso y yo no quiero desentenderme de la realidad”. Instalar la angustia, el miedo, el desaliento y la impotencia, son, en consecuencia, parte de los objetivos del neocolonialismo cultural. La moral de lucha es un rasgo de identidad de un sujeto que procura emanciparse; la angustia y el desaliento, por el contrario, lo debilitan. De allí que propugnan con tan habilidosa insistencia el malestar y la desmoralización.

La oportunidad de la economía social

Más allá de sus particularidades y de sus dificultades, durante este primer tramo del siglo XXI América Latina ha decidido desempeñar un rol diferente al que había tenido históricamente, ya sea por la complacencia de los regímenes pro-imperialistas que la gobernaron, como por la insuficiencia de sus experiencias populares alternativas. Esta vez se han conjugado una serie de factores que permiten avizorar una expectativa distinta: fundamentalmente, un hartazgo masivo frente a las recetas ortodoxas y una férrea voluntad de cambio de sus pueblos, se ha encontrado en el camino con una serie de líderes populares que supieron interpretar esa voluntad. El predominio de la política sobre la mera economía de números, y el rol regulador del Estado por sobre el papel rector que hasta finales del siglo XX desplegaban los mercados, constituyeron los pilares de otras políticas activas sobrevinientes, que

tuvieron como eje una mayor autonomía en sus decisiones políticas y respecto del sistema financiero internacional, la recuperación de la renta de los recursos estratégicos, la inclusión y la movilidad ascendente de las franjas sociales más vulnerables. Y todo esto en un marco de coordinación política que permitió la ampliación del Mercosur, y la formación de foros de gran repercusión política como Unasur y Celac. Inclusive, la Revolución Bolivariana de Venezuela, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador, plasmaron en sendas Reformas Constitucionales una serie de nuevas instituciones como las del Buen Vivir, distintas formas de poder popular y de propiedad social. Y países como la Argentina, que fuera quizás, históricamente, quien más despreció y renegó de sus raíces indoamericanas, ha ido rescatado su pertenencia y forjando una comprensión masiva de la importancia que tiene el atar su destino de desarrollo al conjunto de la región. Esta concepción autónoma del presente, mucho menos anudada a las decisiones del poder mundial de lo que estuvo históricamente, le ha deparado a nuestro subcontinente una prolongada etapa de crecimiento económico, desarrollo social y legitimidad política, lo que nos sitúa en un lugar de mayor incidencia para plantear iniciativas diferentes al modelo de acumulación ortodoxo en los diversos foros multilaterales como el G-20, Naciones Unidas o la OMC. En definitiva, una mayor capacidad de fijar temas de agenda.

Economía social, popular y solidaria La declinación del capitalismo vista en clave lógica, no sólo ideológica

Tiempo Argentino, 14.05.14

La Economía Social, Popular y Solidaria, como sujeto productivo y eje ordenador de un nuevo modelo económico es uno de esos temas que deben, necesariamente, refrescar la agenda internacional, plagada de guerras, muertes e injusticia. Para ello, la región cuenta con un entorno de condiciones que, sin ser óptimas, se presentan mucho más favorables que en otros momentos históricos,

como lo son los actuales grados de inclusión social, estabilidad macroeconómica y legitimidad política. Cuenta, a su vez, con cierta sintonía de criterios y con una relación considerablemente armoniosa entre la mayoría de sus líderes, lo que les permite coordinar algunas políticas. Y cuenta con una armazón de instituciones como la moneda regional y el Banco del Sur, que deben llevar a la práctica sus objetivos, ser llenadas de contenido. Y de recursos, obviamente.

La Economía Social, Popular y Solidaria es, además, un camino más que propicio para la superación de los límites estructurales con que se encuentran los actuales procesos democráticos de la región. A lo largo de este primer tramo del siglo XXI, y cada uno con sus lógicas particularidades, nuestros gobiernos populares se hicieron cargo de la estructura del Estado luego de un largo período de des-acumulación de fuerza en los sectores populares, debilitamiento estatal y desarticulación de las políticas comunes a nivel regional. A partir de su asunción, iniciaron un proceso de reconstitución de los tejidos político y social mediante la presencia preponderante del Estado, el comienzo de la reparación de la pobreza más extrema, con el empleo como ordenador de la sociedad. Pero no en todos los casos se avanzó de manera profunda y pareja en la imprescindible faena de desmontar las tradicionales estructuras de poder económico concentrado, y altamente dependiente de las decisiones de las matrices radicadas en el exterior. Además, el haber tomado el camino de la democracia electoral, nos impone límites procesales y temporales que estrechan aún más el margen de movilidad de nuestros gobiernos para tomar medidas revolucionarias respecto de las estructuras vigentes.

Todo esto pone a nuestros gobiernos y a nuestros pueblos de cara a los límites estructurales del proceso histórico-político. Límites que, para ser sorteados, exigen una mayor acumulación política y social que permita profundizar las principales batallas pendientes, como lo son la diversificación de la matriz monopólica y oligopólica de inversiones, productiva y de comercialización, el acceso a la tierra y a la vivienda de millones de excluidos y la diversificación del mensaje hegemónico de las grandes cadenas de medios. Asumir, en definitiva, el desafío de ampliar la base social de estos procesos, incrementar la fuerza

popular organizada, al mismo tiempo que el poder internacional se encarga de recalentar los niveles de tensión política y social en toda la región. Y es aquí, en este punto, donde se torna insuficiente la sola aplicación de políticas posneoliberales, como las llama Emir Sader, si al mismo tiempo no se remueven los obstáculos impuestos por las propias estructuras de ese poder neoliberal. Y donde resulta un imperativo apelar a una idea fuerza de aplicación improrrogable: la ingeniería de todas aquellas interfases que conduzcan a la transición entre el sistema de poder vigente y el futuro.

Diseño y construcción de la interfase, sus desafíos

Insisto en partir de la premisa de que la Economía Social es un concepto integral, una escala de valores, un modo de organizar la sociedad. Y hay que edificarla con vocación y esperanza, a la vez que con inteligencia y realismo político. No se llega a ella de la noche a la mañana, especialmente en sociedades donde el capitalismo rentístico tradicional y sus agravantes financieras de las últimas décadas se encuentran tan arraigados en lo institucional como en sus creencias y tradiciones. De allí la necesidad de las interfases. Si por un lado desconfiamos (más aún, estamos convencidos de su negatividad a largo plazo) de la tendencia al monocultivo de la soja, de sus consecuencias sociales y ambientales, pero, al mismo tiempo, nuestros gobiernos solventan poderosas políticas sociales a partir de capturar parte de la renta de aquel cultivo, esto implica la necesidad de ir instrumentando medidas concretas hacia la diversificación y democratización de ese modelo. No se trata de ‘arrasar’ con la soja, pero sí de estimular fiscalmente cultivos y explotaciones alternativas, el uso más racional de extensiones cada vez mayores de nuestro suelo, la aplicación de nuevas tecnologías y procesos, la radicación de nuevas poblaciones rurales, y una nueva cultura de la propiedad de la tierra y del intercambio, donde el comercio responsable y el precio justo suplanten a la acumulación irrefrenable de renta cualesquiera sean sus consecuencias humanas y sociales. Y lo mismo podríamos decir respecto de la actividad minera, de nuestra regresiva estructura tributaria, y de tantas rémoras de nuestro distorsionado modelo de economía.

Para todo esto existe una vasta normativa vigente y habrá que echar mano a nuevas herramientas legales, por parte de un Estado facilitador de las transferencias tecnológicas, el desarrollo de proveedores locales, el estímulo a la innovación y el despliegue de tecnologías intermedias (aquellas que no son absolutamente maduras ni totalmente de punta). En esa misma línea –por ejemplo–, si aceptamos que es poco factible salir en el corto plazo de la propiedad privada de los puertos de embarque, eso no significa renunciar a una mayor regulación estatal. Y todo esto, mediante la creciente articulación de las Universidades Nacionales y los Institutos Tecnológicos con el sistema productivo.

Mensaje final esperanzador

Por último, si bien no va a ser sencillo encarar con profundidad y sostener en el tiempo estas transformaciones tan necesarias, cabe señalar que en los últimos años se han producido cambios muy importantes y saludables en el seno de nuestros pueblos, fundamentalmente en el corazón mismo de los sectores más humildes y sus organizaciones populares. Cambios que constituyen un verdadero caldo de cultivo para establecer y perfeccionar los objetivos planteados. Entre tantos ejemplos, al bendecirse semanas atrás las primeras viviendas de un complejo habitacional construido por autogestión popular en el barrio de la Boca, Ciudad de Buenos Aires, asistieron al evento numerosas organizaciones comunitarias. Algunas adherían al Programa de Terminabilidad de Educación Primaria para Adultos, en el marco del concepto de Pedagogía Emancipadora. Otras estaban vinculadas con la Comunicación Popular, otro concepto inherente a las nuevas modalidades de organización social que propiciamos. Y así podrían sumarse los talleres barriales de una multiplicidad de actividades productivas y culturales, que delinean una sociedad más profundamente democrática, una sociedad de empoderamiento.

En su pasaje de destinatario pasivo del asistencialismo estatal a protagonista del proceso social y productivo, el sujeto de la Economía Social, Popular y Solidaria está llamado a desempeñar un papel fundamental contra el individualismo extremo, contra el egoísmo, en el diseño de una Argentina, una

América Latina y un mundo mejores. En el diseño de una economía ecosistémica, no al margen de la naturaleza sino dentro de la naturaleza. Que en vez de hablar sólo de eficiencia hable de sustentabilidad. Que en vez de sólo productividad garantice la regeneratividad.

Quienes hoy conducen nuestros Estados con la marcada sensibilidad social, el coraje y la vocación transformadora que han demostrado, tienen ante sí el desafío de utilizar las herramientas políticas de que disponen, no con un sentido de disciplinamiento y control social, como lo hicieron los “partidos del orden”, sino como poder de transferencia, para que cada niña, niño y adolescente, cada mujer y cada hombre, logren ser dueños cada día de un nuevo derecho y de una nueva libertad. Para que sean dueños de un motivo más para sentirse reconocidos por sus pares, de una posibilidad más de ser felices, de un instrumento mejor para transitar su propio camino decidiendo con mayor autonomía. Para que sean dueñas y dueños de una nueva esperanza. Así como la política ha sido responsable de tanta desigualdad, también puede serlo de trazar un camino hacia una sociedad diferente, mejor, más igualitaria. No hay una finalidad superior que pueda encontrarse para nuestra vocación militante.

Desarmar el discurso del poder (I)

Tiempo Argentino, 31.05.14

Uno de los objetivos más buscados y mejor logrados históricamente por el discurso hegemónico del poder real ha sido el mantenerse oculto.

En consecuencia, uno de los mayores avances del campo popular en la ‘batalla cultural’ en la que estamos inmersos aquí y en toda la región –y que el poder menos perdona– ha sido poner como un eje central de debate la disputa por el poder, visibilizar al poder, denunciarlo explícitamente.

Somos un país que tiene condiciones para el autoabastecimiento energético, y que a su vez produce alimentos para varias veces su población, donde

no obstante persisten considerables bolsones de pobreza. Algo tienen que ver las clases dominantes, no sólo desde el punto de vista de su capacidad económica, sino desde su potencia para construir un sentido común mayoritario sobre diversos tópicos centrales. Hay un discurso político instalado por las clases dominantes en función de la preservación de sus intereses, que es, ni más ni menos, la cristalización de esa estructura social signada por la desigualdad.

Si queremos construir nuevos paradigmas desde los intereses del campo popular, es necesario indagar sobre algunos ejes conceptuales instalados por el discurso del poder, el discurso hegemónico, con el objetivo de desmontarlos uno por uno.

Correrle la silla a la política

El poder estuvo históricamente acostumbrado a manejar a los gobiernos, y al mismo tiempo ponerlos en el primer lugar de exposición ante la sociedad. Esto, de la mano de asociar política con ineficiencia y corrupción. De tal modo que, una vez agotado el veranito de ese gobierno o bien si se trata de un gobierno indócil frente a sus mandatos, la sociedad lo primero que estigmatiza es al gobierno y a la política, y los poderes reales –ocultos detrás de ese remanido y perverso recurso– se mantienen intactos para recomenzar el circuito.

Primera conclusión, reivindicar la centralidad que ha tomado en la agenda pública el debate sobre la disputa de poder. Esto incrementa sustancialmente la calidad del debate democrático.

El poder no necesita la política, porque construye sentido desde sus propios aparatos ideológicos. Los grupos de poder con gran capacidad de formar opinión; los establecimientos educativos de elite; los economistas que desfilan por los medios de comunicación hablando en nombre del saber, cuando en realidad son lobistas del poder, y enviando informes apocalípticos al exterior sobre el estado de nuestra economía; las grandes cadenas mediáticas; y, últimamente, las vidrieras de las grandes cadenas de libros publicitando un libro sobre ‘la década robada’ por Néstor y Cristina Kirchner.

En esta línea de razonamiento, el poder hace todo lo posible por desacreditar a la política. En 'la mesa del poder', donde están sentados todos estos sectores, la única silla que puede representar a los sectores populares es la de la política. La política es el único instrumento con que cuentan los sectores humildes y populares para disputar el poder. Es así que han creado con mucha astucia, a lo largo de décadas de dominación, un dispositivo cultural según el cual muchos sectores sociales ven con absoluta naturalidad a las conducciones prolongadas de los factores de poder –que se repiten por décadas- mientras que al mismo tiempo se escandalizan de la reiteración de los mandatos de la política, y piden que lo único que rote en esa 'mesa de poder' sea la política. Y esto tiene un objetivo muy obvio: debilitar a la política e interrumpir aquellas políticas públicas establecidas con un sentido social.

Ejemplos. No vamos a ver a Tinelli ridiculizando a un empresario poderoso, sólo va a ridiculizar a la política. En la misma línea, nunca Magoni le financiará a Lanata un helicóptero para sobrevolar la vivienda de un banquero corrupto. No irá a golpear la puerta del dueño de una cadena de supermercados que aumenta injustificadamente los precios en pos de una tasa de ganancia escandalosa. Tampoco a los que financian la construcción de las torres suntuosas pero vacías de los barrios paquetes, mientras los pobres acampan por falta de vivienda; aquellos que se relacionan con la vivienda desde lo financiero y no desde lo social. No investiga al banquero que en vez de financiar la producción para aumentar la oferta y bajar los precios, da sólo créditos para el consumo a tasas usurarias. Sólo sobrevolará las viviendas y entrevistará a los vecinos de aquellos políticos que incomoden sus intereses. Y contribuirá con ello al perenne objetivo del poder, que es denostar a la política.

Si trazáramos una línea de tiempo con los momentos históricos de mayor retroceso del campo popular, veríamos su coincidencia con los momentos de mayor despolitización. Ya sea por vía del genocidio, del terrorismo de Estado, del miedo, o de la exaltación del individualismo por sobre lo colectivo, pero siempre despolitización. Los momentos de avance popular, en cambio, van acompañados de una fuerte recuperación de la política.

Sin historia y sin contexto mundial

El discurso del poder se pretende a-histórico, despojado de toda contextualización histórica. No se hace cargo de la historia, es puro presente. No obstante, es necesario situarnos en el plano de la continuidad histórica de determinados intereses, y a partir de ello analizar cómo se posicionaron ante capítulos clave de nuestro devenir político reciente. Y puestos en ese análisis, veremos que fueron precisamente quienes procuran ubicarse en el centro mismo de la ‘institucionalidad democrática’, los mismos que han sostenido históricamente los bombardeos a la Plaza de Mayo, los fusilamientos de 1956, la proscripción de las mayorías, hasta el último genocidio. Y todo ello, reitero, en nombre de la ‘institucionalidad’.

Otro rasgo del discurso del poder es su descontextualización geográfica. Postulan tomar el ‘ejemplo de Brasil’, al mismo tiempo que reprochan las suspensiones ocurridas en la industria automotriz. Pero no conectan que la presente caída, aunque leve, de la venta de automóviles, se explica por la prolongada recesión brasilera. Admiran el flujo de dólares de la economía chilena, sin reparar el peso de los actores privados en un sistema como el chileno, donde tan sólo el 6% de las relaciones laborales se rigen por la negociación entre las partes, frente al 96% de las relaciones laborales formales en nuestro país. Bastaría que Chile tan sólo duplicara ese porcentaje, para que veamos cómo se retira ese mentado flujo de dólares de su sistema financiero.

Sigamos desmontando, pues, tornillo por tornillo y tuerca por tuerca, el discurso de los grupos de poder. Sin renunciar a tratar algunos temas de agenda impuestos por ellos, con el argumento de que no debemos concederles la posibilidad de ‘fijar agenda’. No debemos hacernos cargos de su discurso cuando los temas que intenta imponer el poder se circunscriben a sus propios voceros. Pero en aquellos casos que, debido a su potencia y su persistencia, esos temas se capilarizan en sectores que deben formar parte de nuestro propio bloque social, entonces sí debemos tomar nota de ellos, y re-significarlos desde la perspectiva de los intereses populares que representamos.

Desarmar el discurso del poder (II)

Tiempo Argentino, 11.06.14

Otro de los objetivos omnipresentes en la construcción de sentido que formula la derecha es profundizar la brecha entre sectores medios y sectores populares. Trátese del tema que se trate –inseguridad, saqueos, protesta social, movilizaciones públicas– y ya sea en noticieros, programas de debate, magazines y hasta en la propia ficción, el discurso dominante trasunta el odio hacia los sectores trabajadores, sindicales, pobres y marginales.

Estigmatizan ciertos ámbitos comunitarios, ciertos hábitos de vida, ciertas prácticas, vestimentas y hasta cierto porte físico con los cuales identifican a la pobreza, y consiguen, no sin éxito, que las capas medias les teman, los agredan o los desprecien, sin más.

Intentando fracturar, con ello, la alianza social que más posibilidades tiene en sí misma de resistir y doblegar al proyecto oligárquico históricamente dominante en nuestro país y en la región.

Correlativamente con esto, denuestan la organización popular.

Es decir, plantean como políticamente correctas aquellas movilizaciones que son producto del individualismo, y que se alientan desde las grandes cadenas de medios. Estas movilizaciones no tienen posibilidad alguna de construir un sujeto colectivo, que no tenga liderazgo unificado, unidad de concepción ni objetivos comunes.

Al estar configuradas a partir de ese individualismo exacerbado, cada individuo expresa una demanda particular, aislada, y a partir del intersticio dejado entre su demanda y el de otro individuo, se convierten en objetos pasivos de un proyecto de poder y de sociedad elaborado eminentemente por fuera de ellos.

No hay sujeto social ni político. Cuando se denuesta aquellas marchas que se integran a partir de las organizaciones sociales acusando a los asistentes de concurrir a cambio de una prebenda, lo que se persigue es, por un lado, descalificar a las organizaciones convocantes, y, por otro lado, atacar la posibilidad

de integración de un sujeto social y político cohesionado, integrado a partir de un liderazgo unificador, una unidad de concepción o cosmovisión común, y una esperanza o destino compartidos.

Otro de sus objetivos: enemistar a la sociedad con el Estado, mostrándolo como un agente de corrupción e ineficiencia, en detrimento de su principal función de promoción de derechos.

Un tema polémico que también debe ser desmontado desde una construcción discursiva contra-hegemónica, es la utilización de la cadena nacional de medios.

Ninguna persona ostenta mayor legitimidad político-electoral que un presidente. O una presidenta. Y si los medios hegemónicos fueran verdaderamente republicanos e ‘independientes’ –de lo cual se precian falsamente– informarían acabadamente las iniciativas presidenciales.

Al no hacerlo, obligan a la autoridad legítima del país a que recurra a las herramientas institucionales de que dispone para la divulgación de sus acciones. Aun así, se trata de una cadena que podría calificarse como ‘defensiva’, si se la compara con la uniformidad aplicada por las cadenas hegemónicas en términos de la información emitida, su tratamiento, intensidad, modalidad, estilo y repetición hasta el infinito a todas las horas del día.

También debe ser debatida la pauta publicitaria. No sólo la oficial, sino en su totalidad. Los grupos económicos, y sus voceros en el ámbito político, insisten con el reiterado argumento de que la pauta publicitaria oficial debe ser regulada por cuanto su financiamiento proviene ‘del bolsillo de todos los argentinos’.

En este tema cabe una primera aclaración, y es que la partida para la publicidad oficial alcanza tan sólo el 6% del total de la pauta publicitaria. La segunda aclaración es que la publicidad de las grandes firmas privadas, también proviene de los recursos de todos los argentinos, que son quienes consumen sus productos.

Si han conseguido esos recursos a través de su tasa de ganancia, es, inclusive, porque las políticas públicas han hecho lo suyo en términos de posibilitarles dicho crecimiento en las ventas. Es decir, en un caso vía impuestos, en el otro vía

consumo, son los ciudadanos y ciudadanas quienes financian el total de la pauta publicitaria de un país, y, por lo tanto, el tema debe abordarse en su totalidad.

En la práctica, los medios más poderosos suelen ejercer una gran presión sobre las empresas para impedir que anuncien en los medios más pequeños, incrementando la tendencia monopólica.

No obstante todo esto, los grandes medios han naturalizado la idea de que actúan a voluntad sobre el 94 por ciento de la pauta privada, y además aspiran a imponerle al Estado –legitimado por las mayorías– lo que debe hacer con el 6 por ciento restante.

El campo popular debe invertir este razonamiento construido astutamente por el discurso hegemónico, y plantear que, por el contrario, es el Estado quien tiene la legitimidad necesaria para regular los destinos de la pauta publicitaria general –pública y privada– con un sentido democrático.

Lejos de interferir en la libertad de expresión, el abordaje integral de la pauta publicitaria es una medida democratizadora. Aquí también es la intervención activa del Estado quien democratiza.

Desarmar el discurso del poder (III)

Tiempo Argentino, 21.06.14

Otro rasgo del discurso del poder es su pretensión superadora de las ideologías. Según éste, izquierdas y derechas son categorías del pasado. Nosotros, en cambio, reconocemos que está superada la etapa de la pura Guerra Fría, con dos usinas ideológicas muy claras situadas en Washington y Moscú. Pero ello no implica que no haya dos grandes cosmovisiones sobre cómo ubicarse ante temas centrales como el Estado o la búsqueda de la igualdad. Sigue habiendo quienes sostienen que para un país como el nuestro lo mejor es adherirse al destino de la potencia hegemónica de turno, el Imperio Británico o los Estados Unidos, según el momento. Y por otro lado quienes creemos que sólo podremos afrontar con éxito nuestros problemas desde la Integración con nuestros

hermanos de la región. Siguen estando los que creen que la pobreza es una consecuencia natural para quienes no saben adaptarse a los juegos del mercado. Mientras, para nosotros, si dos niños son el día que nacen ontológicamente iguales, y luego uno de ellos tiene la posibilidad de alimentarse, vacunarse y educarse y el otro se queda sin dientes por ingerir agua contaminada, eso es consecuencia de la política, no de la naturaleza.

Habitualmente, el poder no hará referencias ideológicas, sino una apelación a la eficiencia de gestión. En ese caso, nosotros decimos que la dictadura fue muy eficiente a la hora de gestionar el terrorismo del Estado, y el menemismo también lo fue a la hora de gestionar la destrucción del Estado, entre otros ejemplos. Es decir, la gestión política no puede desvincularse de un determinado sistema de valores, de una escala de prioridades que preceden la gestión de gobierno, y señalan en nombre de qué intereses sociales se ejerce esa gestión. Por último, decir que en la inmensa mayoría de los casos, si se escarba en el fondo del pensamiento de quienes dicen que izquierdas y derechas ya no existen, profesan ideologías que son claramente de derecha.

Política y moral

Relacionado con esto está otro rasgo que Edgardo Mocca, en un artículo reciente, denomina la ‘pretensión estrictamente moralizadora de la política’, la identificación moral /política. Desde luego que yo brego para que en política se respeten los valores morales, y mi posición sobre la relación entre la política y la ética he tratado de honrarla con mi propia historia. Sobre lo que quiero advertir es sobre una lógica del poder –que ya la había planteado Carrió con su ‘contrato moral’– que pretende decirnos: ‘en mi partido están todos los que no roban’. Y eso clausura la discusión ideológica. En cambio, en mi partido –o mejor, en mi espacio, en mi fuerza política y social que es mucho más que un partido– no sólo es requisito no robar, sino también lo es no sostener políticas antagónicas con el interés de los más humildes, profundizar el proyecto nacional y popular, gravar las rentas extraordinarias, defender el Estado, el mercado interno y la pertenencia a Latinoamérica y el Caribe.

En definitiva, esta pretensión exclusivamente moralizadora de la política –e insisto que mi posición no busca renegar de la moral– encubre la reducción a debates parciales que posponen o clausuran el debate general, estructural, sobre la exclusión, la pobreza, la igualdad, la distribución de la riqueza. Y si bien quedarse con un vuelto del Estado es un acto de corrupción de por sí muy condenable, eso no puede hacernos perder de vista la corrupción de aquellos que, ideológicamente, han promovido la desestructuración del Estado nacional, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo. En este caso ya no estamos hablando de una malversación individual del dinero público que debe ser sancionada por la Justicia, sino de un ataque al patrimonio de toda una sociedad, mediante el cual, además, se han cobrado ingentes comisiones personales. En un país con el pasado reciente como el que ostenta la Argentina, suelen desfilar decenas de ex funcionarios de la energía, de la economía, de las privatizaciones, que exhiben en regla sus papeles ante un poder judicial cooptado por los conglomerados financieros, pero que a su vez son responsables de políticas públicas de una inconmensurable ilegitimidad e inmoralidad, y por lo tanto, corruptas. Y que suelen presentarse como portavoces del saber técnico o económico, cuando son, en realidad, lobistas del poder. En suma, la cuestión moral de la Argentina es confrontar contra un orden esencialmente injusto. De aquí que la primera virtud moral de esta etapa histórica es haber puesto en debate el orden hegemónico, porque ese es el primer pre-requisito para construir la herramienta que lo modifique.

El amparo del poder Judicial

Por último, dos palabras sobre nuestro sistema judicial. Un sistema judicial que procesa a quien roba una bicicleta –lo que no está mal–, pero perdona a quien le saca del bolsillo el 13% de los salarios y jubilaciones a los ciudadanos. Es decir, que está preparado para la defensa a ultranza de la propiedad privada individual, sumida en el más profundo y recalcitrante liberalismo, y tolera al mismo tiempo la depredación y el saqueo del patrimonio colectivo.

Desde esta perspectiva, luego de cuatro años la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. Su texto establecía el plazo de un año para la adecuación a los límites anti-monopólicos dispuestos en ella, a aquellos grupos que se excedieran de la cantidad de licencias que la propia ley permite. Al posponerse por cuatro años su vigencia por razones judiciales, el grupo dominante no sólo usufructuó del año permitido, sino de los tres años de falta de cumplimiento de la ley, para facturar la tarifa de cable mes por mes y abonado por abonado, con lo cual pudo financiar el salto tecnológico de estos últimos años, en detrimento de los sectores sin fines de lucro que la ley reconoce, que son los más débiles financieramente, y que no pudieron obtener esos recursos por un capricho contra-mayoritario y no democrático de nuestro sistema judicial ultraliberal.

Hacia nuevos paradigmas

Mi mensaje final es esperanzador. Tomaré sólo el ejemplo de muchas Universidades públicas, como la mayoría de las del conurbano de la Provincia de Buenos Aires. El hecho de que el grueso de sus estudiantes proviene de familias muy humildes y constituyen una primera generación de universitarios, es una señal muy clara de la movilidad social ascendente de estos años. Ellas y ellos recibirán, al cabo de su carrera, un nivel de conocimientos y una oportunidad de ingresos propios de las clases medias. Pero, a partir de una formación humanista, es de esperar que no reproduzcan el pensamiento aburguesado e individualista de vastos sectores medios tradicionales de nuestro país, sino que sean portadores de una estructura de pensamiento más acorde con su pertenencia social y agradecida de las políticas públicas que le permitieron ese ascenso social, de modo de constituirse en protagonistas de la contra-hegemonía cultural que tanto trabajo nos está costando.

Farándula y default de la política

Tiempo Argentino, 21.08.14

El papel asignado a la política por los programas-insignia de la TV hegemónica, no es casual ni parte de una decisión ingenua orientada al mero entretenimiento. Por el contrario, se enlaza con las demás acciones orquestadas por el poder, desde una interpretación sistémica.

No digo que estén coordinados desde una única mesa de conducción, pero sí que responden a una lógica común y a los intereses de un mismo sistema de pensamiento y praxis. Un segundo elemento es que replican en el plano interno su mecánica global. Veamos, entonces, cuáles son esos puntos en común.

Estamos en presencia de un complejo de intereses que abarca la concentración financiera, lo judicial y lo mediático, y adquiere, por lo tanto, dimensión política. Se trata de engranajes de un mismo sistema, todos los cuales confluyen en la necesidad de un rol subalterno –y hasta de ridiculización– de la política. Del otro lado, pueblos que intentamos salir adelante, aquí, en Europa, en Medio Oriente, en Asia... Para los cuales, la política cumple otro rol, un rol protagónico de transformación.

¿Cómo se expresa esto en la Argentina de nuestros días? En la Argentina hay un establishment, formado, entre otros, por lobistas del poder financiero disfrazados de saber económico. Es el caso del extenso reportaje de Magdalena Ruiz Guiñazú a Daniel Marx, hombre de consulta de TN, y uno de los máximos responsables del default de 2001, quien –irónicamente– nos da clase sobre cómo superar la situación.

Las empresas encuestadoras más requeridas forman parte del mismo esquema, y se encargan de instalar la idea de que la continuidad política del país, luego de 12 años de temple kirchnerista, se va a dirimir entre los candidatos que ellos mismos describen como competitivos, tanto de la oposición como del oficialismo. Y todo este más que evidente dispositivo de poder, corona con la presencia de esos mismos candidatos en los programas de TV que conjugan política y comedia. Y modelan una imagen positiva de ello, sin tener en cuenta

–más bien, ocultándolo deliberadamente– si en sus jurisdicciones se cuadruplica el boleto de transporte público o se recorta la inversión en educación.

La política tiene dos modos de responder a ello: aceptar o no esas reglas de juego. Si una ‘ratio’ o razón central de la política es interpelar al poder establecido en nombre de los intereses populares que representa, es deber de la política poner en cuestión esas reglas, y no acomodarse servilmente a ellas. Es exponerlas al juicio crítico de la sociedad, en lugar de subordinarse. Quienes, desde la propia política, aceptan que el modo de llegar al pueblo es responder al aire si van o no a una boda, o atender el llamado de un comediante a la hora, en el contexto y bajo las circunstancias que él impone, o tornarse electoralmente ‘competitivo’ no por la densidad de la propuesta sino por ser ‘mediático’, ayudan a prefigurar un modo de relación entre la política y el poder que lejos está de ese necesario rol de interpelación. El poder termina, simbólica y fácticamente, siendo quien marca las reglas de juego, determinando el camino de la relación entre el político y la sociedad, disciplinando a la política, no a la inversa.

Preferir ‘ese’ modelo de relación es resignar la condición necesaria de autonomía de la política. Y una vez sentadas esas bases, será esa misma estructura mediática la que determinará cuándo cae la popularidad del dirigente, así como antes había determinado su ascenso. Y ello clausura el debate político ideológico sobre el modelo de organización social, sobre el tipo de democracia, de matriz productiva. El modelo, en cambio, termina siendo impuesto por los mismos medios responsables de hacer ‘populares’ a los políticos de moda.

Por otra parte, esa misma estructura que vincula farándula y política, no es ajena a intereses económicos y financieros contantes y sonantes. Por ejemplo, el instar a decidir sobre un concurso de baile por medio de millones de llamadas telefónicas bajo el pretexto de una práctica democrática, esconde la colosal transferencia de recursos desde los sectores populares a las mayores empresas monopólicas de servicios, arregladas con el medio.

El conocimiento público es un factor vital de la política. Pero según bajo qué reglas se llegue a ese conocimiento le imprime a la acción política su grado de autonomía, de mayor o menor dependencia respecto de los poderes esta-

blecidos. No re-hipotecar al país, como con toda dignidad y patriotismo lo decidió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aún bajo el fuego de los peores conglomerados financieros de Wall Street, marca un ejemplo de esa autonomía política.

Los medios que articulan con los grupos financieros, aquí y a nivel mundial, hacen ‘conocidas’, hacen que ‘midan’ a nivel de encuestas, a aquellas figuras que luego propiciarán un nuevo acuerdo con el FMI, de modo que aquellos cobren sus comisiones, y el país quede hipotecado durante otras varias décadas. Así se articula el poder. Incluso, en el caso de este presente argentino, la convergencia entre farándula y política se da en una doble dirección: tanto desde un comediante que pretende incidir en la política, como de un ex periodista político devenido en comediante. Y se conecta a nivel internacional, porque no es banal que se trata de las mismas empresas periodísticas que predicen que debemos hacer lo que Griesa dice, y que no pierden oportunidad de desacreditar la credibilidad social en la política. Del otro lado, el otro modo de acumulación política, la conciencia y la movilización del pueblo, en apoyo de aquel modelo que lo dignifique.

Hacia una ley de Agricultura Familiar

Tiempo Argentino, 13.09.14

En el marco institucional de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, como continuación de una serie de jornadas que se vienen extendiendo por todo el país, con la presencia de diferentes organizaciones involucradas y funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación y su flamante Secretaria de Agricultura Familiar, comenzaron a debatirse dos proyectos de ley de Agricultura Familiar, de uno de los cuales soy firmante. No impulso esta iniciativa como un actor protagónico de la actividad, sino desde el convencimiento de la importancia cardinal de la Agricultura Familiar como factor constitutivo de un modelo de sociedad más inclusivo y democrático.

La Agricultura Familiar es una parte esencial del concepto de Economía Social, Popular y Solidaria, que incluye áreas como desarrollo local, asociativismo y cooperativismo, presupuesto participativo, microcréditos, comercio justo, precio responsable, empresas recuperadas. Y es aquí donde se devela una profunda deformación cultural nada desinteresada. Tanto la agricultura familiar como la economía social, son tomadas en cuenta como un universo de subsistencia, un subsistema vinculado a la pobreza, al cual hay que acudir con políticas asistenciales. Y no como lo que verdaderamente deben ser, esto es, una nueva matriz productiva que diversifique la estructura monopólica vigente en el país, y de la cual debe emerger un nuevo sujeto productivo, y por lo tanto una ampliación de la democracia. Una ampliación no solo cuantitativa, sino cualitativa, de la democracia política, económica y social.

Esta desvalorización conceptual de la agricultura familiar, a la cual se añaden conceptos como el de campesina y de pueblos originarios, no es ingenua. Ha sido plasmada durante décadas de predominio económico, político y cultural ejercido por los sectores dominantes. Sectores dominantes que, al contrario de la agricultura familiar, se relacionan con la tierra a partir de la mirada espasmódica de las pizarras de cotización a futuro de los grandes mercados financieros, en lugar de hacerlo desde el compromiso permanente con la tierra, la producción y el desarrollo integral de las familias argentinas, como sí lo hacen los productores de la agricultura familiar. A lo largo de esta década de gobierno, el kirchnerismo ha resaltado el concepto de interés público para las tierras rurales –a cuya extranjerización ha puesto límites precisos– y para los recursos energéticos de nuestro subsuelo. Del mismo modo, todos los argentinos y las argentinas debemos ser los destinatarios de la renta con que nos ha premiado la naturaleza, a partir de la especial fertilidad de nuestras tierras y de nuestra producción agropecuaria. Las empresas oligopólicas que se han venido beneficiando con la concentración de las tierras, a través de figuras jurídicas que nada tienen que ver con el cooperativismo sino con el latifundio, y que acaparan la comercialización en unión con grandes bancos y con multinacionales de la biotecnología, no son las propietarias del recurso, sino intermediarias entre el recurso y su verdadero

dueño, que es el pueblo de la Nación Argentina. Por ello, el Estado debe ir recuperando márgenes de intervención, de modo de devolver el protagonismo que los verdaderos productores fueron perdiendo a expensas del monocultivo que prioriza lo financiero por sobre lo social, lo ambiental, la seguridad y soberanía alimentarias y el bolsillo de los consumidores.

La presentación de un proyecto de ley que repare esta anomalía, debatido por decenas de organizaciones de productores, los campesinos y pueblos originarios, los institutos autárquicos y las reparticiones públicas, las universidades, hablan a las claras de un largo y trabajoso proceso cultural que avanza para revertir aquellas deformaciones pro-oligárquicas. El hecho de que la Comisión de Agricultura de una de las cámaras legislativas –no puedo hablar por la otra– no responda como en otros tiempos al lobby de las patronales agropecuarias, sino a los actores diversificados de la economía social y de la agricultura familiar, es expresión de ese mismo avance político y cultural.

Los proyectos, cuyos firmantes principales son la diputada Claudia Giaccone y Carlos Rubín, serán compatibilizados para convertirse en una herramienta única para el debate. El primero de ellos se titula “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad” y en su recorrido contempla la formación de un Registro de Productores y un Banco de Tierras; la preservación del ambiente; la regulación de los procesos productivos y la comercialización; el rol del Estado en la educación (la educación rural como servicio público esencial), el desarrollo y la asistencia técnica mediante el fomento de la investigación, la formación y capacitación de los productores; el aporte de infraestructura, equipamiento y otras políticas sociales y de promoción como la del valor agregado en origen; la creación del Centro de Producción de Semillas Nativas; y la suspensión de los desalojos compulsivos. Todo esto, con su correspondiente financiamiento, define un perfil muy marcado en el sentido al que nos referimos.

Siempre insisto en que una ley debe ser muy cuidadosa de su ‘texto’, que es en definitiva lo que se convierte en norma positiva, y por lo tanto vinculante de las conductas sociales. Pero hay otro aspecto no menor de una ley, y es el

‘contexto’ de debate, que se abre a partir de la temática que plantea. Ese contexto abierto por el proyecto de ley de Agricultura Familiar, más allá de todas las correcciones que necesite, tiene la misión de poner en cuestión muchos intereses dominantes, que se han sentido muy cómodos hasta ahora, en que no estaba instalado con fuerza este debate.

Y esos intereses tienen muchas herramientas para influir sobre legisladores de la Comisión de Agricultura y del plenario en general, lo que sólo puede ser contrabalanceado con mucha información y discusión franca en cada rincón productivo del país. Cada ámbito productivo debe convertirse en un cabildo abierto para sostener y mejorar el proyecto. Sólo a través de la voz de todos los actores que irrigue hasta lo más profundo de nuestra comunidad productiva, pasaremos de una idea que históricamente ha reducido la Agricultura Familiar a la categoría de economía de subsistencia, a una nueva ruralidad y una Agricultura Familiar convertida en un nuevo sujeto, en una palanca esencial de una nueva matriz de producción, comercialización y consumo, que hable de una sociedad mucho más democrática que la que heredamos.

Hacia un Sistema Integrado de Salud

Tiempo Argentino, 07.10.14

En agosto pasado tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación la trigésima reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA), presidida por la Diputada Andrea García, del Frente para la Victoria. Dicho Consejo congregó a legisladoras y legisladores nacionales y provinciales, miembros de sus respectivas comisiones de salud, así como profesionales e instituciones representativas de las distintas esferas vinculadas con la Salud. Se analizaron diversos proyectos de ley, como por ejemplo el fortalecimiento de la Ley de Medicamentos Genéricos, el de fragmentación de medicamentos, la creación de una agencia que agrupe los Laboratorios Públicos, el de Recetas Médicas Electrónicas y el que reglamenta la publicidad de los medicamentos. Todo lo

cual marca un determinado perfil en la labor de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

En ese marco, presenté un proyecto de ley para la creación del Consejo Nacional de Regulación del Mercado de Medicamentos, el cual, como surgiera del propio debate, también debería extender la regulación a los insumos médicos.

La experiencia nos indica que en ésta, y en muchas otras materias legislativas, el 'texto' de los proyectos tiene la importancia de ser lo que luego devendrá en norma positiva, vinculante para la conducta de los actores alcanzados por ellos. Pero, tal vez tan importante como eso, es el 'contexto' de debate que se abre ante cada proyecto.

La creación de este Consejo regulador no está planteada desde la perspectiva de un experto en política sanitaria, sino, básicamente, desde la defensa del interés de los millones de personas que acuden al mismo. Quien compra un medicamento, la ciudadana y el ciudadano común, es, por su condición de trabajador, el eslabón más débil de la compleja cadena de elementos que conforman el sistema. Y, sobre todo, desde el momento en que la compra de un medicamento nunca se hace desde la alegría, sino desde una necesidad o un dolor.

La Argentina muestra avances muy importantes en materia de salud a lo largo de esta década, como la prescripción de medicamentos por nombre genérico (sobre todo en su primera etapa), el programa REMEDIAR, la construcción de hospitales públicos de excelencia, la drástica disminución del dengue y del mal de Chagas, el Plan Nacer, las leyes de educación sexual integral y de anticoncepción quirúrgica, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la disminución de la mortalidad infantil, la atención del VIH/Sida, la ampliación de los programas públicos de vacunación obligatoria, el tratamiento de las cardiopatías congénitas, la elevación del número de trasplantes, el programa nacional de hipoacusia.

Por su parte, si tomamos en cuenta el monto global destinado a la salud en el sistema argentino, sumando los sectores público y privado, y lo dividimos por la cantidad de habitantes, veremos que los resultados se corres-

ponden con los de un país de desarrollo medio-alto. Sin embargo, cuando vamos a la práctica concreta, veremos que aún subsisten –no obstante los avances- diversas asignaturas pendientes para que podamos hablar de un cambio estructural en el sistema.

Una primera cuestión es desagregar esa enorme masa de recursos: los rubros medicamentos y aparatología y alta complejidad, alcanzan casi el 50% de los mismos. Es decir que cuando la circulación del mayor volumen de dinero se concentra en la rentabilidad de los laboratorios y los proveedores de alta complejidad, significa que estamos ante un sistema de salud que –paradójicamente- continúa priorizando sus ingresos en la enfermedad, una vez que ésta se ha consumado, por sobre la prevención y la atención primaria.

Una segunda cuestión se refiere a la brecha existente entre el deterioro por sobre-demanda de servicios de salud dirigida al sistema público, generalmente destinado a las familias más humildes, que en algunos casos se ven obligadas a largas esperas. A diferencia de ello, las personas con alto poder adquisitivo, beneficiarias de las obras sociales más caras y del sistema prepago, utilizan servicios de salud que se financian con poco uso –y por lo tanto están siempre disponibles- sumado a una mejor hotelería y administración digitalizada, debido a que se amortizan a través de cuotas habitualmente elevadas.

Aquí cabe arribar a una primera conclusión, y es la necesidad de integrar en un mismo sistema a la totalidad de los efectores del sistema de salud, poniéndolos al servicio de la totalidad de los usuarios, de manera de que su disponibilidad no dependa del poder adquisitivo de quien los requiere. La salud es un bien social, y no de mercado. Por ello, en algún momento, la Argentina deberá avanzar hacia la articulación de los diferentes actores, a pesar de la complejidad que supone la coexistencia del sistema hospitalario público –nacional, provincial y municipal-, el PAMI, las obras sociales sindicales y el universo de las prepagas. Por poner sólo un ejemplo, las casi trescientas obras sociales sindicales suponen la existencia de un número similar de aparatos administrativos, que, de articular su funcionamiento, permitirían elevar los recursos disponibles.

Por último, la necesidad de incrementar la producción pública de medicamentos, de modo que el Estado despliegue su capacidad reguladora de un mercado cuyos agentes acumulan una tasa de ganancia muy superior a la media de la economía, afectando con esa desmesura, las posibilidades de los sectores medios-bajos y de los pacientes más humildes. Según los expertos, la diferencia en el precio final de las drogas de producción pública respecto de lo elevado de las marcas comerciales, no se justifica por ninguna ley de técnica económica, sino por una estructura oligopólica dominada por los grandes laboratorios.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a través de su presidenta Andrea García y muchos de sus integrantes, se encamina hacia el debate de estos temas sensibles dentro de un área a su vez sensible como la salud. Los factores de poder históricamente más influyentes tienen sobradas herramientas de presión sobre las instituciones políticas. La convicción y la necesidad de honrar el mandato recibido por los legisladores votados para representar los intereses de las mayorías, deben contrabalancear dicha presión, y debatir y aprobar estos proyectos, como así todos aquellos que se orienten hacia un sistema más justo.

Afianzar acuerdos entre el trabajo y el capital nacional

Tiempo Argentino, Suplemento Trabajo y Economía - 03.02.15

Para profundizar lo hecho y lograr cambios estructurales en nuestra matriz productiva, hay que acompañar a la mayoría electoral con un ensanchamiento de la base social que sostiene el proyecto. Recuperar el sentido común secuestrado por la oligarquía.

En una entrevista reciente me plantearon como una rareza el aumento del apoyo popular a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando transcurre el final de su mandato. La discordancia comentada contrasta con nuestra tradición política que muestra gobiernos que pierden legitimidad social y

autoridad a medida que se acerca su despedida. Muchas cosas cambiaron en América Latina y en la Argentina, entre ellas ese final predestinado.

¿Por qué? Porque además de las medidas concretas de gobierno, el kirchnerismo modificó la relación entre Política y Poder Real al desandar durante sus primeros años el camino neoliberal. Ya en la gestión de Cristina, más intensamente a partir de la Resolución 125, pasó a la construcción de una nueva hegemonía por lo cual se convirtió en cuestión central la disputa por el poder.

Esa confrontación política abarca, desde luego, aspectos patrimoniales como la recuperación de los fondos previsionales, el autoabastecimiento energético, la inversión pública. Y también el sentido común: la oligarquía se encargó no sólo de sentar bases económicas, sino de controlar el lenguaje, de construir grandes creencias sociales para interpretar la realidad según sus intereses. La conocida colonización cultural.

La recuperación de nuestra perspectiva latinoamericana, el debate abierto a partir de la Ley de Medios, el desplazamiento de la idea de que el Estado es el responsable de los aumentos de precios al poner en el centro de la atención pública la responsabilidad que tiene la tasa de ganancia de los monopolios, son cambios trascendentes en medio de la disputa económica y cultural.

En la Argentina cada persona tiene libertad para pensar y decir lo que quiera. Pero hoy nadie puede negar que somos muchos más quienes nos damos cuenta de que los que históricamente se presentaron como periodistas independientes, economistas probos o magistrados judiciales, no son otra cosa que militantes políticos al servicio de ese poder real que los pone a cumplir funciones en distintas áreas de la vida nacional. Son voceros que no expresan instituciones independientes, según reza la doctrina liberal, sino defensores encubiertos de los intereses de los sectores más privilegiados, amparados para tal función en la colonización cultural que el kirchnerismo vino a cuestionar.

Cambios de paradigmas tan profundamente arraigados trascienden los períodos electorales demoliberales y puesto que nosotros no hemos modificado el sistema electoral, debemos estar siempre atentos a no perder el apoyo de las mayorías.

Conclusión de una reflexión inicial: se impone la necesidad de contar con la mayoría electoral para relegitimar al gobierno. Pero para sostener la gobernabilidad, para profundizar las medidas, para sostener los cambios estructurales de nuestra matriz productiva aún pendientes, hay que acompañar la mayoría electoral con un ensanchamiento del bloque social que la sostiene. Ese ensanchamiento no puede ser otro que la conjunción de intereses entre los representantes de los asalariados y los empresarios que expresen la diversificación de la producción, el compromiso con nuestro desarrollo y el no giro de utilidades al exterior, sea a sus casas matrices o a sus propias cuentas, sino su reinversión en el país. Se trata de promover y consolidar una sinergia positiva entre el trabajo y el capital nacional.

No en vano uno de los objetivos fundamentales de la colonización cultural oligárquica es romper tres alianzas fundamentales en la configuración de este bloque social popular alternativo.

*Romper la alianza entre la sociedad y la política, poniendo a esta siempre bajo sospecha.

*Fracturar la alianza entre el pueblo y el Estado, de tal manera que el pueblo vea siempre al Estado como un enemigo y no como un poder obligado a garantizar la protección social.

*Disolver la alianza entre sectores medios y populares que tienen objetivamente intereses comunes, pero que son llevados a procesar la realidad desde una subjetividad que los enfrenta.

Hay que impedir esas fracturas y trabajar por el ensanchamiento del bloque popular

El republicanismo hipócrita es el golpismo de siempre

Tiempo Argentino, Suplemento Trabajo y Economía -17.02.15

Los legisladores opositores que se niegan a sesionar en el Congreso de la Nación no cumplen con el mandato electoral recibido. Remplazan el debate par-

lamentario por las cámaras de la televisión y las tapas de algunos diarios, traicionando a los ciudadanos que los eligieron.

Dos improntas profundamente engañosas dominan el discurso del poder real. Al ser él quien manejó durante décadas las premisas intelectuales de vastos sectores de nuestra sociedad, sobre esa base se fueron construyendo sus creencias políticas fundamentales.

Una de esas improntas es estimular el uso de consignas más que reflexiones, discutir la política en formato de programas de chimentos, construir títulos antes que ideas. Y todo esto, apoyado en un soporte fundamental que es la descontextualización de los hechos: es decir, presentarlos de manera aislada del marco de referencia geopolítico mundial y regional.

La segunda impronta es convertir cada acontecimiento político en un hecho ahistórico. Es decir, sostenido por actores que esconden los intereses que han defendido a lo largo de su historia.

La política argentina, y cada uno de sus actores concretos, tienen una historia. Hay quienes redactaron las declaraciones de La Falda y Huerta Grande durante la resistencia peronista, fundaron la CGT de los argentinos y participaron del Cordobazo. Y hay otros que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, proscribieron al peronismo durante casi dos décadas y ocultaron el cuerpo de Eva Perón hasta su devolución en 1971. Cada uno de esos actores tuvo, además, una relación de complacencia o enfrentamiento con cada hecho que jalona nuestra historia política reciente. Un poco más acá, cada uno eligió relacionarse de manera diferente con las aberraciones cometidas por el Terrorismo de Estado y los crímenes de Lesa Humanidad.

Los actores políticos de hoy somos los herederos de aquellas ubicaciones diversas en el escenario nacional y algunos decidieron desertar de su responsabilidad institucional, sustituyendo su ausencia en los debates parlamentarios por las manifestaciones mediáticas.

En las últimas oportunidades han dificultado el quórum sistemáticamente. No lograron cancelar las sesiones porque el Frente para la Victoria forma quórum propio merced al voto popular, nada menos. Reitero, porque si no pare-

cería sólo un detalle: nada menos que merced al voto popular, columna de la democracia. Del mismo modo, impidieron que se trate el remplazo del doctor Zaffaroni para completar la Corte Suprema. Y recientemente, no acudieron a la Comisión del Senado que trataba la nueva Ley de Inteligencia.

En primer lugar, se trata de un despropósito desde el punto de vista del respeto institucional, al que tanto hacen referencia, por no decir que se trata de una lisa y llana violación de la Constitución e incumplimiento del mandato electoral que recibieron. ¿Por qué? Porque si hubiera triunfado su posición, no hubieran existido sesiones parlamentarias durante las que se sancionaron leyes fundamentales para el país. Pero, además, porque al no dar ni permitir el debate, los ciudadanos que los eligieron para ser representados se ven impedidos de hacer escuchar su voz.

Sin embargo hay una cuestión todavía más grave, y es esgrimir que una presidenta a quien le falta casi un año para concluir su mandato no debe tomar determinadas decisiones políticas. Si así ocurriera, ello implicaría vaciar el mandato constitucional de gobernar durante cuatro años y abriría las puertas al gobierno de los poderes fácticos.

Se trata del mentado “golpe institucional” o “golpe blando”, como se lo suele llamar en los últimos tiempos. Soy particularmente reticente a usar esa denominación, porque es posible que se trate de métodos menos agresivos físicamente que en otros momentos históricos, agresión que sería siempre menor si se la compara con las torturas y las desapariciones. Pero la menor intensidad de ciertos métodos no implica que las consecuencias de estos golpes sean menos duras para los pueblos en términos de hambre, pobreza o desocupación.

Que no exista un marco histórico para los golpes militares a punta de fusil responde a un contexto distinto en el orden internacional y regional y a una menor aceptación social de dichos métodos. Pero esto no quiere decir que no existan los actores políticos que representan en el presente, los mismos intereses y objetivos que produjeron aquellos golpes violentos. Si estuvieran dadas las condiciones, no dudarían un instante en repetirlos.

Por ello, la abstención institucional de la oposición encubre una concep-

ción profundamente golpista, que abreva en lo peor de nuestra historia política reciente. Una historia que tiene, a su vez, impulsores e idiotas útiles que siempre se han unido a los primeros. De los primeros no habría que extrañarse, porque son en definitiva quienes accionan en función de sus propios intereses. Pero más allá de que tengan todo el derecho a criticar y algunos motivos para hacerlo, los idiotas útiles deberían preguntarse a cuáles intereses sirven con su actitud. ¿A qué modelo de país sirvió la participación de radicales y socialistas en las juntas consultivas de la denominada Revolución Libertadora?

En definitiva, es sumamente grave que se unan con el solo objetivo de desestabilizar a un gobierno que ha promovido avances inocultablemente profundos para la calidad democrática de la Argentina.

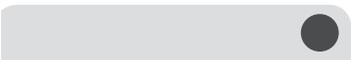


Capítulo II

**EL DESAFÍO REGIONAL Y LA
AMENAZA DE LA RESTAURACIÓN**



Inauguración de la cumbre del G77 en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia 15 de Junio de 2014



La muerte de un hermano

Tiempo Argentino, 06.03.13

Atardecer del 5 de marzo. Espero en el teléfono para mi columna en Radio Nacional de Mendoza. En el programa El Candil, se refieren a la salud de Chávez. Una oyente dice: “¿Por qué no hablan más de la Argentina en vez de hablar tanto de Venezuela?”

Me preguntan qué opino. Armo mi respuesta asociando con lo que me sucede en el momento. Cuando me llamaron estaba escribiendo sobre los 40 años de la elección que ganó Cámpora el 11 de marzo de 1973. Y, durante todo el día, tuve presente el comienzo del juicio contra los criminales del siniestro Plan Cóndor, aquel operativo conjunto de las dictaduras latinoamericanas de los ‘70.

Entonces respondo. Digo que hay muchos sueños en común entre aquella época y el presente. Pero, en aquel momento, las dictaduras estaban más sincronizadas entre sí que los movimientos populares. Un ejemplo de eso: en septiembre de 1973, mientras los trabajadores argentinos elegían por tercera vez a Perón, caía en Chile el gobierno de los trabajadores. Las experiencias populares no estaban suficientemente acompasadas. Y nos pasó lo que nos pasó.

Hoy, más allá de las lógicas y saludables improntas de cada país, tenemos gobiernos con una enorme sensibilidad social en común, que proponen un rol protagónico del Estado, buscan soluciones económicas por fuera del FMI, y políticas por fuera de la OEA y los EE UU Y son plebiscitados por sus pueblos. Hoy nos sentimos más hermanados. Si gana Correa ganamos nosotros, si expropia Evo nos alegramos nosotros. Por eso, por estar más unidos, no nos van a poder doblegar. A Hugo Chávez, como a los otros compañeros y compañeras presidentes, les debemos mucho en ese sentido. Y por eso, a esa oyente desatenta, le respondí que hablar de Chávez es hablar de nosotros.

Corté el teléfono y me enteré de la noticia. Si los argentinos hemos honrado una muerte inesperada y terrible como la de Néstor Kirchner, los venezolanos lo harán con Hugo Chávez, se repondrán y seguirán su camino. Tendrán, como tuvimos nosotros, mucha fortaleza.

Mañana mismo, los latinoamericanos seguiremos juntos adelante. Hoy, permítanme estar triste, compañeras y compañeros, y también esa oyente, por la muerte de un hermano.

La dimensión humana

Página 12, 09.03.13

Los grandes medios hegemónicos de habla hispana, esos que el pensador mexicano Fernando Buen Abad caracteriza como el nuevo sujeto del golpismo regional en reemplazo de las asonadas militares, no tuvieron más remedio que dar al fallecimiento de Hugo Chávez el espacio central que merecía.

Pero, acto seguido, priorizaron tres puntos de análisis, coherentes con su objetivo de debilitar los procesos populares de la región. El primero es el presunto autoritarismo de Chávez, desmentido por las catorce elecciones en que el voto popular lo proclamara victorioso. La conclusión es que quien califica a la expresión popular como autoritaria, no dudaría, como no han dudado, en destituir a los gobiernos plebiscitados por sus pueblos.

El segundo fue resaltar las eventuales internas del frente bolivariano, aun cuando los principales involucrados como adversarios en esa interna no han hecho otra cosa que dar señales y testimonio de unidad.

El tercer punto, tratado por los medios opositores de nuestro país, absolutamente secundario e irrelevante, es la extensión de la delegación argentina para despedir a Hugo Chávez. Era previsible que lo hicieran, porque lo que buscan es, insisto, debilitar la unidad regional. En momentos de tanto impacto, como la muerte de un líder, tiene un valor fundamental para las personas y para los procesos haber hecho explícito un sólido apoyo de nuestro país. ¿Cómo se hubiera leído una delegación encabezada por nuestra Presidenta, pero escuálida desde la representación social e institucional?

Estas cadenas de medios han escondido, históricamente, la dimensión humana de la política. Yo miraba a Cristina, a pocos metros del cuerpo del pre-

sidente Chávez, y compartí mi pensamiento con algunos compañeros: todo lo que debe removerle interiormente un episodio como éste, a poco tiempo de haber vivido ella misma una pérdida similar. Pensaba que los grandes hitos de la historia de América del Sur no tienen por qué despojarse de su enorme dimensión humana. Como aquellos días de zozobra financiera para la Argentina, cuando el presidente Chávez, como hacen los amigos, puso lo que nuestro país necesitaba. O cuando, con Lula y Néstor, en noviembre de 2005, dieron aquel batacazo antiimperialista en las propias narices del emperador.

Hay algunos acuerdos de dirigentes que sólo están basados en cuentas y negocios. Otros construyen patria. Y los pueblos lo perciben en la mirada de sus líderes. Y los sienten en carne propia, hechos realidad en los delantales para el colegio de sus hijas e hijos, en la casa que hoy poseen en lugar de la casilla, en el salario que antes no tenían, en el pavimento y la vereda donde estaba el pantano, en sus dientes arreglados...

Y lo devuelven en amor, en horas de espera bajo el sol, el rocío o la llovizna; en cuadras y cuadras de lenta caminata con chiquitos alzados, o en sillas de ruedas. Nadie lo exige. Lo hacen desde la espontaneidad y el recogimiento a los que los mueven el respeto, el cariño y la gratitud, forjados durante años de derechos conquistados, de esa sensación de justicia largamente postergada... Hablo de esa dimensión humana –de los líderes y de los pueblos– que, quienes históricamente apostaron a dividir para reinar, o no entienden, o están empeñados en ocultar.

Con el pesar de la pérdida, agradezco haber estado en Caracas, la capital bolivariana que, a poco de llegar, a uno lo recibe con un gigantesco mural que dice: “Para nosotros, la Patria es América”.

Lo que está en juego para la región

Tiempo Argentino, 14.04.13

La primera señal de cambio de paradigma cultural en la región en esta última década es estar escribiendo estas líneas. Es decir, que la elección del presidente

de Venezuela despierte interés –y hasta pasión– en la Argentina. Es que ahora pensamos en términos de Patria Grande. Y nada menos que los argentinos, a quienes la colonización cultural y la falta de masividad indígena –exterminio roquista de por medio– nos llevó a mirar siempre más la “civilización” europea que la “barbarie” indoamericana.

Pero lo central es lo que está en juego: la continuidad de la autonomía política de la región. Alba, Unasur y Celac en lugar de OEA. Está en juego la recuperación del Estado, el compromiso con los más humildes de nuestras sociedades.

El hecho de ser Venezuela el país con mayores reservas petrolíferas del mundo exacerba, por un lado, la virulencia de las operaciones conspirativas del poder de todo tipo. Por el otro, la pasión de un pueblo y la capilaridad de un movimiento político como el fundado por Hugo Chávez, dispuesto a defender y profundizar lo logrado, con la misma convicción que cuando su líder estaba presente físicamente.

Esta semana, estuvo reunida en Rosario la crema de la derecha iberoamericana, encabezada por el ex presidente de España José María Aznar y el literato peruano Mario Vargas Llosa. ¿Por qué aludo a esta reunión? Porque hoy la derecha está obligada a coordinar políticas opositoras, y lo hace aglutinando su propuesta por la negativa en torno de tres ejes de manual: la corrupción, la inflación y la inseguridad. Pero, básicamente, porque ya no cuentan con las directivas de un solo centro de decisión mundial. En los ochenta era el eje Reagan-Thatcher y en los noventa el Consenso de Washington. Pero hoy, la crisis europea, el fracaso militar de los EE UU en Asia y la aparición de nuevos actores en la economía internacional obligan a esta derecha subdesarrollada a autoabastecerse de doctrina.

Y la otra dificultad que tienen es la sintonía de los gobiernos populares de la región y su alta legitimidad popular. Con Brasil en los BRICS, con Venezuela liderando la política petrolera de los países emergentes, con un Ecuador pujante y un presidente legitimado para encarar una reforma de la propiedad agrícola, con un Chile que –de ganar Bachelet– podría debilitar la Línea del

Pacífico, con una Bolivia cuyo Estado conduce cada vez más palancas estratégicas para su desarrollo, con Argentina profundizando la cooperación Sur-Sur con economías complementarias de Asia y África, y liderando la lucha contra los fondos buitres, la región está disminuyendo la pobreza y creando nuevos actores productivos. Y nuestros pueblos están vivos y animados.

Para potenciar toda esta vitalidad, Nicolás Maduro debe ganar con claridad los comicios de hoy, y los latinoamericanos tenemos que entenderlo como una victoria propia.

El dilema europeo

Tiempo Argentino, 17.04.13

Entre el 22 y el 24 de marzo pasado tuvo lugar en la apacible Burdeos, Francia, el Tercer Congreso del Partido de la Izquierda francesa, en el que, por iniciativa de mis compañeros Martín Sabbatella y Ariel Basteiro, representé a Nuevo Encuentro. También estuvo, por la Argentina, la muy valiosa compañera Lucila Grosso, que pertenece a La Cámpora.

El Partido de la Izquierda forma parte de un frente mayor –político y social– que intenta canalizar el desgaste del binomio tradicional –conservadores y socialdemócratas– de la política francesa. Mientras en España, la impotencia y la falta de voluntad y coraje del partido socialista derivó en un nuevo gobierno de derechas, Francia presenta un fenómeno similar en el producto, pero altera el orden de los factores. Allí fue el gobierno de derecha de Nicolas Sarkozy quien no pudo manejar la situación, y dejó su lugar al socialdemócrata François Hollande. Pero la realidad ha empeorado bajo su presidencia. La crisis en Francia no alcanza –al menos hasta ahora– las dimensiones de Grecia, Portugal, España, Italia (donde acudimos a un proceso político muy particular), y ahora Chipre. Pero sí se hace sentir al interior de su pueblo, con un 11% de desocupación, que se acentúa entre los jóvenes, sumado a recortes sociales de todo tipo.

Al igual que lo sucedido en varios países de Europa, y antes en América Latina, el desgaste por incapacidad de las dos corrientes políticas dominantes, e incluso a veces su complicidad y sociedad en oscuros negocios, va llevando inevitablemente al despliegue de nuevas alternativas. Pero no está garantizado que esas alternativas sean necesariamente progresistas. También aparecen opciones de una derecha más intensa aun, como la que encarna en la propia Francia la hija del neofascista Jean-Marie Le Pen.

“Si el desencanto no deriva en nosotros, lo capitalizará la ultraderecha”, declaró certeramente el líder del Partido de Izquierda, Jean Luc Melenchon, que en abril de 2012 superó el 11% de los votos en la elección presidencial. Y que ello no ocurra, dependerá de su claridad ideológica, de la confianza que inspire su programa concreto, pero, sobre todo, de la contundencia en la decisión de no transar con el sistema tradicional. Esto último no estará dado sólo por las declaraciones y los comportamientos autónomos, sino además, por su capacidad de atraer, organizar y potenciar el desarrollo de todas aquellas experiencias sociales surgidas del descreimiento.

El Congreso giró en torno de dos ejes propositivos fundamentales: la “Revolución Ciudadana” y el “Eco Socialismo”. La primera se refiere precisamente a la necesidad de priorizar las nuevas experiencias sociales para dar contenido a las propuestas. Y aquí no sólo se toman como ejemplo los recientes acontecimientos de Europa, sino también, y con mucha atención, los procesos populares de América del Sur de la última década. La otra propuesta, el Eco Socialismo, parte de una mirada planetaria, que lleva necesariamente a limitar el desenfreno del lucro capitalista, y a nuevos pactos respecto de la energía y los recursos naturales, con acento en la economía social. Mientras el presidente Hollande insiste en denunciar los excesos del capitalismo financiero como “un enemigo sin nombre ni domicilio”, el Partido de la Izquierda los proporciona, desplazando esa disputa desde el inasible plano de lo abstracto, al terreno de lo concreto.

Jean-Luc Mélenchon fue el único dirigente francés que condenó la intervención a Mali, por tratarse de un país con un gobierno ilegítimo, surgido

de un golpe de Estado. Lo que habla de una visión crítica hacia el atávico colonialismo francés.

Durante el Congreso, se dispuso de un capítulo para escuchar a los invitados de otros países, entre los que predominamos las ex colonias francesas de África, y los sudamericanos. Y fue en esa intervención donde advertí sobre una posible paradoja entre los dos ejes propuestos: la Revolución Ciudadana –que interpreta la indignación de Europa– y el Eco Socialismo, que supone una dimensión planetaria, lo que implica un gran desafío a sortear.

Los indignados de Europa lo están a partir del desempleo, y de los recortes sociales a la vivienda, a la educación, a la salud. Pero tan cierto como eso, es que esos beneficios del Estado de Bienestar fueron obtenidos a partir de décadas de estrangulamiento de las economías subdesarrolladas, de cuya responsabilidad Europa no es ajena. La paradoja es cómo rehacerse de los ajustes en Europa, de lo que da cuenta la Revolución Ciudadana, sin desatender los intereses de los pueblos del Sur, de lo que da cuenta la perspectiva planetaria del Eco Socialismo.

Y aquí aparece un concepto esencial. La crisis europea no es financiera. Si así fuera, bastaría dar con la fórmula correcta de política financiera, para superarla. Se trata, más bien, del agotamiento de un modelo de acumulación que comenzó carcomiendo a los países periféricos, pero que ahora ha llegado a las sociedades del centro del sistema. Por lo tanto, la única superación posible vendrá de la mano de un nuevo paradigma, de una nueva relación entre producción y consumo, de una nueva igualdad entre las naciones. De mantenerse el actual patrón de acumulación, para que una población empobrecida de África o de América Latina alcance los niveles de consumo de Vancouver o Copenhague, harían falta seis planetas Tierra para obtener la energía necesaria. Lo que habla a las claras de la necesidad de repensar los actuales patrones de acumulación y distribución.

El cierre del Congreso fue emotivo. Con los puños en alto, entre una multitud de jóvenes que agitaban las banderas rojas y verdes, las voces entonaron la marcha Internacional, luego la enorme Marsellesa, y una hermosa canción

titulada “Grândola, vila morena”. En la madrugada del 25 de abril de 1974, el pueblo se adueñaba de las calles de todas las ciudades de Portugal al son de esa marcha, como señal de que la dictadura de más de 40 años llegaba a su fin, dando paso a la “Revolución de los Claveles”. Una de sus estrofas reza: “Grândola, vila morena, tierra de fraternidad/en cada esquina, un amigo, en cada rostro, igualdad.”

Venezuela en la contienda mundial

Página 12, 07.05.13

No bien concluida la elección presidencial de Venezuela, la presidenta Cristina Kirchner pidió al gobierno de Estados Unidos que reconociera el triunfo electoral de Nicolás Maduro. La razón central era evitar la violencia surgida de una oposición envalentonada por el respaldo de los EE.UU., apenas después de que la voluntad popular acabara de negársele.

Para resumir en un solo eje la diferencia entre los proyectos, ésta reside en el destino de la renta del país con más reservas petroleras de la Tierra. Si es el Estado para su distribución social o si retorna a las multinacionales. El tratarse de –nada menos– 297 mil millones de barriles (6 millones de los cuales consumen los EE.UU. diariamente), da cuenta, de un lado, de la pasión popular por la Revolución Bolivariana. Del otro, la inescrupulosidad de la derecha. Y esa controversia, en un país petrolero tan relevante y con un marco tan complejo de la política internacional, no repercute sólo en la región, sino que se generaliza.

No es casual que quienes desconocieran en un principio los resultados fueran los EE.UU., la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA). Los primeros, potencia dominante históricamente contraria a todo intento de autonomía política y económica de la región. Preocupados por el abastecimiento energético de los centros de poder mundial y las economías desarrolladas, y tapizando militarmente Medio Oriente, se resisten a perder el control del petróleo venezolano, y a la influencia regional de ese país. La OEA,

por su parte, es la prolongación institucional de su hegemonía, resentida por construcciones como Unasur y Celac. Esta última presidida por Cuba, país excluido de la OEA y bloqueado por los EE.UU. desde hace más de medio siglo. Junto a ellos, la “troika” que asfixia a Europa en favor de los bancos, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central de Europa y el FMI.

Como contracara, China y Rusia, los observadores internacionales y Mercosur, Unasur y Celac, respetaron de inmediato la voz de las urnas. Pero lo que subyace detrás de esto es una disputa –aunque inorgánica– de alcance planetario. A mediados de los ’70, el mundo se encontró ante la contienda por el excedente económico de la posguerra, y fue claramente ganada por el neoliberalismo. Hoy, la disputa se entabla alrededor del excedente financiero, en combinación con la escasez de recursos naturales. Y los poderes transnacionales –representados, precisamente, por quienes pusieron en duda el triunfo de Maduro– van a utilizar todas las herramientas a su alcance, legítimas o no, para no ceder posiciones.

Sin embargo, la crisis europea, la demora de la recuperación económica de los EE.UU. y su fracaso militar en Asia, y la aparición de nuevos protagonistas como China, ponen a estos actores en una posición de menor fortaleza en épocas del eje Reagan-Thatcher o el Consenso de Washington. Por su parte, el Consenso de Shanghai (China-Rusia), la integración sudamericana y la resistencia de Medio Oriente sitúan a quienes bregamos por la distribución racional del poder y de los recursos con una incidencia en la agenda internacional sin precedentes.

La Patria Grande, en su dimensión profundamente política, no sólo debe ser asumida en términos de coyuntura. Recuperación estatal, inclusión social, ampliación de derechos, reemplazo de la idea neoliberal de “crecer para igualar” por la de “igualar para desarrollarnos”, autonomía financiera, deben tener la continuidad necesaria para tornar irreversible la tendencia igualitaria que tan trabajosamente estamos construyendo.

Manual del colonialismo post-moderno

Tiempo Argentino, 07.07.13

- 1) Con el 4% de la población mundial, los Estados Unidos necesitan sostener un modelo que consume casi el 30% de la energía, en un planeta con recursos cada vez más escasos. Desde esa concepción, lo que ocurra en cualquier rincón del mundo atañe a su seguridad nacional.
- 2) Durante la Guerra Fría, el espionaje estaba dirigido a un enemigo estatal, regular y previsible. Hoy, la excusa del terrorismo justifica un espionaje generalizado a todo momento, en todo lugar y bajo toda forma. La Agencia Nacional de Seguridad de los EE UU (NSA, por sus siglas en inglés) llega a interceptar 1700 millones de correos electrónicos diarios. Hoy, un espía desertor es más peligroso para ellos que un misil o un terrorista.
- 3) Europa, nuevo patio trasero. España, Francia, Italia y Portugal obedecen la orden ilegal de los Estados Unidos de impedir el paso de un avión presidencial, luego de haber sido ellos mismos, sus embajadas y sus reuniones, los espiados por el Imperio. Doblemente lacayos.
- 4) En 2008, Evo había pedido la expulsión del embajador de los EE UU, que era quien coordinaba el golpe de Estado iniciado en las provincias de la media luna más rica de Bolivia. Semanas atrás, echó del país a US Aid, una organización que bajo el ropaje de la ayuda humanitaria financia operaciones de inteligencia y desestabilización en nuestros países. En varios de nuestros países, se invirtió la apropiación de la renta de los recursos estratégicos: pasó de las grandes empresas al Estado, para su redistribución social. La reciente violación a la soberanía boliviana es un escarmiento, que sirve también para amedrentar futuras decisiones autónomas.
- 5) Contraofensiva del Imperio. La desestabilización en Venezuela, Colombia en la OTAN, el fallido intento de las derechas de capitalizar las movilizaciones en Bolivia y luego en Brasil, el grotesco mediático en la Argentina, configuran una estrategia de desgaste de los gobiernos pro-

gresistas de la región. Esto, presidido por la formación de la Alianza del Pacífico y la presión sobre Paraguay y Uruguay para que debiliten el Mercosur. Sin olvidar la continuidad de las bases militares.

- 6) De estas situaciones sólo se sale para adelante. No sólo consolidando la imprescindible unidad política frente a las crisis, sino también avanzando en las instituciones autónomas de Unasur. La unidad hay que financiarla. Y para ello se necesita el Banco del Sur, la moneda regional de intercambio, la repatriación de reservas internacionales, el Banco de Desarrollo regional. Hay que implementar, desde los países de mayores dimensiones y recursos, políticas activas hacia los pueblos que se encuentran más presionados. Y dar, también a escala regional, la batalla contra una de las acechanzas desestabilizadoras más peligrosas, la comunicación hegemónica que sigue teniendo un enorme poder para formar el sentido de una parte importante de nuestras sociedades.

Profundizar la integración: si no es ahora, ¿cuándo?

Tiempo Argentino, 26.08.13

En la Reunión de Parlamentarios del Foro de San Pablo (que aglutina a partidos y agrupaciones de izquierda de toda América Latina.), el senador uruguayo Roberto Conde, del Frente Amplio, expresó: “Estamos avanzando, construimos mayorías, pero aún no hemos construido hegemonía.” Esto es, nuestros procesos no están consolidados, no son irreversibles. No hemos pasado todavía de una “época de cambios” a un “cambio de época”, para utilizar palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Además, dado que se trata de procesos que siguen la vía electoral para su re-legitimación periódica, un revés en un comicio podría generar un clima adverso para su continuidad y profundización. Y esto, expandirse hacia otros países de la región, debido a que el poder de las derechas sigue siendo fuerte, está organizado y actúa a escala regional.

Pese a que, burdamente, la derecha se empeña en hurgar en nuestras particularidades nacionales para agrietar la sintonía entre los gobiernos populares de la Patria Grande, en todos los casos se trata de gobiernos sensibles a la situación de los más débiles, propensos a recuperar para el Estado la renta de los recursos estratégicos para su redistribución social. Gobiernos para los cuales el Estado debe regular a los mercados, y la política subordinar a lo económico. Gobiernos encabezados por luchadores sociales de toda la vida. Gobiernos que lograron reducir a su mínima expresión el histórico poder de la OEA (es decir, de los EE UU sobre la región), y que hicieron que el presidente del gobierno de Cuba, Raúl Castro, pese a que su país permanece vilmente bloqueado, presida la CELAC, el foro que reúne a los países de América Latina y el Caribe.

Es cierto que, como decía el senador uruguayo, hemos avanzado mucho. Inclusive en materia de integración, como lo demuestra el proceso de ampliación del Mercosur, que acaba de incorporar a Venezuela, y espera hacer lo propio a la brevedad con Bolivia y Ecuador. Pero también afrontamos problemas, como la formación de la Alianza del Pacífico, un sucedáneo del ALCA de menores dimensiones orientado por los EE UU, y la seducción que ella intenta ejercer sobre Paraguay, luego del golpe contra Fernando Lugo.

Frente a esa ofensiva, la única salida es la profundización de la integración. Porque la construcción de hegemonía regional por parte de nuestros gobiernos populares sólo se logrará en la medida en que obtenga el financiamiento que necesitan las políticas para un desarrollo autónomo, por un lado, y, por el otro, la prolongación en el tiempo de su legitimidad popular. Para lo primero, se torna imperativo avanzar con instituciones como el Banco del Sur, la moneda regional de intercambio y la recuperación de las reservas internacionales hoy depositadas en bancos de la Europa en crisis, que podrían financiar grandes proyectos estratégicos de integración energética e infraestructura productiva. Hace poco, el propio presidente Correa se esperaba en nuestra integración en materia de producción pública de medicamentos genéricos, vacunas y anticuerpos, con lo cual lograríamos un colosal ahorro de divisas, además de abrir un camino de independencia tecnológica de los voraces laboratorios extranjeros.

Para lo segundo –la consolidación de su legitimidad pública– necesitamos tratar en las máximas instituciones regionales, el poder desestabilizador de las grandes cadenas de medios hegemónicos, en remplazo del rol que otrora jugaran los clásicos golpes militares. Necesitamos crear a instancias de Unasur, un área de trabajo permanente que aborde la cuestión de nuestra dependencia tecnológica de los centros informáticos del Norte, máxime al calor de las recientes informaciones de espionaje, en el que se ha basado históricamente la dominación ejercida por las grandes potencias.

Y aquí me detengo en un punto que me parece central: por sus dimensiones, por el volumen de su producto, por la tradición de su diplomacia, por su incidencia en los organismos multilaterales como el G-20, por su presencia en el BRICS (junto a Rusia, India, China y Sudáfrica), el papel de Brasil es fundamental. Dicho con realismo, es muy difícil que la región fije una política duradera si Brasil no quiere, así como es muy difícil que si Brasil tiene voluntad política, una decisión no se tome. Por eso, para que esta agenda de profundización de la integración se materialice, además de todas las otras, hace falta la decisión de Brasil.

En definitiva, la Reunión de Parlamentarios resolvió constituir una red, coordinar una agenda regional de leyes necesarias, conformar una delegación permanente, efectuar al menos una reunión anual, y enviar misiones de apoyo a los próximos procesos electorales de Honduras y El Salvador. Pero nada de lo que hagamos desde los parlamentos es comparable a lo que podría lograr la decisión política de sus líderes, las y los presidentes, para profundizar la integración. Y si no es ahora, que contamos con mayorías populares en la mayoría de nuestros países, ¿cuándo?

La presidenta forma agenda desde la dignidad de un país

Tiempo Argentino, 10.09.13

Acabamos de vivir semanas aciagas en cuanto al compromiso del sistema judicial con la democracia. A la inexplicable dilación de la Corte Suprema para fallar sobre la Ley de Medios se sumaron dos acordadas que limitan la divulgación de los ingresos de los funcionarios judiciales y el acceso por concurso al poder judicial; un fallo que –bajo el argumento de falencias procesales en que incurriera el Estado– prorroga la cautelar contra la expropiación del predio que se atribuye la Sociedad Rural y un fallo de cámara que obstruye una decisión de política pública a expensas de los intereses de la empresa LAN. La posterior afirmación de Carlos Fayt de que la Corte no fallará sobre la Ley de Medios antes de las elecciones de octubre, es una nueva y contundente comprobación de una justicia politizada, pese a su nada creíble simulación por parecer aséptica.

Agotada, en Latinoamérica, la vía militar directa para la interrupción de los procesos democráticos, su desgaste y deslegitimación se propone por vía de las cadenas de medios hegemónicos que actúan bajo un molde común: machacar sobre los hechos de inseguridad, las denuncias de corrupción y el desabastecimiento, hasta lograr la saturación social como objetivo. Y apoyándose en el Parlamento, en el plano institucional, como en el caso del golpe a Fernando Lugo en Paraguay, en un sector de la policía en Ecuador o en el Poder Judicial, en el caso de la Argentina.

A nivel internacional, el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York desoye nuestra política soberana, desde pleno corazón del capitalismo financiero internacional. Ya antes, la justicia de la república de Ghana, en alianza con las finanzas trasnacionales, había embargado nuestra Fragata Libertad, de lo que luego tuvo que desdecirse.

Todo esto habla, a las claras, del compromiso de los sistemas judiciales con los intereses de los grandes poderes, como una constante en la trama institucional instaurada por Occidente, en detrimento de los procesos populares. Y

es aquí donde creo oportuno ejercitar la idea de la conexión existente entre la intención de estos fallos de amedrentar una estrategia soberana de desendeudamiento como la de Argentina, con la decisión de intervención militar en Siria y la convulsión de Medio Oriente en general.

Luego de la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que primero arrastró a otras burbujas inmobiliarias para extenderse más tarde a un conjunto de economías de Europa, la economía de los EE.UU. comenzó a recuperarse, a diferencia de la prolongada recesión europea. Pero esa recuperación no obedece a grandes políticas proactivas de estímulo a la producción, sino a medidas de política monetaria, basadas en la sostenida inyección de dólares al mercado, desde los últimos tiempos de George W. Bush en adelante. Y, complementariamente con esto, al incremento de la facturación de su industria militar.

La industria militar opera sobre las decisiones del presidente de los EE.UU. por tres vías convergentes. Una de ellas son los “think tank” como, por ejemplo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, cuyos principales patrocinadores son Northrop Grumman y Raytheon, constructoras del bombardero B-2 Spirit y de los misiles Patriot y Tomahawk, respectivamente. Otra vía es el aporte económico del complejo militar-industrial a los parlamentarios más influyentes, estimado para este año en alrededor de sesenta millones de dólares. A las dos empresas nombradas se suman Lockheed Martin, Boeing y General Dynamics, todas las cuales obtienen contratos por miles de millones de dólares. “Nuestro deber es asegurar que nuestras tropas estén bien equipadas”, dice en su página web el diputado por California Buck McKeon, presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara Baja. Y la tercera vía utilizada es la contratación que hacen estas empresas de funcionarios del Ejecutivo, una vez que dejan de serlo.

Durante todos los años de la presidencia de Barack Obama, y pese a sus promesas de campaña y al Premio Nobel de la Paz que recibiera, la carrera armamentista se mantuvo en ascenso, sostenida sobre su posición de no renunciar al uso de armas nucleares, sobre el eufemismo de la “intervención humanitaria” o de la “guerra justa”, y sobre su “Doctrina de la Guerra Irregular”, que incluye la infiltración, la desestabilización y la contrainsurgencia, como lo

muestra la intervención de los EE UU en los procesos de Libia, Egipto y Siria, amén de su histórica alianza con Israel.

Como complemento de su despliegue armado en la península arábiga, los EE.UU. han tapizado de bases militares el cuerno de África y el África subsahariana, no sólo para rodear el Golfo Pérsico, sino también para neutralizar la intensa presencia de China en ese continente. Y su estrategia mantiene la distinción entre guerras de alta, mediana y baja intensidad. Las guerras de baja intensidad no infringen “daños menores”, como parecería sugerir el término. Y, si bien no implican el esfuerzo militar directo de los EE UU, importan sí, una intervención “inteligente”, que se traduce en campañas mediáticas de demonización, conflictos entre países vecinos y, obviamente, el alto espionaje. De aquí que en la actualidad, personajes como Julian Assange o Edward Snowden se hayan convertido en sus enemigos más peligrosos.

América Latina no es ajena a esta realidad. Lo demuestra la participación directa del Departamento de Estado en golpes fallidos como el de Venezuela en 2002 o el de Bolivia en 2008, o indirecta como en el efectivo golpe en Honduras en 2009, o su inmediato reconocimiento a un gobierno ilegítimo como el que derrocó a Fernando Lugo en Paraguay. El desplazamiento de Lugo, el alejamiento de Paraguay del Mercosur y la posterior elección de Horacio Cartes como presidente acarrearón, entre otras consecuencias, un mayor control militar estadounidense en territorio paraguayo, y el cambio de la Ley de Defensa de ese país, otorgando amplias facultades al presidente y a las fuerzas armadas en la lucha antiterrorista. Conocemos muy bien el significado que tiene un cambio de ese tenor para las democracias de la región. Todo esto, en el marco de la restauración de la IV flota militar, operativa en toda América Latina y el Caribe.

El otro plano de la ofensiva de los EE.UU. sobre la región es la Alianza del Pacífico, impulsada en la superficie por los presidentes de México y Colombia pero, en el fondo, ampliamente respaldada por el Departamento de Estado. Algunos analistas del campo progresista han advertido que esta alianza no debe ser tomada necesariamente como opositora al Mercosur y la Unasur sino que, por el contrario, debemos relacionarnos con ella como una importante vía de

acceso al espacio comercial más dinámico del planeta. Conceptualmente, es correcto valorar la importancia del área Asia-Pacífico para nuestro desarrollo. Pero, si lo hiciéramos de la mano de un modelo de integración que prioriza la lisa y llana apertura comercial, como propone la Alianza del Pacífico, la relación con Asia –de ser un factor de desarrollo– mudaría a debilitar el despliegue industrial, la generación de empleo y la inclusión social, que tan trabajosamente estamos intentando reconstruir.

Si bien hay una distancia grande entre una estrategia de dominación militar y una comercial, sería ingenuo omitir la conexión entre ambas. En este sentido, el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York contra la reestructuración de la deuda externa argentina, en defensa de los más extorsivos grupos financieros internacionales, guarda una estrecha relación con el sostenimiento de la convulsión en Medio Oriente. Ambos esquemas tributan, desde perspectivas distintas pero convergentes, a sostener la estructura económico-financiera llamada a compensar el déficit fiscal y comercial de los EE.UU. a expensas de sus ganancias en el exterior, sean estas por vía de los fondos buitres como del comercio de armamento.

Desde San Petersburgo, nuestra presidenta expresó: “No hay nada más proteccionista que los países desarrollados, hay un ejercicio de cinismo en esto del proteccionismo. Los países desarrollados se llenan la boca hablando de libre comercio, pero luego hacen lo contrario” y, congruentemente con ello, el documento final del G-20 condena a las “guaridas fiscales”. Días antes, la Unasur sostuvo un firme rechazo a la intervención militar en Siria. Lo cual constituye toda una definición política y estratégica que identifica a los países de América Latina con una nueva agenda, muy diferente a la del poder hegemónico mundial. No sólo en la cuestión del endeudamiento, sino como llamado a un nuevo modo de organización de la convivencia, basado en la paz, el respeto por los Derechos Humanos, la inclusión social, la generación de empleo y la inversión productiva. Muy lejos del paradigma estrictamente financiero que dominó a la Humanidad durante las últimas décadas, sometiéndola a crisis recurrentes con gravísimas consecuencias sociales.

Dominación y emancipación

Revista digital "La Tecla Eñe", n° 60, octubre 2013.

La denominada relación centro-periferia es un modo de organización de la sociedad a nivel mundial.

Un planeta en el que un solo país, con menos del 4 % de la población mundial, consume casi el 30 % de la energía que se produce; un planeta en el que el presupuesto de defensa de ese mismo país es superior a la suma de los presupuestos de defensa de los restantes estados reconocidos por la ONU; un planeta en el que el 0,1 % de la población mundial concentra el 82 % del total de operaciones financieras, es un planeta donde existe claramente un centro de poder y una vasta periferia.

La periferia es el subdesarrollo, la pobreza. De los 7.000 millones de personas que habitan el mundo, más de 4.000 millones viven por debajo de la línea de pobreza. Un mil doscientos millones de personas padecen hambre en un mundo con un potencial para alimentar a tres veces su población. Sin embargo, es tal nuestro grado de colonización cultural, que hablamos de crisis internacional a partir de la caída de una inversora como Lehman Brothers, y no cuando hay un Ser Humano con hambre. Pocas palabras cambian tanto su sentido entre su etimología y la realidad como la palabra 'globalización', que remite a totalidad, cuando en verdad se posa en un mundo fragmentado, y priva a la inmensa mayoría de sus habitantes, de los adelantos tecnológicos que la definen como tal.

El mundo se encuentra, pues, bajo un claro sistema de dominación. Se trata de un sistema que no se expresa sólo en el desequilibrio de poder entre un país y los restantes, sino entre un grupo de personas de extrema riqueza frente a la extrema pobreza de millones de Seres Humanos. Y entre un puñado de empresas, bancos y conglomerados económicos capaces de mover inmensas palancas de poder frente a la sencillez del estilo de vida de millones de hombres y mujeres de a pie.

El actual sistema de acumulación capitalista desenfrenado, basado en el estímulo al consumismo, al acopio individual de mercancías por sobre cualquier

otro criterio y la cultura del desperdicio, está haciendo notar su injusticia en sectores que tradicionalmente formaban parte del centro, y no de la periferia. No es otra cosa que eso la crisis europea. El sistema tiende a auto-replicarse de manera exponencial, con un centro cada vez más reducido, exclusivo, y lejano de una periferia cada vez más expandida y condenada.

El planeta posee capital y tecnología acordes para proveer de sus necesidades básicas al conjunto de su población. El hambre y la pobreza no son, pues, consecuencia de la insuficiencia de recursos, sino de la pésima distribución de los mismos. Y eso es materia y responsabilidad de la política. Al tener en sus manos esta posibilidad, y no utilizarla, el hambre y la pobreza se convierten, lisa y llanamente, en un crimen perpetrado por quienes administran el poder mundial. Un verdadero genocidio, sólo que sustanciado con armas no convencionales.

Toda política puntual tendiente a paliar o resolver angustias y necesidades humanas y sociales debe ser bien recibida. Pero, por ser la relación centro-periferia un verdadero sistema de dominación, resulta imposible contrarrestarlo desde un puñado de políticas, sino que necesitamos construir un modo diferente de organización de nuestras sociedades, un sistema guiado por valores de emancipación alternativo al sistema de dominación.

En definitiva, la relación centro-periferia, esa esencia de desigualdad y distancia colosal entre los poderosos y los débiles, no reside únicamente a nivel de los más ricos de la Tierra o de la relación entre los Estados, sino que se reproduce al interior de los mismos, entre ciudades poderosas y pueblos marginales, en el interior mismo de las ciudades, y entre personas que, por razones de poder económico, calidad de la educación recibida o acceso a la información, logran situarse en una posición de dominio sobre otros Seres Humanos. No me refiero a diferencias atribuibles a las capacidades personales, sino al ensanche de la brecha social abierta por sucesivas malas administraciones políticas.

América Latina, o al menos los gobiernos populares de la mayoría de sus países, está cumpliendo un rol muy importante de ruptura con este modelo de relación. Cuando los Presidentes latinoamericanos se plantaron frente al ALCA en la cumbre hemisférica de Mar del Plata, en 2005, dieron un paso

trascendental en el quiebre de esa relación ancestral e intrínsecamente injusta entre el centro y la periferia. Cuando un país como el nuestro tomó la decisión soberana de apartar a los gurús de las finanzas internacionales del monitoreo permanente que hacían de nuestra economía semana tras semana, desde la oficina que estaban habituados a ocupar en la propia casa de gobierno y sus dependencias en los distintos ministerios, dio también un paso trascendental en ese sentido. Y sumó, con el mismo objetivo, la recuperación de los fondos previsionales, la reforma del Banco Central, la regulación del Mercado de Valores, la resistencia a la presión externa de los fondos buitres e interna de los devaluadores.

Pero, como la relación centro-periferia se repite en las relaciones interpersonales, su transición hacia un modelo de sociedad de iguales también se dirime en el campo de los derechos. Y es en ese plano donde adquieren una importancia vital medidas como el matrimonio igualitario y la identidad de género, los derechos laborales, sindicales y jubilatorios de las llamadas amas de casa, de las y los trabajadores rurales y de las y los trabajadores de casas particulares, la simplificación de los trámites para obtener el documento, el plan Fines, el programa Patria Grande para nuestras hermanas y hermanos de la región, el programa “Conectar Igualdad”, la ley de fertilización asistida y tantos otros. Y también la visibilización de ese sujeto tan importante e históricamente marginado que son los pueblos originarios, que vienen a cotejar con nuestras creencias occidentales y colonizadas su concepción de la naturaleza, del trabajo, en fin; que vienen a legitimar su cultura milenaria.

En el plano regional, en el que necesariamente hay que analizar este proceso, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que encabezan el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera, se pone al frente del llamado “Giro descolonial”, que intenta desprenderse de las categorías de pensamiento que naturalizaron la colonialidad del poder (político y económico), del saber (epistémico, filosófico, lingüístico y científico) y del ser (subjetividad, sexualidad, roles de género, hasta el propio porte y talla personales), y marchar hacia un paradigma diverso de la visión eurocéntrica del mundo que

interrumpió todas nuestras historias locales. No en vano, en 1775, cuando se creaba el virreinato del Río de la Plata y se gestaba el pensamiento emancipador de esta zona del continente, Emmanuel Kant señalaba que “el pueblo de los americanos no es susceptible de ninguna forma de civilización. No se preocupan de nada y son perezosos... incapaces de gobernarse, están condenados a la extinción. Los aborígenes americanos son una raza débil en proceso de desaparición. Sus rudimentarias civilizaciones tenían que desaparecer necesariamente a la llegada de la incomparable civilización europea. Su cultura era de calidad inferior, siguieron siendo salvajes... A los europeos les tocará hacer florecer una nueva civilización en las tierras conquistadas”.

En términos de ruptura con esa dominación histórica, la nueva Constitución boliviana no sólo plantea la reforma agraria y el cambio en la ecuación de la renta de los hidrocarburos en favor del Estado y del pueblo, sino que también reconoce modalidades de ‘poder popular’ y de propiedad, diversos de la propiedad privada liberal, instituye la ‘educación descolonizadora’ y la ‘sencillez administrativa’, e incluso reconoce la existencia de un sistema de justicia propio de las comunidades indígenas en coexistencia con el clásico sistema estatal. En términos similares se pronuncian la Constitución de Ecuador y el proyecto de Constitución de Venezuela.

La consolidación de estas políticas y su transformación en nuevos paradigmas de nuestra organización social debe ser la alternativa al sistema de dominación que se expresa a través de la histórica relación centro-periferia. Y debe serlo también desde un sistema. Desde un sistema de emancipación que configure una comunidad de iguales y redefina la propia idea de felicidad desde una nueva forma de convivencia no basada en el desenfreno por el lucro. Y ello necesita fuentes de financiamiento. Es por eso que América del Sur, que protagoniza un tiempo histórico sin precedentes en cuanto a sus procesos de inclusión social y autonomía financiera, no debe demorar la concreción del Banco del Sur, de su moneda común de intercambio (que no se compara con el euro) y la repatriación de sus reservas internacionales para conformar un fondo capaz de solventar cambios profundos en nuestras matrices productivas. En

este sentido, resulta indispensable un más intenso compromiso de Brasil. Y en el plano interno de nuestras sociedades, se requiere poner en marcha las instituciones de la economía social, basadas en la idea del precio justo y el comercio responsable. Y a partir de ellas, las formas de desarrollo local, el presupuesto participativo, las fábricas recuperadas, la agricultura familiar, el microcrédito.

A partir de comienzos del milenio, la ocupación del Estado por un nuevo perfil de gobernantes implica un cambio en el significado mismo del poder estatal. De la clásica idea de poder estatal como dominación y disciplinamiento, se pasa a la idea de transferencia de poder a la comunidad, de empoderamiento social, como forma de dotar a cada persona de los instrumentos fundamentales para construir su proyecto autónomo de vida y desplegar sus deseos, siempre desde la idea de su pertenencia a un colectivo social.

El centro pretendió encarnar históricamente una suerte de gobierno de las almas, un aplanamiento cultural que centró la idea de felicidad en el consumo y la hegemonía del capital, castigando toda alternativa a través de su salvajismo justiciero. Equiparar sus niveles de desarrollo con los de los grandes centros de poder no debe ser el desafío de la periferia, por otra parte irrealizable. Sería, más bien, la ilusión detrás de la cual seguiría atrapada en el sistema. Si un poblado pobre de África o de América Latina sólo procurara alcanzar el confort de Vancouver o de Copenhague, harían falta cinco planetas Tierra para obtener la energía necesaria. Lo que se impone, por lo tanto, no es el frenesí por ascender a los niveles del centro, sino proponer a la Humanidad un nuevo paradigma civilizatorio, basado más en la felicidad que en la riqueza. No se trata de poner un techo al desarrollo, sino de otro modelo de desarrollo. Aunque admito que es a futuro y sale de los moldes de la cultura dominante, lo que se propone no es una cuestión lírica, sino práctica. Seguir atados a la presente lógica del capitalismo excluye cada vez a más personas; a tal punto avanza la polarización social a que lleva el modelo vigente, que ya no conforma ni siquiera a los europeos -que supieron gozar del Estado de Bienestar edificado sobre la pobreza del Sur- y sume en la pobreza al 12 % de los estadounidenses.

La alternativa emancipatoria, descolonial, no es, pues, tan solo un ramillete de medidas políticas. Debe constituir todo un sistema nuevo de organización de la sociedad, apoyado en nuevas raíces conceptuales. Grandes líneas de alta política regional, un campo de ampliación de derechos y un nuevo tipo de relaciones interpersonales, una nueva concepción de lo que significa ocupar el poder del Estado como transferencia democrática de poder a la comunidad, las instituciones de la economía social y el financiamiento autónomo y genuino para sostener lo anterior. En definitiva, un nuevo sistema de emancipación, frente a la dominación, también sistémica, que nos ha sometido durante siglos, y continúa sometiendo a áreas cada vez más extendidas del planeta.

Palestina: crónica del apartheid

Escrito junto a María Elena Chieno, Leonardo Grosso,

Cristina Regazzoli, y Adela Segarra

Página 12, 25.11.13

El 15 de noviembre de 1988 el pueblo palestino declaró su independencia, y el 11 de noviembre se cumplieron nueve años de lo que hoy está comprobado que fue el asesinato de su líder nacional, fundador de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y primer presidente, Yasser Arafat. Con motivo de esas efemérides, la Autoridad Nacional Palestina organizó diversas actividades a las que fuimos invitados como miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con ese Estado, junto a otras delegaciones políticas y sociales de diversos países.

En 1947, con los acuerdos que dieron origen al Estado de Israel, se estableció el derecho del pueblo palestino a tener su propio territorio y formar allí un Estado soberano. El no reconocimiento de ese derecho a lo largo del tiempo dio origen a la creación de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) en 1964. Tres años después tuvo lugar la “Guerra de los Seis Días”, en la cual Israel ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania, asignadas a Palestina por su

pertenencia desde tiempos inmemoriales. Y, desde entonces, no deja de abusar de la fuerza derivada de su condición de ocupante.

El conflicto atravesó diversas etapas de violencia, que incluyen la batalla de Karameh, el Septiembre Negro de 1969, los bombardeos a los campamentos palestinos en el Líbano, Sabra y Chatila, la primera y segunda Intifada, entre otras. Hasta que, a partir de los años '90, los cambios en la realidad internacional, pero fundamentalmente la vocación de paz de los líderes de gobierno de ambos estados en litigio, Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, condujeron las negociaciones iniciadas en Madrid y concluidas al cabo de tres años en los Acuerdos de Oslo.

Una vez más, los acuerdos no fueron cumplidos. En 1995, Yitzhak Rabin fue asesinado a manos de un estudiante judío y, justamente en estos días, se han conocido las pericias internacionales que determinan la muerte por envenenamiento de Arafat. ¡Qué sugestivo! Los dos líderes de los acuerdos de paz –ambos Premio Nobel– asesinados, siendo la principal sospechosa la parte que precisamente ha incumplido los acuerdos, y que en base a ello se beneficia del statu quo que confirma su condición de ocupante.

En este marco histórico-político, los palestinos y las palestinas de carne y hueso sufren una discriminación humillante. A nuestros ojos, los 800 km del muro que segrega a Palestina nos retrotraen a una etapa del mundo que pareciera superada, comparable, paradójicamente, con el muro construido por los EE.UU. en su frontera con México. Pero eso ni siquiera implica la tranquilidad para quienes habitan del lado palestino, por cuanto Israel alienta, con incentivos de todo tipo, la construcción de decenas de miles de asentamientos habitacionales en pleno territorio correspondiente a Palestina, para lo cual lleva a cabo campañas de atracción de judíos alrededor del mundo. Los denominados “colonos” tienen derecho a no trabajar desde el propio momento en que se asientan, por el solo hecho de hacerlo. Están eximidos de impuestos y reciben un estímulo económico por mayor cantidad de hijos, por cuanto lo que el Estado israelí pretende es consolidar su ocupación. Inclusive, casi la mitad de los asentamientos permanecen vacíos, cumpliendo la sola función de ocupar el territorio. Israel manipula a su antojo los “puntos de control”.

En el paisaje se reitera la presencia de carreteras, calles y barrios por donde los palestinos no pueden transitar, además de tener que comprar a Israel la poca agua potable disponible. Cada palestino dispone de alrededor de un cuarto del agua, mientras que los israelíes poseen libre disponibilidad del bien. Eso les impide, además, el cultivo del suelo y la manutención del ganado. Y está duramente controlada la importación de insumos para una producción autónoma. Todo esto sin entrar en detalles sobre el apartheid que sufren los niños y niñas palestinos, o la situación de los numerosos campos de refugiados.

Esto torna la situación de un pueblo de ciudadanos en una comunidad de súbditos, de una sociedad próspera en una masa empobrecida. Sin embargo, lejos de dejarse ganar por el resentimiento, Palestina persevera en su camino hacia los valores universales de la paz, la libertad, la igualdad y la justicia. Y continúa el ejemplo de Gandhi, Luther King y Mandela. Y no ha perdido la alegría.

Desde 2010, el gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, con ratificación del Parlamento, reconoce al Estado Palestino, del mismo modo que la mayoría de nuestros hermanos latinoamericanos. Con el voto y la iniciativa de Argentina, Brasil y muchos otros países, la última Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría dicho reconocimiento. No obstante, Palestina no ha conseguido pasar del status de Estado observador No Miembro –con derecho a los territorios que poseía antes de la ocupación de 1967– debido al veto de los EE.UU. en el Consejo de Seguridad.

Palestina es, como antes Egipto, Líbano, Irak, recientemente Libia, Túnez, Yemen y otra vez Egipto y Siria, un territorio en litigio de Medio Oriente, cuyos responsables han estado y están tanto dentro como fuera de la región. En Medio Oriente confluyen al menos tres situaciones que impulsan la intervención imperialista y la dilatación del conflicto de potencias ajenas a la región, pero cuyos intereses estratégicos se ven favorecidos por la dilatación del mismo. Por un lado, la necesidad de hidrocarburos en un mundo en que se tornan escasos, y el hecho de que Medio Oriente constituye el paso obligado hacia los países centrales. Por otro lado, que el mundo árabe es el que ofrece más resistencia a la imposición forzosa de las pautas culturales –y con

éstas, los capitales financieros– de Occidente. Y por último, la necesidad de sostener la industria y el comercio de armamentos, la más poderosa industria mundial en términos de circulación de dinero, y el motor de las industrias derivadas en los países centrales.

En pleno siglo XXI, el mundo no puede permanecer indiferente a una situación de apartheid semejante a la que Sudáfrica pudo quebrar dos décadas atrás, para constituir trabajosamente un sistema de cohabitación y desarrollo pacíficos. Si la reticencia de algunos países que aún no se han pronunciado en favor de la soberanía de Palestina es el temor al poder financiero de las potencias que sostienen la ocupación, es una señal de que aún subyace en el mundo la subordinación de valores fundamentales de civilización al economicismo. Y habla, a las claras, de la deuda moral de una parte importante de la Humanidad, y de la necesidad de cambios muy profundos aún pendientes.

Por estas razones, por todos conocidas, más el relato de las experiencias de los distintos grupos de legisladores argentinos que hemos visitado Palestina en diversas oportunidades, solicitamos a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación su solidaridad, comprensión y acompañamiento en las medidas que nuestro país adopta en pos de una pronta resolución de paz y obtención de plenos derechos para el pueblo palestino.

El desafío es nuestro

Tiempo Argentino, 05.03.14

Hugo Chávez conocía perfectamente la dimensión mundial de la disputa que envuelve a su país, y al conjunto de América Latina. Sabía que no es un mero litigio entre partidos, sino que debía pulsar por la renta estratégica. Para Venezuela, las mayores reservas mundiales de petróleo de explotación convencional.

El sistema tradicional de partidos había sido funcional a las multinacionales y su pacto con los EE.UU. Por eso, Chávez, luego del ‘Caracazo’ del que se cumplen 25 años y de su consiguiente estadía en prisión, formó una nueva

coalición política y social, y reformó la Constitución, incorporando los nuevos derechos, y forjando nuevas estructuras de propiedad social y de organización y poder popular.

Hugo Chávez sabía perfectamente que, tal como estaba la Venezuela tradicional, su petróleo y un pueblo pasivo servían a un sistema de acumulación y de poder que demanda el 30% de la energía del planeta para sostener el consumo de un pueblo que no alcanza al 4% de la población mundial. Chávez sabía que el poder nunca aceptó pacíficamente la soberanía de los países históricamente dependientes.

El despliegue militar de la OTAN (de la que alguna vez fuimos ‘aliados estratégicos’) en Medio Oriente, la invención de la denominada ‘primavera árabe’ (que no fue otra cosa que financiar y entregar armas, recursos y medios de comunicación a la oposición desde el exterior y sostener sicarios para desestabilizar a los gobiernos soberanos del Oriente próximo) y el actual proceso de Ucrania, principal proveedor de gas de la Unión Europea, forman parte del mismo conflicto, a escala planetaria, que involucra a Venezuela, y con ella a toda América Latina. Y Hugo Chávez sabía perfectamente que la respuesta a tamaña disputa jamás podría ser dada por un país en términos individuales. Ni siquiera por varios países, por más atrevidos que fueran, sin una misma visión estratégica y sin políticas macroeconómicas comunes, y sin organizar y movilizar a sus pueblos.

Hugo Chávez sabía que había que rechazar el ALCA, crear un sistema regional de decisiones prescindente del tutelaje histórico de EE.UU., crear una empresa regional como Petrocaribe, ayudar financieramente a la Argentina en los tiempos de mayor ahogo. Sabía que tenía que convencer incluso a los pueblos angloparlantes del Caribe de que la causa de Malvinas era también su causa. Sabía que había que crear y financiar el Banco del Sur, desarrollar una moneda de intercambio como el sucre, que ahorrara divisas en el comercio regional para cuidar esos dólares y destinarlos a obras de infraestructura.

Chávez, Lula y Néstor Kirchner lo sabían. Pero quiso el destino que ya no desempeñen el mismo rol. Y más grave aún, dos de ellos han partido físicamente.

Eso ha envalentonado al poder y actúa en consecuencia. Pero ya no se trata sólo de saber cómo actúan las fuerzas desestabilizadoras, sino de cómo debemos actuar nosotros frente a ellas. El desafío está de nuestro lado. Quienes han tomado sus lugares también tienen muy en claro cuáles son las estrategias del Imperialismo respecto de nuestra región y de otros pueblos del mundo. Lo que debe profundizarse en esta etapa, pese a la ausencia de estos grandes líderes, es el despliegue de todas las asignaturas pendientes de ‘nuestra’ estrategia respecto del imperialismo. Es la mejor manera, más allá de las palabras de homenaje, de recoger y llevar adelante el legado de Hugo Chávez.

Contradicciones del Norte

Página 12, 29.03.14

El 17 de marzo recibimos en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados a una delegación de parlamentarios británicos, integrantes de la Comisión de Asuntos Galeses. La conversación fue amable, coincidimos en nominar a la Argentina como un país de paz, respeto y trabajo, y se hizo referencia a nuestra buena relación con los pobladores de origen galés que se asentaron en nuestro país, en especial en la Patagonia.

Durante la breve reunión se les hizo entrega de la Declaración de Ushuaia, donde por unanimidad, toda la política argentina reafirma nuestra soberanía sobre las islas y condena el colonialismo y la militarización de la zona.

Pero lo que deseo resaltar del encuentro es el tramo referido a las “drogas” (drugs), a raíz de la inquietud de una parlamentaria galesa. Su intervención denotó preocupación por los numerosos consumidores de su país, y nos interrogó sobre la posibilidad de aplicar “políticas comunes”. Sin embargo, el tema tiene aristas más específicas y complejas. Los diputados presentes del Frente para la Victoria debimos separar dos aspectos. Uno, la prevención y atención de los problemas de salud ocasionados por el consumo, que afectan principalmente a poblaciones jóvenes, ya sean de capas altas, medias o vulnerables de la

sociedad. El otro, que toda política resultará –aunque necesaria– insuficiente en la medida en que no se afecte el núcleo del problema, que es la rentabilidad del negocio internacional del narcotráfico, uno de los ilícitos más lucrativos del planeta, y que, por sus características, se emparenta con otros como el tráfico de armas, el terrorismo y el lavado de dinero.

Ambos planos, la prevención y el ataque al narcotráfico, necesitan un Estado potente en su entramado institucional y en la eficacia de sus políticas públicas. Y eso requiere, ineludiblemente, de financiamiento. En palabras llanas, fortalecer el Estado, fortalecer los Estados de la región.

Por eso resulta incongruente que algunas usinas provenientes de los países centrales expresen preocupación por el problema de las “drogas” (drugs) y reclamen políticas públicas, al mismo tiempo que aplican políticas y mantienen alianzas financieras tendientes a debilitar nuestros Estados. El apoyo, explícito o tácito, a los fondos buitres, la extorsión del sistema financiero internacional, el impulso de acuerdos de libre comercio que terminarían perjudicando a nuestra autonomía industrial como los que pretende la Unión Europea, las actitudes especulativas de bancos y empresas de capital británico como Shell, y otras rémoras del viejo colonialismo, constituyen una muestra de esa contradicción.

En definitiva, debemos ser muy firmes en la preocupación, condena y batalla contra la inserción del mundo de la droga y el narcotráfico en nuestra región. Pero a su vez, implacables en denunciar que la rentabilidad del negocio se multiplica al ingresar los productos a los principales mercados de consumo, que están precisamente en el Norte. Como sostuvimos en la reunión, si pretenden acciones estatales fuertes, no pueden sostener, al mismo tiempo, políticas económicas y financieras que contribuyen a debilitar la capacidad de financiamiento de nuestros Estados.

Hacer de una dificultad una epopeya

Página12, 19.06.14

Para los neoliberales, la economía es una ciencia exacta, fría, descarnada. En mi visión, ninguna ciencia puede despojarse de su perspectiva humana, de sus consecuencias sobre las personas reales, sobre los trabajadores, sobre las familias, sobre los niños. Para los primeros, las expectativas se dirimen en el frenesí de las pizarras electrónicas de los mercados. Para nosotros, cuentan la esperanza o la desesperanza de los pueblos.

El reciente fallo de la Corte estadounidense tiene consecuencias económicas, pero se trata de un hecho eminentemente político. Es un fallo aleccionador, que busca el escarmiento histórico de la Argentina, y a través de la Argentina, de todos aquellos que intenten un modelo autónomo. La experiencia argentina desmonta el mito fundador del sistema financiero internacional, según el cual no hay posibilidad de desarrollo por fuera del mismo. Nuestro país no sólo subsistió, sino que creció a tasas exponenciales por fuera del sistema. Inclusive cumplió con los pagos de una deuda que no había contraído, y no lo hizo con préstamos que implicaran mayor endeudamiento, sino con recursos propios, producto de un modelo de inclusión, empleo, consumo popular, mercado interno. Una heterodoxia que el sistema no está dispuesto a tolerar.

Y aquí es donde entra en juego la esperanza. Ellos juegan al desaliento porque, a la visión apocalíptica que augura el ahogo financiero, y detrás de ella, la “única salida posible” para el pensamiento único: regresar al FMI. Del otro lado, del nuestro, la apuesta a la dignidad. No todo se circunscribe a una orden judicial comprometida con intereses concretos, sucios, usurarios. En 2001, el Congreso argentino emitió una formalidad jurídica cuando sancionó la “ley de intangibilidad de los depósitos”, pero la realidad de la economía estaba en otro lado. Hoy estamos ante una situación inversa. Hay un fallo que conduce al default, pero hay, a su vez, una realidad económica distinta. Nuestro país tiene, por un lado, voluntad de pago y, por otro, recursos para hacerlo. Es decir, la economía muestra una consistencia que no remite al default. Y los acreedores normales –no me refiero a los acreedores criminales– lo saben.

Una vez afrontados los pasos técnicos que deban darse, la Argentina habrá sorteado el último escollo financiero externo derivado de la crisis del 2001. Y a partir de ello, continuar con un proceso promisorio de desarrollo, fundado en el autoabastecimiento de energía, la recuperación de los ferrocarriles, el desarrollo industrial y la agregación de valor a nuestra producción agroalimentaria.

La presente dificultad económica debe transformarse en una causa de la unidad nacional que congregue a los poderes institucionales, organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas. Como lo sostenía Arturo Jauretche, el poder cabalga sobre el desaliento y domina a los pueblos, mientras que sobre la esperanza caminan los pueblos para doblegar al poder. Ese es el desafío: transformar la presente dificultad económica en una gran epopeya que, en lugar de dañarnos moralmente, se constituya en una causa nacional que oriente el futuro.

Fondos Buitre (I)

La disputa entre dos modelos de gobernanza global

Tiempo Argentino, 26.07.14

El objetivo de este trabajo es intentar encontrar una racionalidad al proceso de los fondos-buitre, dado que, por momentos, este parece reducirse a un combate contra una gran locura. A mi juicio, en cambio, se trata de un combate de una racionalidad contra otra. Una disputa entre dos modelos de gobernanza mundial en la cual, por diversas razones, le toca a la Argentina un rol principal. Una disputa sobre los parámetros que van a orientar al mundo, partiendo de un marco de condiciones generales, una de excedencia, las otras dos, de escasez.

La primera, una abundancia de recursos financieros que ha alcanzado a un límite de concentración irrespirable, a tal punto que ha llegado a devorarse a sus propios socios, esto es, parte importante de Europa y palpable también en los crecientes niveles de desigualdad en la sociedad estadounidense.

Esto lleva a la segunda situación, que es la disminución de los socios políticos con que históricamente ha contado el poder financiero para sostener su

pulsión por la concentración. A las áreas aludidas se agrega hoy América Latina, otrora funcional a sus intereses bajo el peso de gobiernos complacientes, y la aparición en escena de nuevos actores globales como una China en expansión y una Rusia que recupera su rol en el balance de poder mundial.

La tercera situación está dada por la escasez de recursos energéticos convencionales. O, más bien, por la necesidad del poder concentrado de seguir asegurándose la provisión de más del 30% de la energía del planeta para sostener los altísimos niveles de vida de sólo el 4% de la población mundial. Todo esto conlleva una verdadera disputa entre quienes históricamente hemos ostentado la posesión formal de estos recursos, es decir, los pueblos a través de sus Estados soberanos, y del otro lado los grandes conglomerados del capital financiero trasnacionalizado. Una disputa nada sencilla, desde el momento que el capital privado concentra un volumen de recursos decenas de veces superior a los recursos públicos que están en posesión de los bancos centrales de los Estados. lo cual indica claramente el desbalance en cuanto a la incidencia de cada una de esas esferas en las decisiones de política financiera. En otras palabras, la subordinación de la política al mercado.

Otra llamativa asimetría surge de comparar el volumen de intercambio de los bienes y servicios que las personas comunes consumen diariamente, con la masa de recursos varias veces superior que explica el comercio de armas, el narcotráfico, el petróleo, los medicamentos; un intercambio a veces lícito, a veces ilícito, donde las fronteras entre lo uno y lo otro se tornan por demás difusas. Esto es lo que nuestra presidenta ha titulado reiteradamente como ‘anarco-capitalismo financiero internacional’, y que lleva a Jorge Alemán a catalogar como ‘la globalización, el golpe de Estado financiero’. Insisto, este poder económico tan dispar respecto del poder político de los Estados, se refleja, por lo tanto, en la capacidad de incidir sobre las diversas políticas, sobre las grandes cadenas de medios, sobre sectores de la justicia de los países y sobre los grandes estudios privados de abogados.

No es casual que el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum haya sido reelecto como presidente del Global Editors Network (que, entre otros, reúne

al New York Times, El País de España y el grupo Clarín, La Nación y Perfil), para concentrar la información externa sobre la Argentina, deteriorar nuestra imagen política y económica, y de ese modo, por ejemplo, desalentar inversiones. Las notas que, día a día, dan cuenta de un posible default argentino en el diario que Kirschbaum dirige, persiguen además, la finalidad de no dejar otro camino que el acuerdo con los fondos-buitre, ya sea por vía de re-vincular a nuestro país con el FMI, o bien de ejecutar nuevamente nuestros activos máspreciados, léase nuestros recursos naturales.

En cuanto a la Corte de los EE.UU. que desestimó el reclamo argentino de reconocer la histórica doctrina de las deudas soberanas de los Estados, tanto Ted Olson como John Glover Roberts, provienen de bufetes ligados a los mercados de capitales que han litigado reiteradamente contra países latinoamericanos. En los últimos tiempos, por ejemplo, representando los intereses de Chevron en Ecuador. El primero de ellos, incluso, fue asesor del ex presidente Ronald Reagan, y argumentó ante la corte de Florida en contra de Al Gore, durante el recuento de votos que coronó a George W. Bush a fines de 2000. El propio Daniel Pollack, designado mediador por el juez Griesa, es también un hombre de Wall Street.

A la Argentina le toca, una vez más, un papel fundamental. Así como en los setenta hubo dictaduras en el 80% de la región, pero en Argentina se presentó con un salvajismo particular, y en los noventa hubo Consenso de Washington en toda la región pero en la Argentina se aplicó con una virulencia especial, tal vez ahora también nos toque un papel destacado, pero esta vez por razones positivas.

Está en litigio la vigencia de los Estados nacionales, del derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes. Del otro lado, los conglomerados privados que se proponen manejar dichos recursos al margen de la soberanía estatal, tal como se infiere del borrador de acuerdo bilateral entre los EE UU y la Unión Europea (Trans-Atlantic Free Trade Agreement).

No se trata de un solo conflicto que nos permita pintar la mitad del mundo de un color y a la otra mitad del otro. Es más complejo. Coexisten varios conflictos superpuestos, no siempre del mismo nivel, y donde un mismo actor no

juega necesariamente siempre en defensa de un mismo espacio. No es un conflicto que podamos decir que se da estrictamente entre Estados determinados, aunque los núcleos de poder en disputa surjan predominantemente de algunos de esos Estados centrales.

Europa, por ejemplo, juega en un mismo equipo con los EE UU en la cuestión ucraniana. La primera, por el rol central que Ucrania desempeña en la provisión de su energía; los segundos, por su disputa geopolítica con Rusia. Pero, en otros aspectos no estamos ante la misma unidad de criterios. En la incipiente guerra de monedas que aparecía en el horizonte mundial un lustro atrás, y que proponía una revaluación del euro frente al dólar, los EE UU pusieron en crisis a la moneda europea. En lo que comunicaron a la opinión pública mundial como la 'primavera árabe', el capítulo libio trajo aparejado, con la destitución de Kadafi, la supremacía de las empresas petroleras por sobre la estatalidad que el líder había mantenido, lo que repuso al dólar como moneda de intercambio del petróleo libio para Europa, en detrimento del acuerdo que el gobierno de Kadafi había establecido para comercializarlo en la moneda europea.

La misma ruptura de la estatalidad en los países de Medio Oriente tuvo lugar en Egipto, donde se forzó la destitución de Hosni Mubarak y la realización de comicios, pero luego se promovió el golpe militar contra los Hermanos Musulmanes, que habían resultado vencedores. Y lo mismo trató de hacerse con la afortunadamente frustrada intervención militar a Siria, detenida, entre otras acciones, por la Asamblea General de la ONU, la firme posición del Vaticano bajo la conducción del Papa Francisco y el acuerdo de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, a partir de la reaparición de este último país en un rol protagónico para discutir el balance de poder mundial, que ya había insinuado con la recepción del arrepentido espía estadounidense Edward Snowden.

El agravamiento de la situación en Medio Oriente, que atesora un porcentaje vital de las reservas petroleras y gasíferas destinadas a los países centrales, está directamente relacionado con esta búsqueda de ruptura de lo estatal, de modo de hacerlo hocar ante las empresas globalizadas de armas y petróleo.

Las acciones de la organización EIIL (Estado Islámico en Irak y el Levante), así como el sospechoso asesinato de tres niños israelíes que diera lugar a los posteriores ataques a Gaza, adjudicados a sendos grupos radicalizados y terroristas, con mayor o menor vínculo con Al Queda, lejos de favorecer una reivindicación de los pueblos oprimidos, no hacen otra cosa que justificar y ser funcionales a la más violenta reacción de las tropas estadounidenses apostadas en la región y la de sus aliados militares, como Arabia Saudita y el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Fondos Buitre (II)

La disputa de mediados de los '70

Tiempo Argentino, 27.07.14

Si bien ha adquirido connotaciones actuales, esta disputa no es nueva en términos estructurales, por lo que intentaré un brevísimo racconto histórico.

Al repasar la historia de nuestro endeudamiento externo, nuestro ministro de Economía parte del período emancipatorio, y luego señala una marcada aceleración a partir de la última dictadura. Quisiera retrotraerme a ese momento histórico, porque lo que sucede en América Latina a mediados de los años setenta no es ajeno a todo un contexto mundial.

Entre la finalización de la II Guerra Mundial y mediados de los setenta, el mundo había generado un conjunto de bienes y servicios similar a los que había producido desde el origen de la cultura hasta ese momento. Es decir, en esos 30 años se había duplicado la riqueza del planeta. Y es precisamente ese excedente económico generado por el sistema económico mundial lo que se pone en disputa a mediados de los setenta. ¿Entre quiénes, entre cuáles sectores?

Muy resumidamente, describo a uno de esos sectores en disputa. A partir de 1947, con la emblemática independencia de la India –que desaloja al imperio británico del segundo país más poblado de la Tierra– se inicia el llamado proceso de “descolonización afro-asiática”. Esto es, el reconocimiento como

estados soberanos de la mayoría de las ex colonias de Asia y África, a través de fuertes luchas emancipadoras encarnadas por movimientos de liberación nacional, que perseguían objetivos éticos en términos de libertad e igualdad, y económicos, en pos del manejo de sus recursos, hasta entonces expoliados por las metrópolis.

Hacia fines de los años cincuenta, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II y promueve una serie de reformas a la liturgia del catolicismo, todas ellas con sentido popular. En 1959 triunfa la Revolución Cubana y se proyecta hacia toda América Latina, dando lugar a múltiples movimientos insurreccionales en pos de los valores del “Hombre Nuevo” proclamados por el Che Guevara. La conexión entre estos dos fenómenos da origen a la Teología de la Liberación y a una Iglesia comprometida con la pobreza, y en nuestro país al movimiento de curas del Tercer Mundo.

Unos años después se inicia el retiro estadounidense de Vietnam, junto a todo un movimiento cultural entre los jóvenes de los EE UU que se plasma en el rock, el pacifismo y diversas formas de protesta. En simultáneo, se da la lucha por los derechos de los afrodescendientes que, por caminos diversos, encarnan Malcolm X en el norte y Martin Luther King en el sur, detrás de un “sueño” igualitario. Hasta el propio boxeador Cassius Clay, luego Muhammad Ali, se convierte en un luchador de estas causas, renunciando a los 22 años a su título mundial por negarse a alistar las tropas que debían viajar a Vietnam.

En Europa, y de manera casi contemporánea, se produce el Mayo Francés y la Primavera de Praga. En definitiva, desde distintos horizontes surge una serie de movimientos sociales –mayoritariamente juveniles– con objetivos colectivos y solidarios, que perseguían valores muy diferentes a la exacerbación del individualismo y del materialismo que sobrevendría en los años noventa.

De un lado, estos movimientos sociales que, de haber prevalecido, hubieran dado al mundo a partir de los años setenta y a aquel excedente económico que mencionábamos, una impronta completamente distinta a la que tuvo. Del otro lado, el sector en disputa lo constituían los grupos más concentrados del capital financiero internacional, que fueron, en definitiva, los que ganaron la contienda.

En medio de todo esto tienen lugar dos hechos fundamentales. El primero, en 1971: la inconvertibilidad del dólar. El y segundo, en 1973, la crisis del petróleo.

En agosto de 1971 el presidente Nixon decretó la “inconvertibilidad del dólar”, es decir, en virtud del predominio del dólar como moneda internacional, desligó su cotización del respaldo en oro que tenía hasta ese momento, y la relacionó con una decisión autónoma de política monetaria de la Reserva Federal. El dólar tendría a partir de ese momento una valuación estrictamente financiera, dando inicio al proceso de financierización de la economía internacional cuyas consecuencias padecemos en nuestros días. Esto es, la realización de ganancias extraordinarias a partir de la transacción de derivados estrictamente financieros, con prescindencia del intercambio de bienes y servicios de la economía real. Junto a esta medida, se toma la decisión de multiplicar las plazas financieras en todo el hemisferio norte (EE UU, Europa y Japón), de modo de captar divisas a partir de las altas tasas de interés que se ofrecían.

En 1973 se desata la denominada “Crisis del Petróleo”. La OPPEP (Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo) decide aumentar intempestiva y significativamente el precio del barril, lo que impacta negativamente en las economías industriales. Estas necesitan morigerar los efectos del impacto, y se encaminan para ello a encontrar alternativas de desarrollo capaces de mantener la tasa de acumulación, pero con menor consumo de energía hidrocarbúrfera, lo que, en los hechos, aceleró el ritmo de la revolución tecnológica en ciernes.

Ahora bien: ¿quién financiaría esa revolución tecnológica, con miras a obtener nuevas formas de producción menos dependiente del combustible tradicional? Esas fuentes de financiamiento fueron dos. La primera fue lo que se denominó la etapa de los petro-dólares. Los dólares que recibían los países productores, todos ellos subdesarrollados, no se encaminaron a financiar el desarrollo de sus estados y sociedades, de sus propias tecnologías, de sus organizaciones sociales. Ellos prefirieron colocarlos en las plazas financieras del norte, a partir de los enormes márgenes de ganancia garantizados por las altas tasas de interés, desde aquel proceso de financierización que Richard Nixon

había establecido. En lugar de desplegar procesos nacionales autónomos de desarrollo, las empresas de los países emergentes, con la connivencia de sus gobiernos neocolonialistas, terminaron sosteniendo las innovaciones tecnológicas de las potencias, y ayudaron así a ampliar la brecha de la investigación, el conocimiento y la información.

Fondos Buitre (III) **Primera fase del ajuste estructural**

Tiempo Argentino, 28.07.14

Hacia finales de los 70, Margaret Thatcher asume la jefatura de gobierno en el Reino Unido, y Ronald Reagan hace lo propio en los EE UU, iniciando lo que se conoce como la revolución conservadora de los años '80 en el Norte, que tiene su correlato en la primera fase del ajuste estructural en los países subdesarrollados, particularmente en América Latina.

Aquella primera fase del ajuste estructural determinó, en países como el nuestro, la desarticulación del aparato productivo interno y su transferencia a los grandes grupos concentrados vinculados a matrices externas, gestando el proceso de concentración y extranjerización económica que aún padecemos. Y dejó sentadas las bases de la segunda fase. Dado que la estrategia de endeudamiento fue diseñada con toda la intencionalidad de que no fuera posible pagarlo, nos asfixiaron desde el punto de vista financiero, y a continuación de ello, ante la previsible incobrabilidad de las deudas, se abalanzaron sobre los bienes del Estado, en una especie de ejecución hipotecaria de las deudas soberanas. Eso fueron los '90 en la Argentina, con la correlativa transferencia de activos estratégicos como nuestro petróleo, nuestra energía, nuestras telecomunicaciones, nuestra aerolínea de bandera, y otros múltiples resortes indispensables para nuestro desarrollo.

Reagan termina derrotando al bloque socialista y estableciendo un sistema unipolar de poder, basado en la democracia política y la economía de mercado. Y aplica todo un programa de desregulación, privatizaciones, resignación de las

soberanías jurisdiccionales y otras medidas de reducción de las capacidades estatales del mundo subdesarrollado, conocido como el Consenso de Washington.

Segunda fase

A partir de esos momentos, la década de los noventa se presenta en términos de la política internacional de los EE UU con un rostro menos fundamentalista que el de su predecesor. Se trata del soft power de Bill Clinton frente a la dureza de Reagan, porque debía seducirse a los países recién integrados a la órbita capitalista respecto de los beneficios del nuevo sistema. La etapa de Clinton se inclina por el paradigma del libre comercio por sobre la agresión militar, y desde esa lógica se logran los acuerdos de Oslo entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, concluye la cruenta guerra religiosa de Irlanda y se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No se trata de buenos y malos, sino, más bien, de un imperialismo que fusila y otro que mata lentamente, y que en el caso de México construyó las maquilas de explotación, y no un muro contra los ilegales y decenas de miles de asesinados por el narcotráfico, como haría George Bush una década más tarde.

Concluida la era Clinton, los EE UU permanecen 59 días sin presidente, entre la jornada electoral de noviembre de 2000 y el fallo definitivo de la Corte de La Florida (otro fallo político), que pese a haber obtenido menos votos le otorga el triunfo a George Bush por sobre Al Gore, y restaura los rasgos más duros y sanguinarios del capitalismo financiero. El paradigma del libre comercio de la década anterior es relevado por el de los grupos financieros más concentrados, las empresas petroleras y el comercio de armas.

Disputa al interior del poder financiero

Ya en nuestros días, la posición de Barack Obama y de parte del gobierno de los EE UU (no olvidemos que hace menos de dos años el Tea Party tuvo al borde del default interno al gobierno demócrata), así como de otros organismos internacionales es una nueva muestra de la fragmentación del poder interno e internacional de esa potencia, y expresa de alguna manera la disputa de poder

al interior del sistema financiero en la que se enmarca la situación argentina, el fallo del juez Griesa y la decisión de la Corte estadounidense. Es decir, no se trata de un imperialismo ejercido por una nación sobre otra, sino de una disputa acerca de cuáles serán los rieles de poder sobre los cuales evolucionará el capitalismo internacional. De un lado, una porción del capital dispuesto a financiar proyectos de desarrollo encarnados a partir de cierta injerencia estatal, de cierta vigencia –cuanto menos formal y testimonial– del principio de soberanía, y del otro lado los grandes conglomerados, con políticas duras que agravan y lesionan severamente la soberanía estatal

Fondos Buitre (IV)

La dimensión planetaria del conflicto

Tiempo Argentino, 06.08.14

De un lado, una porción del capital dispuesto a financiar proyectos de desarrollo encarnados a partir de la injerencia estatal, y del otro lado los grandes conglomerados, con políticas duras que intentan destruir la estatalidad. ¿En miras de cuáles objetivos? En miras de sostener un modelo de acumulación que ha llevado a que las 85 fortunas personales más importantes del mundo concentren más recursos que los 3500 millones de personas, esto es, el 50% más pobre de la población mundial. Un modelo de acumulación, que, además, está en plena crisis productiva, y por lo tanto necesita trasladar a los países del Sur –una vez más– el costo de su crisis. Un modelo que si tuviera que ser dibujado en sendas láminas, haría coincidir con una similitud asombrosa las áreas con mayor presencia de yacimientos energéticos con aquellas áreas de mayor despliegue de bases militares de ese poder más duro que vincula lo financiero con las armas y el petróleo.

Un modelo que, a partir de su conexión directa e imprescindible con las grandes cadenas de medios internacionales, nos ha hablado de movimientos populares supuestamente libertarios, englobados en lo que bautizaron como “primaveras árabes” en lucha contra dictadores autoritarios, cuando en rea-

lidad se trataba de la lisa y llana contratación de sicarios y mercenarios para terminar con la estatalidad que controlaba los recursos energéticos de aquellos países, como Libia, Irak, Egipto, y recientemente Siria, Irán, Venezuela y Ucrania. Todos estos procesos de desestabilización están guiados por el mismo hilo conductor: la ruptura de los poderes estatales en pos del control privado de los recursos. De modo de asimilar a Medio Oriente y a América Latina a esa África olvidada, sin Estados, sumergida en disputas tribales mientras las empresas la expolian de sus recursos, y donde ha aparecido un nuevo actor económico que son las inversiones chinas.

Las decisiones que han tomado América Latina y la Argentina en particular

La situación argentina no es ajena a este marco internacional. El caso de los fondos buitres no se trata de una mera disputa entre un juez que está loco contra el resto de la humanidad que sí está en sus cabales. Es una disputa por cómo se va a desarrollar el mundo, quién va a usufructuar de los recursos naturales, si las soberanías estatal-populares o el capital privado transnacional.

A través de dictaduras adeptas o de gobiernos civiles serviles, América Latina había cumplido históricamente un rol funcional a los intereses foráneos implicados en esta disputa. En cambio, a partir de comienzos del siglo XXI, la eclosión social devenida de diversas crisis desatadas en la región, en convergencia con la aparición providencial de un puñado de líderes populares que supieron interpretar el hartazgo y la voluntad de cambio de sus pueblos, puso un corte histórico a esa relación complaciente con los poderes fácticos.

En noviembre de 2005 la región rehusó integrarse al ALCA, el proyecto estratégico de mayor envergadura que el gobierno de George Bush le tenía reservado, desacoplándose de manera sabia y anticipada al desplome del capitalismo mundial que sobrevendría tres años después. En la Argentina en particular, este proceso de autonomización financiera se completó con los dos tramos del canje de la deuda privada, la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y los recientes arreglos con el CIADI, Repsol y el

Club de París. Es decir, no sólo desendeudamiento sino autonomía del sistema financiero internacional, lo cual rompe con el mito fundador del sistema, que sostiene la inviabilidad de todo aquel país que no se amolde a sus condiciones. A lo largo de todos estos últimos años, la Argentina no sólo se sobrepuso a dicha premisa, sino que cumplió puntualmente con los compromisos asumidos a la salida del default, lo cual evitó las conocidas crisis financieras y/o políticas del sector externo. Y lo hizo mientras sostenía –y sostiene– en paralelo, un modelo sustitutivo de importaciones, que promueve la aplicación de estímulos fiscales para sostener actividad del mercado interno, el consumo popular y la inclusión social.

A esto se añade otra medida trascendental; el cambio de paradigma energético a partir de la recuperación de YPF. Hasta entonces, el petróleo se consideraba un commodity destinado básicamente a la ganancia empresaria de Repsol, a raíz de lo cual se secaron los pozos de gas y petróleo, se interrumpió la exploración y se sostuvo el giro de utilidades al exterior de modo de renovar el proceso en los pozos más jóvenes de otras áreas del planeta. A su vez, esto profundizó el drenaje de divisas porque se debieron abastecer los requerimientos del crecimiento industrial y del consumo de los particulares con importación de energía. El remplazo de este paradigma por el de “petróleo = palanca de desarrollo”, reorientó el reparto de ganancias hacia la inversión productiva y revirtió la curva importadora. En materia energética, la Argentina ha encontrado nuevos yacimientos de petróleo convencional, proyecta la exploración de su plataforma marítima, sus reservas de petróleo no convencional y gas de esa misma condición, además de atesorar una ingente reserva de litio y nuevos minerales, y una inmensa reserva de agua dulce y biodiversidad. -

Fondos Buitre (V)

Las posibilidades que abre el futuro

Tiempo Argentino, 12.08.14

En definitiva, es precisamente este ciclo virtuoso de autonomía financiera e inminente autoabastecimiento energético (previsto para el próximo quinquenio), lo que intensifica la virulencia de los factores de poder mundial frente al desafío de independencia relativa de criterio y dignidad nacional planteado por el proyecto que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Argentina, en el marco de una situación congruente de toda la región, atesora el tercer acuífero de agua dulce más grande del subcontinente, la primera cuenca de litio, la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencionales, además de sus reservas convencionales en el territorio y en su litoral atlántico, yacimientos de nuevos minerales, centrales nucleares, represas en construcción y un gran potencial de despliegue de energías mal llamadas alternativas, como la eólica. Dicho potencial, en el marco del desendeudamiento y la autonomía financiera, la sitúan en una inmejorable plataforma de lanzamiento hacia un futuro venturoso.

Pero el poder real también lo sabe, y es en este punto donde nuestras principales virtudes se convierten en el presente escollo, desde el momento que nos encontramos ante la confirmación de un nuevo paradigma de desarrollo. Es precisamente este punto, este lugar, este tramo del proyecto nacional y popular, el eje de una disputa entre los propios factores de poder mundial: aquellos que aceptan financiar un proceso de desarrollo en convivencia con las soberanías estatales –en este caso la nuestra– y aquellos que buscan desangrar cuanto antes las soberanías estatales, que se constituyen en un estorbo difícil de franquear para sus intereses, entre las cuales nuestro país se ha convertido en poco menos que un símbolo.

De aquí la tremenda presión de los grupos internos, su intento de que se desmadren los precios internos, su especulación a la hora de liquidar divisas, su pugna por devaluar el peso y secar las reservas del Banco Central. Y de aquí que esos mismos grupos internos, entre los cuales las cadenas hegemónicas de

medios operan como una palanca central, sean los portavoces de los fondos buitres que acechan nuestra soberanía.

Este es el eje de la disputa. El juez Griesa no está senil ni es un loco que se está cargando en contra a una parte importante de las organizaciones internacionales y gobiernos soberanos. Es una pieza central de un engranaje mucho mayor, vinculado a los intereses financieros más concentrados, las empresas de petróleo y los comerciantes de armas. Y, en términos políticos, a la derecha más extrema representada por el Tea Party dentro del ala republicana de los EE UU (aunque Robert Shapiro y Nancy Soderberg, y Robert Menendez y Marcos Rubio, miembros de la Task Force americana, pertenecen al partido demócrata) y a la desestabilización, por distintas vías, de los países emergentes. Es decir, en el fallo de Griesa hay un claro objetivo monetario, cuantificable, que está dado por el cobro de la totalidad de los bonos espuriamente comprados por Paul Singer y otros fondos de inversión de sesgo netamente usurario. Pero ese objetivo económico se inscribe en un marco político mucho más amplio, vinculado al rol que debemos tener a futuro los estados soberanos, los gobiernos populares, los pueblos, las democracias: pugnar en esa batalla frente a los poderes fácticos más concentrados, o caer definitivamente bajo sus garras.

Correlato en la política nacional.

La necesaria unidad del campo popular latinoamericano

Fuera de todo fundamentalismo ideológico, sino como resultado del análisis político que realizamos, los códigos procesales nacionales y el proyecto de reforma al código civil y comercial deben restringir de manera absoluta la posibilidad de que sea prorrogada la jurisdicción nacional, tal como sucediera en el pasado, es decir, la posibilidad de que un tribunal extranjero decida sobre los destinos de nuestro país.

Otro de los desafíos de la Argentina y la región frente a una relación más intensa con nuevos actores globales como el Grupo BRICS, y frente a los acuerdos estratégicos establecidos a partir de las visitas de Vladimir Putin y de Xi-Jinping, es afrontarlos a partir de criterios conjuntos capaces de prevenir y evitar

los perjuicios que ya conocemos de la relación centro-periferia. Por el contrario, el invalorable eje de cooperación Sur-Sur que supone esta nueva relación y los recientes acuerdos, deben transformarse en un círculo virtuoso gobernado por el criterio de ganar-ganar, esto es, de ampliar el universo de ventajas para ambas partes de la relación. Y asimismo, para fortalecer el marco de acuerdos regionales para vincularnos con otras áreas de la gobernanza mundial.

Las autoridades argentinas están actuando con idoneidad técnica y dignidad política. Todos los sectores de la vida nacional deberíamos encolumnarnos detrás de los grandes lineamientos del proyecto nacional –no únicamente gubernamental– tales como el aprovechamiento de nuestra posición geopolítica capaz de unir la región con el Pacífico, la autonomía financiera, el autoabastecimiento energético, el desarrollo industrial y tecnológico, el mercado interno, el empleo formal, la inclusión social, el incremento de derechos.

Así, una vez sorteada esta dificultad central que atravesamos, con mucha conciencia y capacidad de organización y movilización popular, podremos ser protagonistas de una epopeya que nos llevará definitivamente a la grandeza que anhelamos desde hace tanto tiempo.

Los hechos de Cuba y su contexto (I)

Tiempo Argentino, 09.01.15

La distensión de las relaciones entre Cuba y los EE.UU. debe analizarse dentro del presente contexto mundial.

El capitalismo más encarnizado, que encontró su apogeo durante los primeros años de George W. Bush, ya no vive ese esplendor. Hubo de por medio una grave crisis financiera. Y una profunda crisis de legitimidad, por la pérdida de credibilidad en un sistema que muestra desembozadamente su hipocresía a la hora de forzar supuestas ‘democracias’ por métodos que antagonizan con ella. A esta altura, ya nadie cree que se pueda llegar a la democracia a través de golpes y dictaduras. O sentar las bases de la supuesta ‘verdad’ de Occidente, a

través de falsas denuncias como la existencia de armas de destrucción masiva en Irak para justificar su invasión.

Ya nadie cree en la parodia que las cadenas hegemónicas bautizaron como “primavera árabe”, disfrazando de protestas libertarias lo que en realidad fue el financiamiento de sicarios fuertemente armados, con el fin de desestabilizar gobiernos elegidos y quebrar la estatalidad de países muy importantes para el balance de poder en Medio Oriente. Tampoco es creíble el armado de una guerra civil en Ucrania y el fallido intento de hacerlo también en Venezuela. La reciente comprobación pública de las torturas oficiales de la CIA como práctica masiva y habitual, no escapan a este proceso de deslegitimación, al tratarse de prácticas opuestas a los valores civilizatorios que se pregonan.

En correlato con esto, América Latina tiene margen para incidir en la agenda internacional como nunca antes lo había tenido. Hace poco más de una década, nuestros pueblos se hartaron de los ajustes brutales. Pero no siempre que un pueblo se harta, ello implica un avance social o político. Muchos pueblos de Europa también están hartos, pero no encontraron todavía un cauce político de mayorías. En cambio, la indignación sudamericana conectó con la emergencia de líderes populares como Hugo Chávez primero, luego Lula y Néstor Kirchner, y ahora con Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica, Cristina Fernández de Kirchner.

Más cerca en el tiempo, el fallo de Griesa a favor de los ‘fondos-buitre’ permitió a nuestro país plantear el eje de la regulación del capital financiero a nivel internacional, y ensanchar así ese margen de influencia.

En este marco, un Obama muy acorralado por los sectores más reaccionarios de su país y ayudado por sus propias claudicaciones, no pudo cumplir en sus primeros seis años de gobierno con su promesa de distender las relaciones con Cuba. En los últimos tiempos, menos pendiente de esas presiones, decidió tomar algunas de aquellas medidas, como la distribución de prisioneros de la cárcel de Guantánamo y el aflojamiento del bloqueo económico a la Isla.

El capitalismo más feroz está jaqueado de legitimidad por todos sus costados, es en ese contexto que el gobierno de Obama dispone la distensión con Cuba. Y

no debo omitir uno de los sucesos más recientes que refuerzan ese debilitamiento, y es la reelección de Dilma Rousseff en Brasil. Si la escasa diferencia electoral, en lugar de inclinarse hacia ella, hubiera favorecido al candidato de derecha Aécio Neves, muy otra sería la situación. Brasil habría desistido de la integración regional, y se habría alejado de los BRICS para volver a recostarse sobre su amistad histórica con los EE.UU. Habría sido todo un triunfo estratégico del libre mercado que abjura de toda connotación social y de toda regulación del Estado; habría envalentonado –en lugar de herirlos- a los grupos más reaccionarios, y dificultado el entorno para una medida como la de Cuba.

Es decir, se congregan dos tendencias: el deterioro de la legitimidad pública del capitalismo, con esta fortaleza de América Latina. Una fortaleza que, entre otras cosas, remplazó a la OEA y a los EE.UU. por un ámbito como la CELAC que fuera presidida por Cuba, o forzó al presidente colombiano Juan Manuel Santos a iniciar un proceso de paz con la guerrilla histórica de su país, y a concretarlo nada menos que en Cuba.

En suma, las relaciones internacionales atraviesan un momento muy intenso, y a la vez muy distante de la unipolaridad que siguió al fin de la guerra fría; una inocultable revalorización de la cuestión nacional como contrafigura de aquella ‘globalización’ a secas que los años noventa pujaron por imponer.

Los hechos de Cuba y su contexto II

Tiempo Argentino, 10.01.15

En el actual contexto de crisis del capitalismo y avance de América Latina, también intervienen otros protagonistas. Rusia no se deja amedrentar por las sanciones de “Occidente” y decide participar activamente en un nuevo reparto de zonas de influencia a nivel mundial. Asiló a Edward Snowden, agente arrepentido de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE UU tenazmente perseguido por ese país, detuvo en Naciones Unidas la intervención militar estadounidense en Siria, y separó a las provincias de Donetsk y Lugansk de la

Ucrania pro europea. En todos estos casos, ha contado en Naciones Unidas con el incalculable apoyo del voto chino, al mismo tiempo que, en su economía interna, ha dejado de utilizar los sistemas occidentales de crédito Visa y Mastercard, para pasar a utilizar la China Union Pay, que ya cuenta con el mayor número de usuarios en el mundo.

Ante la negativa del alicaído G-20 de reformular la estructura de los organismos financieros de posguerra (con un 15% del PBI mundial, su poder de voto no alcanza al 4% en el FMI), China apoyó –también lo hizo Rusia– la tesis argentina de impulsar la regulación del capital financiero internacional, al mismo tiempo que mantiene asociaciones económicas con 67 países y cinco organizaciones regionales, y ha firmado swaps con 25 bancos centrales del planeta. China y seis países de Europa central y oriental constituyen, a su vez, una zona de cooperación en energía e infraestructura. Sus ferrocarriles avanzan en toda la península indochina. La “Ruta de la Seda”, una extensa área de comercio, transporte multimodal y abastecimiento energético conecta el extremo oriente con Europa a través del territorio ruso e involucra a la India. Si los lazos entre China e India se aceptaran aún más, las instituciones financieras controladas por los EE UU dejarían de ser las más influyentes en el mundo, así como Japón, Corea del Sur y Hong Kong ya no controlan el comercio del Pacífico en nombre de los intereses estadounidenses. Respecto de Latinoamérica, China construye un canal interoceánico al sur de Nicaragua, que cambiará drásticamente la ecuación comercial hasta hoy dominada por los EE UU a través del Canal de Panamá. Y capitales brasileños aportan la inversión principal para la modernización del puerto de Maciel, a 45 km de La Habana, ciudad que estará comercialmente cada vez más activa.

Si bien se escabulleron 90 mil millones de dólares de sus reservas en pocas semanas a partir del aislamiento comercial y la baja del precio del crudo es utilizada como presión de los mercados occidentales sobre ella, Rusia aumenta su influencia geopolítica en esta reconfiguración de bloques de poder. Es así como encabeza la Unión Económica Euroasiática, y acaba de acordar con China la supresión del dólar para el comercio bilateral.

CUBA. A escala de nuestra región, quien permanecía aislada en términos económicos tradicionales era Cuba; pero, en términos políticos, es precisamente su opresor –el imperialismo estadounidense– quien padece una profunda crisis de legitimidad. El papel del Papa Francisco con relación al tema, merece, por su parte, una serie de reflexiones que exceden a este trabajo.

En definitiva, el mundo está ante una nueva ecuación de poder. Ya no es el mundo unipolar que sucedió a la caída del Muro, sino un mundo en el que aparecen nuevos actores, tanto en lo económico como en lo político. Y esto confiere a los gobiernos populares de América del Sur un margen mayor para aplicar políticas autónomas y establecer alianzas.

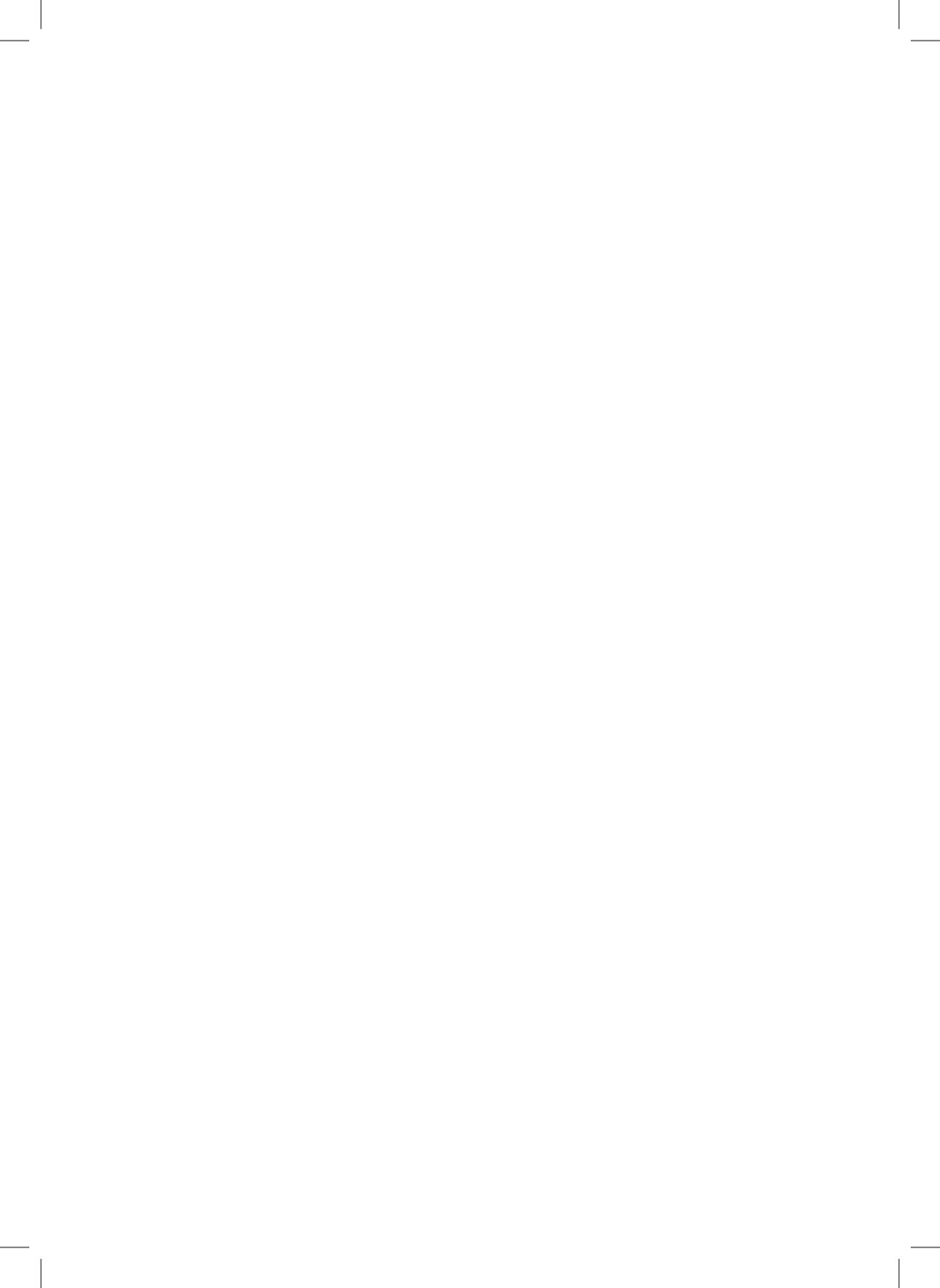
Por eso, cuando me han preguntado si el pueblo cubano será capaz de resistir una eventual reincorporación al capitalismo, me tomo de los siempre sabios conceptos de la periodista internacional Stella Calloni. Según ella, si los últimos acontecimientos se hubieran producido en el contexto del neoliberalismo, tal vez la respuesta hubiera sido afirmativa y desesperanzadora. Pero como se producen en un contexto de gobiernos populares en la región, en un clima de reafirmación de la integración, de más la Unasur, Petrocaribe, ALBA, moneda regional, todo esto va a ayudar a Cuba a resistir las tentaciones a las que seguramente será sometida. Hay fuerza política en la región, hay capacidad política en la dirigencia cubana, y fundamentalmente, hay mucha convicción, dignidad y autoestima en su pueblo, como para afrontar este proceso con inteligencia.

En una reciente visita a la ciudad de Bayamo, Cuba, para una conferencia en la Universidad de Granma, pude corroborar una vez más –además de la alta formación de los estudiantes y los docentes– que ante la remanida noción de “pobres cubanos, en Cuba falta esto y lo otro...”, el pueblo cubano sabe perfectamente todo lo que le falta. Pero esa no es la cuestión central. La cuestión central es que su cultura revolucionaria, renovada y vigente, le permite saber también que su felicidad no depende de poseer automóviles de alta gama. No lo digo ingenuamente, desde una mirada “naif”. El pueblo cubano es un pueblo alegre, aunque no cambie el celular cada tres meses. Creo, inclusive, que es más alegre aún que aquellos a quienes la colonización cultural del capitalismo los

conmina a creer que encontrarán su identidad en un celular de último modelo. Además de todos los avances políticos y económicos de nuestra región, además de la enorme ampliación de derechos del llamado “giro descolonial” que estamos protagonizando, está en debate la creencia misma de cuáles son los parámetros para medir la pujanza y la grandeza de un pueblo. ¿Se trata nada más que de los parámetros materiales, tal como nos adoctrinó la colonización cultural del capitalismo desenfrenado? No necesariamente. El concepto de “buen vivir” acuñado en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, dan cuenta de una idea de la felicidad mucho más abarcadora que lo meramente material.

Tanto a nivel mundial, como regional y nacional, estamos en medio de un proceso muy intenso, apasionante. No está garantizado su “final feliz”, que, por otra parte, es una construcción y no una categoría preestablecida. Pero sí sabemos que se nos ha abierto un espacio para luchar por la igualdad, algo que en el pasado no muy lejano pensábamos inasible. En los años noventa el mundo iba en un camino único hacia el puro materialismo, inmersos en una cultura según la cual eran el frenesí por el consumo y el individualismo los valores que iban a gobernarnos inexorablemente.

Hoy estamos tratando de construir un mundo, una región y una Argentina sobre otros valores. Vemos en un horizonte más cercano valores como la igualdad y la solidaridad. No dicho en términos románticos –aunque ¿por qué no?– sino también éticos y políticos. Una vez derrotada recientemente en los comicios de Bolivia, Uruguay y Brasil, la derecha hará lo indecible para interrumpir el proceso argentino. Y, una vez más, nuestro pueblo les dirá que no está dispuesto a volver al trágico pasado que nos proponen.



Este libro de terminó de imprimir
en el mes de marzo de 2015
en los talleres de Simagraf
Ciudad Autónoma de Buenos Aires